

**INFORME A LA COMISIÓN PARA
EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD CEV:**

**“VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
EN RAZÓN DE SU VINCULACIÓN AL SECTOR PRODUCTIVO”**



INFORME A LA COMISIÓN PARA
EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD CEV:

“VÍCTIMAS DEL **CONFLICTO ARMADO**
EN COLOMBIA EN RAZÓN DE SU
VINCULACIÓN AL **SECTOR PRODUCTIVO**”

Instituto de Ciencia Política Hernán
Echavarría Olózaga
ICP

María Clara Escobar
Directora Ejecutiva

Carlos Augusto Chacón
Director Académico

Investigador Principal
Hugo Ramírez

Asistente de Investigación
Daniela Correa

INICP
DESDE 1987

Ilustraciones y diseño: Natalia Pedraza Pérez

Contenido

INTRODUCCIÓN	pag.8
“No era algo en contra mía”	pag.25
“Diferido en varias cuotas”	pag.35
“Nos mandaron a dormir y no nos dejaron grabar”	pag.41
“Trabajar para los demás”	pag.45
“Se ajusta o se acaba”	pag.49
“Hay un rumor”	pag.59
“Trabajar como los caballos, mirando para adelante”	pag.65
“Si oyen tiroteos, por favor apaguen la luz”	pag.69
“Una guerra que no nos han contado”	pag.75
“La verdad es la esclavitud de cualquier representación”	pag.81
“Un hombre que tiene sus árboles sembrados no puede irse”	pag.87
“Transporte a esta gente”	pag.93
“Nos la estamos jugando”	pag.97
“Esta es la finca y este es un crucifijo”	pag.101
“Nos dedicamos a seguir adelante”	pag.113
“Historias cruzadas del comercio antioqueño”	pag.119
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	pag.126
SOBRE EL ICP	pag.148



“Hay muchas malas razones para empezar una empresa.

Pero solo hay una buena razón y creo que sabes cuál es: para cambiar el mundo”

Phil Libin



Introducción

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia ha buscado a través de distintos diálogos, reflexionar sobre las razones del conflicto y los mecanismos de resistencia frente a la guerra. Y es que como la misma CEV lo ha explicado en diferentes escenarios:

“A la Comisión de la Verdad se le ha sido encomendado contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido en el marco del conflicto armado, mediante un relato que motive la reflexión ética y política para no repetir la tragedia vivida. La Comisión debe explicar el impacto humano y social del conflicto, incluyendo el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales” (Comisión de la Verdad, 2020).

En medio de este mandato, es importante reconocer que **algunos sectores han sentido la misma preocupación de que sus voces puedan ser menos escuchadas, valoradas, o juzgadas desde raseros distintos**, a pesar de que la CEV y el conjunto de los acuerdos han insistido en poner a las víctimas como centro de todo el proceso.

Está claro que en el marco del mandato de la CEV y para que podamos avanzar en la construcción de paz, es necesario, en medio de unas dinámicas de violencia que aún persisten en diversas regiones del país, encontrar y visibilizar la verdad que no está documentada, que escapa a textos oficiales y narrativas académicas.

El informe que presentamos justamente busca **nombrar las afectaciones de un sector tan plural y heterogéneo como lo es el sector productivo**, un concepto que en los últimos años se ha convertido en una suerte de significativo vacío que agrupa personas, empresas, gremios, con distancias geográficas, políticas, y con concepciones muy diferentes de aquello que significa la productividad, aunque con una característica común: generar fuentes de ingresos y de empleo, desarrollo económico pero también social y crear y dinamizar la economía lícita de los lugares a los que pertenecen, creando oportunidades y contrarrestando el efecto de las economías ilícitas que diversos actores y grupos criminales controlan, junto con el territorio y la población.

Cuando hablamos de los sectores productivos, encontramos una pluralidad de conceptos que no deberían escapar a la mirada de la CEV, lo que de entrada nos habla de la complejidad del reto que enfrentamos. Barón & Riascos (2019) explicarán en este contexto:

“Son muchas y diversas las maneras de referirse a los actores económicos en los distintos informes (e incluso al interior de los mismos): “gremios”, “sector económico”, “sector industrial”, “sector agrícola”, “terratenedores”, entre las más comunes (...) Estas denominaciones parecieran hacer referencia tanto a personas jurídicas de carácter público, privado o mixto (nacional o transnacional), como a personas naturales que realizan actividades empresariales y de emprendimiento, e incluyen asociaciones o agremiaciones de empresas, comerciantes, prestadores de servicios y terratenientes. Sin embargo, para el caso colombiano, este tipo de nociones debería considerar los vínculos y fronteras generadas entre las economías formales e informales, así como entre legales e ilegales” (Barón & Riascos, 2019, p.42).





Las empresas y emprendimientos como fenómeno social han acompañado la historia del ser humano desde sus inicios, hacen parte intrínseca de nuestro ADN social, y en un proceso tan importante como el que tiene a su cargo la CEV no podemos descuidar este amplio frente. Es así como consideramos entonces, que la segunda cuestión pasa justamente por reconocer que la importancia de los sectores productivos es tal, que incluso en distintas regiones del país, estos emprendedores son quienes se encargan de subsanar los vacíos del Estado, pero también quienes han estado en la mira de los grupos al margen de la ley como una manera de desestabilizar la nación a través del ataque directo a las cadenas productivas.

Bajo el estigma de los “gremios” y “empresarios” como entidades abstractas, familias han sido destruidas, negocios han sido llevados a la ruina y muchas historias personales de dolor y resiliencia en medio del conflicto no han sido nombradas. Y corren el riesgo de quedar en el olvido. Además, estas personas siguen sufriendo de patrones de violencia que se repiten ante la ausencia de protección efectiva por parte del Estado y a causa de unas narrativas e imaginarios que legitiman o justifican la acción política violenta contra aquellos que hacen parte del sector productivo.

Las historias de vida aquí contenidas nombran los **dolores, angustias y mecanismos de resistencia de personas que, por su vinculación al sector productivo, pueden dar un relato íntimo de los hechos victimizantes que desde su propia experiencia han vivido y atestiguado.** Consideramos que estos relatos constituyen un fragmento importante para saber qué nos pasó y por qué pasó, para ampliar ese relato de la verdad que nos permita encontrar pistas que nos lleven a pensar en escenarios del posacuerdo que contribuyan a la no repetición.

Ausencias y presencias del testimonio del sector productivo

La participación del sector productivo tanto en los conflictos, como en el mantenimiento de la paz, es una de las piezas perdidas en el rompecabezas de los estudios de paz y en la implementación de los mecanismos de la justicia transicional (Peine y Pereira, 2018, citando a Bohoslavsky y Opgenhaffen, 2010). No quiere decir esto que los sectores productivos hayan estado al margen de estos escenarios, como si la productividad pudiera aislarse de las condiciones objetivas que rodean un conflicto, pero lo que sí nos indican distintos referentes, es que la mirada sobre los sectores productivos sobre todo, se ha trabajado desde la complicidad de algunos actores económicos con actores ilegales o represivos por diversas razones.

La investigación referente a la complicidad de los actores económicos en procesos de justicia transicional, se hizo evidente a partir de los juicios de Nuremberg (Dejusticia, 2018), y posteriormente otros mecanismos más recientes de justicia transicional buscarían involucrar, también, al sector económico. La investigación de Dejusticia (2018, p.27) evidencia que de “39 comisiones de la verdad en 30 países [...] más de la mitad reconoció la participación de actores económicos en violaciones de los derechos humanos (22 o 56%) [...] La proporción de países que investigaron la complicidad empresarial a través de comisiones de la verdad asciende al 63% o 19 de 30. Un total de 321 actores económicos fueron nombrados por estas comisiones”. Esta misma puntualidad en los datos no pudimos encontrarla en lo que se refiere a personas víctimas por su vinculación al sector productivo.

No debe mal interpretarse nuestra preocupación por la ausencia del relato de las víctimas, y de las afectaciones al sector productivo, como una forma de excusar crímenes en los casos de quienes los hayan cometido. Las experiencias internacionales han demostrado con evidencias muy concretas, casos en los que relaciones entre actores económicos del sector productivo y grupos armados al margen de la ley causaron terribles consecuencias. Por no ir más lejos, en nuestra región en 2014, la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil presentó un informe en el que señalaba la complicidad de empresas nacionales e internacionales en ese país, con la dictadura militar que derrocó al entonces presidente, Joao Goulart (Boholavsky y Cruz, 2020).

En nuestro país, la preocupación sobre el tema se ha centrado, sobre todo, en las formas de relacionamiento de terceros civiles con fenómenos como las autodefensas y la contrainsurgencia paramilitar y con una evidente asimetría de atención e información sobre las relaciones de sectores civiles con la lucha insurgente de los grupos guerrilleros,

bajo distintas formas y usos de la ingeniería de la violencia y de la combinación de todas las formas de lucha; con diversidad de características de acuerdo a las dinámicas territoriales, políticas, sociales y económicas en contextos históricos concretos.

Investigaciones académicas y periodísticas han dado cuenta de que una de las formas más reiteradas de relacionamiento de determinados actores del sector productivo con grupos armados ilegales en el marco del conflicto, se ha dado mediante la financiación, ya sea voluntaria o coaccionada.

Debido a esta histórica invisibilización de los terceros civiles en los conflictos armados, son aún más escasas sus participaciones en los procesos de rendición de cuentas y construcción de verdad. En Colombia, mecanismos de justicia como los de la Ley 975 de 2005 en el marco del proceso de Justicia y Paz, han vedado a sectores que fueron victimizados al acceso a la verdad, justicia y reparación, al igual que a la posibilidad de dar su versión sobre lo sucedido para que exista plena claridad, y por lo tanto, verdad sobre el nivel de participación de determinados actores de la sociedad civil productiva y la forma en que se dio esta participación, especialmente para establecer los casos en los que se trató de cooperación voluntaria o sometimiento armado y presión insuperable. Por ejemplo, la justicia ordinaria ha concluido procesos como el de Urapalma (Fiscalía General de la Nación, 2017), Chiquita Brands (Diagama & Vargas, n.d.), (El Espectador, 2018) y ha abierto procesos en contra de otros miembros de empresas por presunta financiación del paramilitarismo (Verdad Abierta, 2019), pero esto no puede tomarse como una muestra lo suficientemente representativa para establecer una tendencia sobre el papel del empresariado en el marco del conflicto armado.

Esevidente entonces, desde una perspectiva comparada, que ha primado una narrativa que podríamos denominar dominante y hegemónica, con sesgo ideológico e instrumentalizada por determinados actores políticos y académicos, que usan hechos y casos específicos para crear generalidades sobre el empresariado como victimario de los conflictos armados. En algunos casos se adelanta una irresponsable homogeneización de los sectores económicos, con el objetivo de tratar de comprender y explicar rápidamente y fácilmente los conflictos y de ajustar la narrativa sobre las dinámicas de la violencia rotulando a determinados

productos (palma, banano, caña) y sistemas de producción (minería, hidrocarburos, ganadería), automáticamente como perpetradores. Esto ha derivado en una peligrosa estigmatización y por supuesto en la invisibilización de los hechos victimizantes y de las afectaciones que han sufrido las personas vinculadas a éstos, deshumanizándolas y revictimizándolas. En su texto, “Participación tenue, resultados imprecisos. Empresarios en las Comisiones de Verdad de América Latina”(2019), Luis Fernando Barón y Catalina Riascos, mencionan en concordancia:

“En mayor detalle, este estudio sostiene que 22 de las 39 comisiones que incorporaron el tema de los empresarios, no planearon adecuadamente el impacto de esta variable; y se dio insuficiente importancia al tema. Por lo anterior, los resultados de la participación y vínculos de los EEE [empresarios, emprendedores y empresas] en esas comisiones han sido más implícitos que explícitos (Sánchez et al.: 18-19). De hecho, solo una comisión, la de Liberia, incluyó claramente el tema en sus mandatos” (Barón y Riascos, p. 40, 2020).



Retos de la verdad del sector productivo en Colombia

Uno de los principales retos a los que se ha enfrentado la Justicia Transicional (JT) en Colombia es la participación integral de todo tipo de actores en sus diferentes instancias. En particular, la búsqueda de participación del sector productivo se ha visto obstaculizada, entre muchos otros motivos, por las diferencias de percepción y opinión sobre los acuerdos para la terminación del conflicto y de las consecuencias que su implementación ha tenido, particularmente en los territorios donde persiste la violencia y la acción criminal de diversos grupos armados y delincuenciales organizados. La politización alrededor del Acuerdo del Teatro Colón y de los mecanismos que lo componen, han generado ciertas distancias por parte de quienes sienten que la disposición de escucha de las diferentes instituciones de la JT, depende de la posición política o filiación sectorial de quien rinde el testimonio. Tal y como lo reportó La Silla Vacía, pocos eran los empresarios que se habían acercado a la Comisión de la Verdad

“El informe del sector petrolero, (...) es más una excepción que la regla. En año y medio de funcionamiento, es uno de los muy pocos que el sector privado ha entregado, subrayando cómo la Comisión debe todavía ganarse la confianza de los sectores de la sociedad colombiana que han sido más escépticos de su trabajo (...) Pero no le ha ayudado con cuatro grupos específicos priorizados: agricultores, ganaderos, comerciantes y empresarios. La distancia ha sido mutua: ningún comisionado viene del sector privado y tampoco hubo líderes empresariales que se postularan para serlo. El resultado es que la Comisión, desde los comisionados hasta sus equipos de investigación y sus enlaces territoriales, conocen y se relacionan poco con el mundo empresarial” La Silla Vacía (2020).

En la misma vía, la perspectiva de Barón & Riascos (2019) explica cómo los informes finales de las Comisiones de la Verdad instauradas hasta la fecha, refuerzan la preocupación de empresarios, emprendedores y empresas (EEE), sobre la manera en que

“Los informes y metodologías tanto de las comisiones del mundo como las de Colombia y del continente, evidencian que los EEE no fueron considerados ni integrados, orgánica o de manera significativa en sus procesos y resultados. La participación de estos agentes económicos en este tipo de organismos, no ha sido ni sistemática ni conducente a hallazgos claros y complejos en relación con sus vínculos, victimización y responsabilidades en experiencias de violencias y de conflictos armados (...) muy poco se incluyeron o se reportaron los vínculos y roles de los EEE, ni en los conflictos, ni en la búsqueda de la reconciliación y la convivencia (...) Por lo general, sus informes dan cuenta de las acciones y responsabilidades de gobiernos, instituciones del Estado y fuerzas militares involucradas en las violencias, así como de los individuos y organizaciones que las enfrentaron. Los empresarios, cuando aparecen, son presentados en dinámicas y episodios puntuales como cómplices de estas instituciones” (Barón & Riascos, p.p. 39-42, 2020).

Frente a este escenario nos quedan algunas preguntas que aunque necesarias, podrían quedarse sin respuesta. ¿Qué pasa con las afectaciones de los actores económicos durante el conflicto? ¿Cómo afectó la guerra a la productividad, a la pérdida de oportunidades de inversión, rentabilidad y seguridad de sus negocios? ¿De qué manera contribuye a la reconciliación la estigmatización de los sectores productivos?. Además de estas preguntas, resulta de la mayor importancia considerar si las dinámicas de la violencia estuvieron motivadas por razones políticas y operativas de los grupos criminales que las implementaron para la extracción de rentas de forma ilícita para su financiamiento, al tiempo que buscaban desincentivar la función productiva y afectar el espíritu emprendedor de los ciudadanos que buscaban contribuir al desarrollo de sus comunidades, de forma tal que pudieran imponer un monopolio de economías ilícitas bajo su control.

Es necesario reconocer como una variable del análisis para el esclarecimiento de la verdad, que la naturaleza de la lucha armada en Colombia tiene un trasfondo ideológico que considera como un enemigo a los agentes del modelo económico de libre mercado, lo que a su vez hace eco en aquellos que pretenden asignarle responsabilidades al Estado por el conflicto armado, buscando responsabilizar al modelo de libre empresa reconocido en la Constitución Política de 1991.

Este texto, y las historias aquí contenidas, son justamente un esfuerzo por llenar ese gran vacío y por reconocer las afectaciones del conflicto al sector privado, como un objetivo estratégico de los violentos contra generadores de desarrollo socioeconómico y constructores de oportunidades (que por añadidura son otras formas de construir Estado) quienes tuvieron que desistir de proyectos, renunciar a sus inversiones, y desechar años de esfuerzos y tradiciones familiares ante los desencuentros y atrocidades de la guerra. Es así como “la necesidad de incluir sus experiencias, voces y perspectivas, (...) es útil no solo para la legitimidad de las comisiones, sino primordialmente para la construcción de verdad, de reconciliación y convivencia entre diferentes personas y sectores sociales en diversos territorios” (Barón y Riascos, p.43, 2020).

¿Por qué deben los sectores productivos participar en el relato de la verdad en Colombia?

El sector productivo en Colombia, en medio de un conflicto armado de larga data, ha protagonizado diversos procesos de articulación social, sobre todo en aquellas zonas llamadas “periféricas” (Barón, Wills, 2018). **Su quehacer ha trascendido la mera visión productiva y ha estimulado procesos de desarrollo comunitario. Los empresarios y comerciantes han aportado históricamente** “al bienestar, al tejido social y a la solidaridad como se puede ver en la participación de empresarios en procesos de planeación y desarrollo regional, o en la generación de espacios y empleos que involucran diversos actores del conflicto, o en el accionar de fundaciones empresariales” (Barón y Riascos, p.61, 2020).

Como sugiere Chaves (2015), lo público hoy ha trascendido la tradicional faceta estatal. Existen muchas otras formas y sentidos de lo público: “puede designar, o bien una comunidad política o civil, una disposición a la pluralidad, una condición de accesibilidad universal y un acuerdo de voluntades sobre los intereses comunes, o bien una representación de los colectivos sociales admitida por ellos mismos” (Chaves, 2005, p.10). El sector productivo ha estado históricamente implicado, no solo en la regulación y mediación social, también en la construcción de sentidos de lo público durante años de fragmentada ausencia de la institucionalidad en Colombia. Las empresas han sido gestoras del desarrollo y supervivientes de la violenta guerra. **Han erigido nuevas formas de lo público y se han convertido en actores y referentes de las comunidades que las rodean, transmitiendo valores e impulsando transformaciones encaminadas a superar la pobreza y los contextos de violencia e ilegalidad.**

Si bien la literatura académica y la sociedad suele visibilizar a las empresas, en contextos de posconflicto (en este caso, de pos-acuerdo), como perpetradores, financiadores e incendiarios de la guerra, como hemos insistido, persisten silenciados sus dolores y sus afectaciones en el marco del conflicto armado colombiano. Reconocer estos rincones silenciados de las memorias nacionales permite comprender el conflicto como un enfrentamiento con diversas y heterogéneas víctimas. Emprendedores, empresarios empíricos como muchos se auto perciben, generadores de empleo, constructores de oportunidades, tuvieron que desistir de proyectos, renunciar a sus inversiones, retirarse de los territorios, desechar años de esfuerzos ante los desencuentros de la guerra.



Y, aunque hablar de empresas implica una abstracción jurídica, **es menester reconocer que eran las personas quienes, encarnando la función social empresarial y la misión del sector productivo, sufrían las más atroces consecuencias de la violencia.**

No podemos excluir a los sectores productivos de la violenta realidad nacional y de los objetivos ideológicos, políticos y estratégicos de los grupos armados. Para evidenciarse ellos también como víctimas del conflicto armado, es necesario escuchar sus voces, sus testimonios y relatos y sus formas de resistir y sobrevivir a la guerra. Sus historias esperamos permitan, además, trascender las dicotomías morales del conflicto armado colombiano.

Como habría dicho Ngozi Adichie (2018), **son precisamente los relatos divergentes, los que quebrantan la historia hegemónica, pero también los que pueden utilizarse para facultar y humanizar, para restaurar la dignidad de un colectivo.** Dignificar a todas las víctimas de la violencia implica, entonces, como lo propone Maria Emma Wills, “cultivar una memoria dispuesta al encuentro y a la conversación que permita a personas provenientes de diversos y hasta opuestos sectores sociales reconocerse mutuamente en su victimización y humanidad para, desde ese lugar de reconocimientos mutuos, propiciar un sentido de comunidad” (Wills (2018) p.12).

Se dice con razón que aquello que no se nombra, no existe. Muchos de estos procesos de justicia transicional parecen haber silenciado la realidad del andamiaje del desarrollo, del sustento de la articulación económica y social. **Por tanto, parece haberse suprimido la relevancia del sector empresarial en la construcción de un país que, incluso en medio de la guerra, logró reducir la pobreza extrema y facilitar los procesos de movilidad social.**

La verdad es polisémica, posee múltiples caras. Desconocer la versión del sector productivo puede derivar en una comprensión limitada y sesgada del conflicto. Las miradas sobre este no pueden ser homogéneas, maniqueístas ni totalizantes: las expresiones del conflicto son tan diversas como los territorios y como las personas mismas. Por tanto, la relación que tuvo el sector productivo con sus respectivas geografías es divergente. Con urgencia, los relatos de la verdad deben trascender la visión villana de los empresarios en estos años de conflicto, guerra y violencia sistemática contra los agentes económicos de todos los tamaños, conformando un informe que no sea “políticamente correcto” para satisfacer a sectores particulares, tal y como el mismo Padre Francisco de Roux lo ha asegurado en diferentes escenarios.

Hoy Colombia posee una oportunidad única: **construir una verdad de la que todos los afectados se sientan portadores y puedan reconocerse.** Escuchar una verdad que hasta ahora ha permanecido invisibilizada. Unificar los relatos de las víctimas y reconocer las estrategias desarrolladas por los miembros del ecosistema empresarial que incluye empresarios, trabajadores, proveedores, contratistas, entre otros, para sobrevivir, resistir al conflicto y a sus violencias. Fortalecer, además, la construcción de memorias del sector económico y reivindicar su papel central, protagonista en la supervivencia y desarrollo de la sociedad.

La participación del sector productivo en los mecanismos de justicia transicional originados en el Acuerdo del Teatro Colón, además de proveer una visión más amplia del conflicto, encaminan y propician mejores escenarios para la reconciliación. “La reconciliación política es un proceso en el que el daño causado por la violencia política es reparado de tal forma que se restablece un nivel básico de confianza” (Nordquist, p. 50, 2018). **La verdad integral, la recolección de los relatos de todos aquellos afectados directa o indirectamente por el conflicto, ara el terreno para la reconciliación.** El mutuo reconocimiento y humanización a través de lo que Nussbaum (2014) llamaría “imaginación narrativa”, reduce la estigmatización, y propicia la conversación. La construcción de paz y la convivencia ciudadana se sustentan en la confianza. Esta necesita superar las estigmatizaciones y la instrumentalización ideológica de la narrativa sobre el conflicto, sus causas y dinámicas, que buscan crear categorías de víctimas y asignar responsabilidades a partir de generalidades que se crean de hechos específicos e individualizados.

Construir una verdad intersectorial propiciaría, entonces, un relato integral: una historia de la que cualquier víctima se siente protagonista. Establecería, además, una confianza básica entre víctimas, perpetradores y la sociedad en general” (Nordquist, p.52, 2018), a partir de una verdad que es a su vez reconocimiento (De Gamboa, 2019). Finalmente, posibilita escenarios de horizonte común, donde se reconstruyen los lazos y alianzas entre sectores, quienes creen y crean la idea de un futuro posible y compartido (Fisas, 1998).

La experiencia de vida como aporte a la verdad del conflicto

El presente informe está elaborado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga -ICP, un centro de pensamiento colombiano de origen empresarial, de carácter privado, independiente y apartidista, cuya misión es promover la actualización y difusión de los principios y valores de la democracia pluralista, la economía de mercado y los derechos del individuo, como indispensables para el perfeccionamiento de las instituciones públicas de Colombia, su vida política y el consecuente desarrollo económico, cultural y social del país (Acta de Constitución del ICP).

Reiterando su compromiso con la democracia y el respeto por sus instituciones, el ICP emprendió con sus propios recursos y equipo investigativo, en acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, quien reconoce las alertas que hemos desarrollado anteriormente, el ejercicio de convocatoria y escucha de distintas voces de los sectores productivos y su esfuerzo por apoyar la construcción de la verdad.

A nivel metodológico, este documento se caracteriza por dos apuestas inéditas. La primera de ellas, está en la buena fe de poner a disposición de la Comisión de la Verdad la confianza que el ICP ha desarrollado tras largos años de trabajo con los sectores productivos, para llevar a cabo un ejercicio de escucha que no buscó exclusivamente centrarse en un escenario político, geográfico o sectorial, sino que **propugnó por consolidar un espacio que destaca justamente la pluralidad de un colectivo social para reconocer tantos sus afectaciones transversales, como sus diferentes formas de vivir un mismo hecho relacionado con el conflicto.**

La segunda apuesta, consistió en **desarrollar una investigación sui generis en el campo de los sectores productivos, la cual pasó por la renuncia al recurrente formato de presentación de estadísticas, documentos legales, pruebas, indicadores y demás recursos tradicionalmente desarrollados cuando de productividad se habla, para acorde al mandato de la Comisión, generar un espacio de escucha en el que a partir de múltiples técnicas de investigación** (archivos, entrevistas a profundidad, historias de familia, etc.), lográramos consolidar un relato narrativo de aquello que las personas querían contar. Lo más importante para nosotros fue lograr que estos valiosos encuentros, pudieran derivar en relatos en los que todos podamos reconocernos en términos de una humanidad compartida.

Estas reconstrucciones, tuvieron que enfrentar distintos retos relacionados con los vacíos de la memoria, las complejas interpretaciones del pasado en función del presente, y en algunos casos, el delicado trabajo que implica la no revictimización a través de estos escenarios. El espacio de escucha de estos testimonios contó no sólo con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por la pandemia de la Covid 19, sino que a su vez partió de un ejercicio estructurado en el que se tuvieron en cuenta estas variables tanto durante la recolección de los testimonios, como en el proceso de redacción y verificación de los mismos.

Si bien es novedosa esta apuesta en el campo de los sectores productivos, es de amplio reconocimiento en las Comisiones de la Verdad instauradas, el valor del testimonio y la historia oral, donde la representatividad estadística, incluso el número de veces que se registre un mismo hecho, pasa a segundo plano cuando se **reconoce el valor que la experiencia directa de lo vivido puede aportar a la reconstrucción de procesos más generales.** En Colombia, trabajos tan importantes, como el de *Juan Gregorio Palechor: historia de mi vida*, de Myriam Jimeno (2005), entre otros tantos ejercicios desarrollados desde la antropología y sociología, como los textos del Comisionado Alfredo Molano, son valiosos referentes de esta apuesta de escritura y aporte a la comprensión de una problemática particular.

No podemos dejar de insistir en la difícil tarea que fue el compilar estos testimonios en el contexto actual, no sólo por el reto que representaron los límites de tiempo para la realización del documento, sino también por la extrema desconfianza que circula en cuanto a cómo pueden llegar a ser leídas o interpretadas las propias experiencias. Muchas de las condiciones del conflicto que aquí se relatan, siguen siendo parte de un presente que lleva a muchas de las víctimas del sector productivo consultadas, a preferir guardar silencio como la única forma que han encontrado de protegerse en medio del conflicto y continuar con sus emprendimientos y labores.



Referencias

- Barón, L. F., & Riascos, C. (2020). Participación tenue, resultados imprecisos. Empresarios en las Comisiones de Verdad de América Latina. Precedente. Revista Jurídica, 16.
- Barón, L. F. y Wills, M. E. (eds.) (2018). Empresarios, guerras y memorias. Testimonios desde el Pacífico Colombiano. Cali: Editorial Universidad Icesi y CNMH.
- Bermúdez, A., 2020. LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y LOS EMPRESARIOS AÚN NO LOGRAN VENCER LA DESCONFIANZA. *La Silla Vacía*, [online] Available at: <<https://lasillavacia.com/historias/silla-nacional/la-comision-de-la-verdad-y-los-empresarios-aun-no-logran-vencer-la-desconfianza/>> [Accessed 1 July 2021].
- Bohoslavsky, J.P y Cruz, J. (2020). Agenda Estado de Derecho (online). ¿Qué precio paga Volkswagen por colaborar con la dictadura brasileña?. Disponible en: <https://agendaestadodederecho.com/que-precio-paga-volkswagen-por-colaborar-con-la-dictadura-brasileña/>
- Chaves, M., & Montenegro, M. (2015). Usos y sentidos contemporáneos de lo público. Revista Colombiana de Antropología, 51(1), 7-23.
- Comisión de la Verdad. [Comisión de la Verdad]. (2020, 7 de mayo). Ignacio Piedrahíta en Nombrar lo Innombrable [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=7TQDkZNG6aM>
- De Gamboa, C. “La memoria como política y las responsabilidades que se derivan del pasado”, *Ideas y Valores*, Universidad Nacional, Suplemento No. 5 Filosofía y Violencia. Voces Femeninas, Vol. 68: 81-104 (2019). Disponible en: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/809/80963424005/html/index.html>
- Diagama, Jessica Milena, and Karen Lisette Vargas. n.d. “LA INCLUSIÓN DE TERCEROS COMO ACTORES ECONÓMICOS EN LA JUSTICIA TRANSICIONAL COLOMBIANA”. Universidad Libre. <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/16000/LA%20INCLUSION%20DE%20LOS%20TERCEROS%20COMO%20AGENTES%20ECONOMICOS%20EN%20LA%20JUSTICIA%20TRANSICIONAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- El Espectador. 2018. “La Historia Que Llevó A 14 Empresarios De Chiquita Brands A Juicio En Colombia”, 2018. <https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-historia-que-llevo-14-empresarios-de-chiquita-brands-juicio-en-colombia-articulo-857088/>.
- Kopper, C. (2017). VW do Brasil in the brazilian military dictatorship 1964-1985: a historical study. https://www.volkswagenag.com/presence/konzern/documents/history/Historische%20Studie_Christopher%20Kopper_VW_B_DoBrasil_14_12_2017_ENGLISCH.pdf
- Medina-Vargas, I., Bolaños-Martínez, Y. y Barón, L. F. (2019). Paseo, sancocho y río. Memorias y olvidos sobre el conflicto armado en Pance, Cali. Revista CS, (28), 47-85. <https://doi.org/10.18046/recs.i28.3268> Disponible: Revista CS 28 en: https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/issue/view/279
- Ngozi Adichie, C., 2018. El peligro de la historia única. 1st ed. Madrid: Penguin random House.
- Nordquist, K. (2018). La reconciliación como política: el concepto y su práctica. Primera edición. Bogotá: editorial Pontificia Universidad Javeriana. Fisas, Vicenç, (1998) Cultura de paz y gestión de conflictos, Barcelona, Icaria. Capítulos uno y once pp. 17-38, 349-394
- Nussbaum, M. C. (2014). *Emociones políticas*. Barcelona, España: Paidós.
- Sánchez León, N. C.; Payne, L. A.; Pereira, G.; Bernal Bermúdez, L.; Marín López, D. y Barboza López, M. (2018). Cuentas Claras, el papel de la Comisión de la Verdad en la develación de la responsabilidad de empresas en el conflicto armado colombiano. Bogotá: DeJusticia.
- Vendruscolo, S. (2020). Volkswalgen firma un acuerdo millonario por haber colaborado con la dictadura en Brasil. El país (online). <https://elpais.com/internacional/2020-09-25/volkswagen-firma-un-acuerdo-millonario-por-haber-colaborado-con-la-dictadura-en-brasil.html> [Accessed 1 July 2021].



“No era algo en contra mía”

Javier Ballesteros
Tumaco (Nariño)

En el año 2004, Javier, director de la planta de tratamiento de palma “Palmeiras” es secuestrado por el ELN. El grupo guerrillero buscaba extorsionar la empresa a través de su secuestro. El protagonista relata, instante por instante, la historia de zozobra que, hasta hoy, quiebra su voz.

Al municipio de Tumaco, llegué en el 2002 y estuve hasta finales de 2004. Fue justamente a finales de 2004 que sucedió todo este episodio que me hicieron pasar los del grupo guerrillero. Las autoridades en su momento me dijeron que se trataba del ELN. Pero no tengo muchos detalles. Ya han pasado más de 16 años y no tengo esos datos tan frescos.

Yo estaba estudiando y trabajando en la zona de Puerto Wilches, Santander. Ya de alguna manera, había tenido experiencia en la industria de la palma. Terminado mi segunda carrera, los señores de una empresa palmera en Tumaco me contactaron y me ofrecieron el cargo de director de planta, me pareció una buena oportunidad como crecimiento profesional y me fui a colaborar en la organización y conformación de la planta extractora.

Cuando llegué, las cosas parecían tranquilas, pero con el tiempo, las ideas van aterrizando y las realidades se van recrudeciendo. Los grupos armados empezaron a pedir vacuna, las famosas vacunas para sostener su aparato militar y pues, la empresa como una empresa legal, bien constituida, nunca estuvo de acuerdo con este tipo de financiamiento “obligado” y siempre nos mantuvimos, de alguna manera, lejos de aceptar esa situación. Entonces, ellos, la guerrilla, dejaban algunos papeles para recordarles a los dueños que tenían que dar la vacuna y como siempre la respuesta nuestra fue negativa. La situación, ante esa persistente negativa, fue acentuándose. Los grupos armados fueron haciéndose más presentes y no dudaron en enfatizar sobre su poder militar y su capacidad de infringir terror.



Don Carlos y Don Jorge —los hermanos Corredor— estaban en Miami. Yo les escaneaba y mandaba toda esta documentación guerrillera, en la cual se exigía “ponerse al día” con las vacunas. Ellos siempre se mostraron renuentes a financiar la guerra de estos grupos, posición que yo compartía. Sin embargo, aunque nunca pagamos, estos grupos buscaban la forma de hacerse escuchar: ya se escuchaba el comentario de que probablemente estaban haciendo presencia en la planta extractora. Por eso, algunos ingenieros optaron por renunciar. Yo, la verdad, nunca estuve de acuerdo con mostrarles temor. Así que decidí quedarme.

El secuestro

Este día, el de mi secuestro, si no estoy mal, era un fin de semana o un viernes, tal vez, ya entrada la tarde. De hecho, estábamos en un proceso de exportación de aceite. En ese momento la empresa se encargaba de exportar aceite a través del puerto de Tumaco y siempre es un poco compleja la operación al pasar los carrotanques en unos planchones, a través del río Mira, para llevarlos para Tumaco; entonces digamos que había una operación de embarque de aceite, que estaba un poco atrasada. El equipo de trabajo que me acompañaba, se estaba alistando para tomar su descanso quincenal en el municipio. Ese día se sentía tenso el ambiente, habían ya comentarios sueltos diciendo que la guerrilla iba a llegar. Aunque esos comentarios ya los habíamos escuchado antes, nunca había pasado nada. Sin embargo, por precaución, llamé a la busética que normalmente nos sacaba a Tumaco y le pedí que se adelantara, que se llevara a los trabajadores temprano. Todos los ingenieros se alistaron y a las 3:30 pm los hice embarcar en la buseta para que se fueran. Una vez terminara el embarque, yo iba a coger un taxi para volver a Tumaco.

Se terminaron yendo alrededor de las 5:30. Faltando un cuarto para las 6:00, llegó el ELN. Incursionaron violentamente, abrieron las puertas de una manera violenta y entraron con todos sus miembros a la planta extractora. En el momento que ellos llegaron, yo me encontraba en la báscula, que es un poco retirada de las oficinas administrativas, y estaba chequeando unos datos que se estaban presentando en el pesaje del fruto de la báscula, con la operaria que estaba ahí en ese momento. Levanté la vista hacia la portería y vi cualquier cantidad de uniformados, yo no pensé que fuera la guerrilla. “Vé, que

raro, por aquí nunca había visto ejército”, le digo yo a la señora. Entonces ella también mira y dice: “no, no es el ejército. Se acaba de meter la guerrilla”.

Llegaron ellos y se empezaron a distribuir, unos cogieron hacia la báscula, otros corrieron hacia las oficinas y yo, como tenía el radio, un radio de comunicación interna, lo apagué inmediatamente y lo tiré al bote de la basura que tenían ahí dentro de la báscula. Una vez llegaron a donde yo estaba, preguntan: “¿ustedes son operarios de aquí?. Bueno, salgan, salgan que vamos a hacer una reunión. Ahí empiezan a reunir a todo el grupo al frente de las oficinas administrativas.

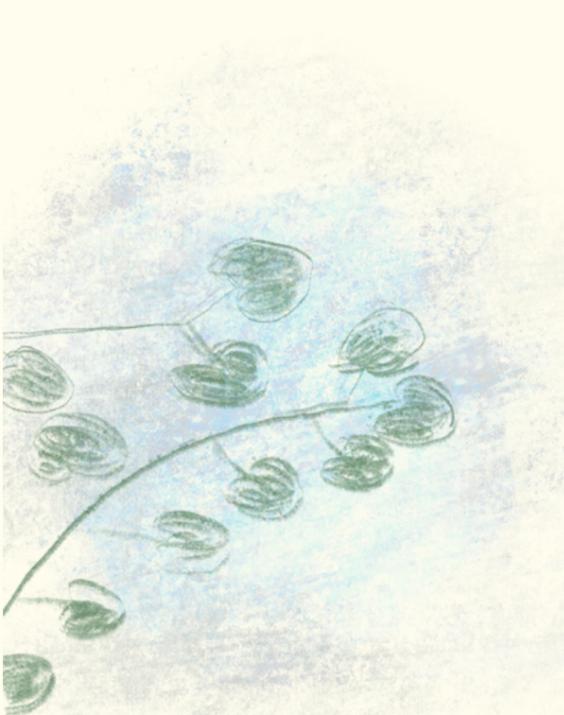
Primero hicieron todo un discurso sobre sus políticas. Yo me hice ahí, al lado de todos los trabajadores. Ellos -los del ELN- no me conocían, no sabían quién era yo específicamente. Al parecer, dentro de los trabajadores de la planta extractora había informantes. Los del ELN empezaron a preguntar por los directivos de la empresa. Con el dedo fueron señalando uno por uno. Cuando preguntaron quién es el director de la planta, yo sentí que un señor al lado mío me señaló haciendo un gesto. El señor del ELN me dijo: “el que está de camisa de este color, por favor, salga”. En ese momento se inauguró mi secuestro. Mis dos meses de secuestro.

El señor que me sacó de la planta, una vez salimos, armó su fusil, me apuntó y me dijo: “salga, salga para acá”. Entonces me saca aparte de todo el grupo, a un lado, me apunta y me dice:

—¿Usted es el director de la planta?
—Sí señor, yo soy.

Luego, empiezan a preguntar por los otros ingenieros de ese momento. Me apuntaron, me presionaban para responder. Les digo la verdad: ellos ya se fueron, se fueron para Tumaco. El hombre armado me acerca el cañón al pecho y me lo presiona con el arma. Me piden que diga la verdad, creían que les estaba mintiendo. Entonces yo le digo: “yo no tengo por qué decir mentiras, tú puedes preguntarle a cualquiera aquí y sabrán de que ellos se fueron hace más de media hora”.

Para corroborar esto, mandan a una mujer guerrillera a revisar la casa donde nosotros vivíamos. Nosotros vivíamos ahí dentro de la planta extractora en una casita de dos pisos. En la parte de abajo vivían en las habitaciones todos los ingenieros, yo vivía arriba; y, pues, ellos, como es normal, salieron



y dejaron sus puertas cerradas. La guerrillera llega al sitio donde dormitaban los ingenieros y, con violencia, irrumpe en las puertas, para verificar que efectivamente los ingenieros no estaban. Después de media hora, regresa la guerrillera confirmando que efectivamente no había nadie en esas casas. Entonces, me preguntan: “¿qué pasó?, ¿dónde están?” Yo le dije: “no, pues, ellos ya se fueron en una buseta, porque pues todos los fines de semana tenemos organizado ir a dar una vuelta a Tumaco”.

Inmediatamente manda a alguien en su carrito, un carrito que trajeron, para verificar si los ingenieros todavía estaban por ahí, porque solía demorarse el paso de un lado al otro lado del río, en el ferry. Una vez corroboran que ya se habían ido, se dan cuenta que solo me pueden llevar a mí, porque era el único ingeniero que quedaba en la planta. En ese momento, yo también estaba viviendo allá con mi esposa. Ella se acercó al grupo guerrillero y les preguntó: “bueno, ¿qué está pasando?, ¿qué van a hacer con Javier?”. Entonces le dice el señor: “no, tranquila señora, usted, ¿quién es?. Tranquila, lo vamos a llevar aquí a la esquina, más adelantico y hablamos con él y ya lo soltamos”. Me embarcaron en un Land Rover viejito y ella se montó también. El señor se mostró renuente, supuestamente el comandante, o el que estaba a cargo de esa operación, le insistió que se bajara. Ella no quiso bajarse y finalmente nos fuimos todos.

Ya eran casi las 6:30 pm. Emprendimos camino hacia el monte, hacia los caminos veredales. Luego fueron varias horas caminando para adentrarnos en la selva, en el monte, hacia el sur. A las 9:00 pm, caminando, llegamos a un caserío. Ahí les prestaron a los guerrilleros un par de caballos y continuamos nuestro camino, bien de noche. Los caballos entraron a unos humedales. Llegamos cerca a la frontera con Ecuador. Nos hicieron parar, ahí dormimos, nos quedamos una noche, todos llenos de barro, cansados. Amaneció, caminamos nuevamente medio día, para otro sitio donde nos tenían preparado un cambuche: un plástico negro que sirve como techo y otro plástico tirado en el piso, como si fuera colchoneta. En ese lugar nos quedamos un día, nos daban agua y arroz, esa fue la comida que nos dieron.

Al día siguiente en la noche, tipo 1:00 am, por toda esa selva tupida, en la que no se veía nada de luz, nos llama el comandante y nos dice: “alístese que el comandante quiere hablar con usted”. Nos llevan al cuarto del comandante, le decían “El Cucho”. Me explicó

que no era algo en contra mía, que era una política de la organización de ellos, hacer que las empresas pagaran. Que apenas pagaran, me soltaban. Yo le pregunté cuánto estaban pidiendo. Eran alrededor de 480 millones de pesos. Yo les dije: “mire, la verdad, no creo que vayan a pagar esa suma de dinero; primero, porque no estoy de acuerdo con este tipo de políticas y, segundo, porque esta no es la manera correcta de financiarse”. Ahí me dijeron: “no, ingeniero, nosotros vamos a hacer el intento, vamos a mirar qué pasa, usted va a estar aquí retenido y hasta que ellos no le paguen, no sale”.

Entonces pasó la primera y segunda semana, ahí nos llaman otra vez, y presionaron a mi esposa, que seguía conmigo, para que abandone el área, porque se escucha y empieza a ver mucha presencia del ejército. Al parecer, los hermanos Corredor habían expuesto el tema con el gobierno central y el presidente Uribe había puesto especial atención a esta situación, porque de alguna manera, el presidente con sus políticas iba a impulsar y darle un buen soporte a la agroindustria de la palma, sobre todo en áreas de alta violencia como estas, porque normalmente, estos proyectos se desarrollan sobre todo para darle a la región un desarrollo sostenible, de la mano de la legalidad y estabilidad laboral a la gente.

En ese momento, envían a mi esposa para afuera, decían: “señora debe irse, porque hay mucha presencia de ejército en la zona y lo más probable es que haya un enfrentamiento, no podemos responder por la vida de usted y del ingeniero, porque pues esta no es una situación que nosotros podamos controlar”. Yo también la convenzo y accede a irse en un caballo que ellos le consiguieron, la acercaron por allá a una vereda cerca y pudo tomar camino hacia donde queda “Palmeiras”, la empresa donde yo trabajaba. Días seguidos, sucede la misma situación, me presionan, pero esta vez ya solo quieren sacarme información de don Carlos y don Jorge Corredor, los dueños de la empresa. Yo lo único que sabía era que vivían en Miami, casi no mantenía comunicación con ellos. Las amenazas, el estado de zozobra, de penumbra y de preocupación era permanente, en ningún momento se calmó ese terror que ellos me infundieron.

Hubo momentos bien difíciles. Me acuerdo en una mañana, tipo 8:00 am, cuando estábamos terminando el desayuno, a mí me llevaban allá un portacomidas con un chocolate y un pan o un café. En ese momento, llegó corriendo un guerrillero con la orden de que nos íbamos, enseguida sacó el machete y cortó las cuerdas de las que estaba colgando el cambuche y me dijo: “compa, empaque porque nos vamos ya”. Yo cogí la bolsa plástica, el saco

que me habían dado para esto, y empaqué todo, es decir, el cambuche, mi camisa y mi pantalón de “Palmeiras”, que había llevado del trabajo. Yo estaba uniformado, porque ellos siempre me mantuvieron uniformado como un guerrillero. Empezamos a caminar con tres guerrilleros.

A las 11 am, empezaron a escucharse disparos, detonaciones fuertes, disparos muy repetitivos. Se paró el guerrillero que iba comandando el grupo y me dice:

—“Compa, si usted no corre, lo van a matar. O lo matan ellos o lo mato yo, porque esa es la orden que tengo”.

—“¿Por qué?”, Entonces me dice:

—“Vea, primero, ¿usted no se ha dado cuenta de cómo está usted vestido? Usted está vestido del mismo uniforme nuestro y el ejército si nos encuentra, nos da plomo a todos, incluyéndolo a usted. Segundo, pues, si usted no me obedece, pues yo me encargo, esa es la orden que tengo, de matarlo”.

Entrando en razón, empiezo a correr con ellos. A las 5:00 pm, ya estaba cayendo el sol, me dijo: “mire, tenemos que pasar este cultivo de coca —que no era de menos de 300 a 400 hectáreas— y tenemos que llegar al otro lado, allá donde se ven aquellas matas, allá hay un rumbón, un hueco, un espacio; entonces tenemos que llegar allá y correr, porque tenemos información que el helicóptero viene en camino y pues un uniformado le va dando plomo”. El helicóptero estaba sobrevolando muy bajito, como a 10 metros de distancia de esa zona, parece que tenía bastante indicio, de dónde podíamos estar. De hecho, al ratico empezó a disparar al monte. Me decía: “no levante la cabeza, métase, métase, quieto, todo el mundo quieto”. Ahí demoró 15 minutos más el helicóptero y, posteriormente, levantó vuelo y se fue.

Ellos presionaban a mi mujer para que diera información a don Carlos o a don Jorge Corredor, esa era su estrategia para presionarlos a pagar la extorsión. Siempre le decían: “si no nos consigues este dinero, te lo vamos a mandar en pedacitos, mañana te llega un dedo para que te des cuenta si te estamos hablando en serio”. Don Jorge y don Carlos, siempre apoyaron a la familia con un psicólogo. Algunos de mis familiares se fueron a vivir a Cali para estar al tanto de la situación, porque habían reuniones con el Gaula y otras instituciones relativas al asunto en esa ciudad. Entonces ellos participaban en estos comités y pues don Jorge y don Carlos siempre estuvieron muy atentos al gasto del hotel, de la comida, a la asistencia de psicólogos.

El día 19 de noviembre del año 2004, a las 12:00 de la noche, se acercó el comandante. El hombre me alumbró la cara, nunca me dejó ver la de él, y me dice: “compa, arregle su maleta porque se va”. Entonces yo, como normalmente nos trasladamos entre las 10:00 y 12:00 de la noche entre un campamento y otro, le digo: “espera que voy a empezar a empacar”. A lo que él responde:

—“No, arregle todo que se va. Deje todo ahí y camine hacia allá”.

Yo no quería caminar, porque a esa hora, sin linterna, ni nada, lo más probable es que este hombre quiera que yo camine para luego justificar que me estaba volando y matarme. Entonces le digo: “no, yo no quiero caminar”. Seguidamente, me empuja con los pies en la espalda y me dice: “camina o lo mato, de una vez”. Camino como unas dos horas con él. Llegamos al río y me embarcan en una canoa. Alrededor de las 5:00 de la mañana, el hombre que me lleva, me dice: “bájese en esta playa”.

—Pero, ¿por qué me voy a bajar?”, le digo, “por qué no me llevas donde te dijeron que me llevaras.

—Está libre, váyase para la empresa.

A las 7 de la mañana, pasa una embarcación de un pescador y le hago señas para que me lleve. Apenas me ve, retrocede su embarcación y me dice: “no compa, yo a usted no lo llevo”. Llega otra, la misma historia. A la tercera, yo llamé y lo que hice fue taparme la cara. Cuando la embarcación se hizo a la orilla, yo corrí y me le monté. El señor me dijo:

—“No, no, a usted no lo llevo, yo no quiero meterme en problemas y aquí todo el mundo sabe la situación suya”.

—“Hermano, lléveme que a mí me liberaron”.

—No, usted se voló seguramente. Y es un problema porque la guerrilla sabe todo y pues no va, nosotros no vamos con eso.

—Mire, hagamos algo, yo me meto aquí debajo del plástico que nadie me vea y usted me deja por allá cerca, no en el puerto propiamente sino mucho más abajo y yo me voy a pie.

Ahí fue donde pude llegar a la empresa “Palmeiras” y ya, en ese momento entra mi liberación.

El Estado tiene la responsabilidad en la medida en que no ofrece seguridad

y tranquilidad para todas las personas que hacen parte de estos proyectos. La agroindustria de la palma ha sido muy golpeada, precisamente por esta falta de responsabilidad del Estado. Estos proyectos tienen un componente grandísimo social, de reconstrucción de tejido social, hay desarrollo de ideas como escuelas rurales. Proyectos de viviendas sociales, en la que de alguna manera, probablemente el Estado ha ayudado a algo, pero la gestión y el desarrollo de esos proyectos son directamente ligados a la agroindustria de la palma. Proyectos de siembra e incentivos, para que siembren los nativos palma, para que tengan sus negocios legales y puedan desarrollar sus familias.

Mientras cuento esta historia, se me ha quebrado la voz muchísimas veces. Es como si volviera a vivirlo. Fue hace 16 años y solo con recordarlo, todavía quedan muchas huellas que van a sanar, ¿no? En la mente, el recuerdo mismo, evoca situaciones bastantes difíciles que se vivieron y seguramente, el daño psicológico y el daño moral, que hacen con este tipo de acciones, nunca jamás van a ser reparados bajo ninguna circunstancia, ese acto que no tiene presentación, que jamás se le desea a nadie estar en una situación de esas.





“Diferido en varias cuotas”

Ubalдина Montañéz Roa
Cajamarca (Tolima)

Una comerciante del municipio de Cajamarca, relata la historia del destino que no fue. Tras las negativas de su arrendataria a pagar las vacunas de las FARC, cinco minutos después de abandonar el hotel donde se encontraba ubicado su restaurante, una bomba es detonada en el lugar. Esta es la vida de los comerciantes que, como ella, han sobrevivido para contar cómo su trabajo les pudo costar la vida, y para hacer memoria de quienes murieron por reivindicar su derecho al trabajo, incluso, a pesar de la violencia.

La presencia de grupos armados en Cajamarca fue específicamente de las FARC, con el frente 21, que hizo presencia acá todo el tiempo. Fue la época de la violencia de la guerrilla y ellos eran los que tenían el dominio total de la región. Los enfrentamientos eran todo el tiempo, uno podía escucharlos en las montañas. Uno se escondía en los baños de la casa, y cerraba el negocio.. Desde las montañas le disparaban al pueblo, uno siempre estuvo con la zozobra de que en cualquier momento se iban a tomar a Cajamarca.

En la época del gobierno Pastrana, los habitantes del municipio teníamos que rendirle cuentas a los comandantes de la guerrilla de ese momento. Yo tenía un restaurante. Casi nadie pasaba por Cajamarca, eran épocas complejas. Lo poquito que nosotros vendíamos, teníamos que llevárselo al comandante. Y no importaba, en mi caso, estar embarazada, igualmente tenía que subir a las montañas a llevarle la plata al comandante. Yo recuerdo mucho las filas humillantes que nos hacía hacer el comandante Carrillo, nos amenazaba y nos llamaba cada rato, nos decía: “es que usted me tiene que traer tanta plata”. Y nosotros le decíamos: “pero, ¿cómo le vamos a llevar esa plata si no estamos vendiendo nada, no la tenemos”.

Así duramos unos 4 años, más o menos. Luego ya vinieron otros gobiernos que, al menos, despejaron las vías para que la gente pudiera pasar nuevamente por las carreteras. Específicamente, por el municipio de Cajamarca. Fue de esa manera que pudimos empezar a reactivar un poco nuestros negocios.

Estando yo en uno de los restaurantes que, en ese momento tomaba en arriendo, empezaron a entrar las llamadas a las cuales estábamos acostumbradas: las llamadas extorsivas. Pero, en ese caso, no fue para mí, sino para la dueña del inmueble. Como la señora se negó a pagar la extorsión solicitada, nos pusieron una bomba. Nos mataron a la empleada que estaba en la cocina. El 2 de febrero de 2012, muere la señora Rubiela Verano. Yo en ese momento, gracias a Dios, no perdí la vida, ¿por qué?... por cosas del destino. Mi esposo me hizo una llamada diciéndome que mi niña, que era una bebecita, se iba a dormir sin comer. Yo salí muy rápido del restaurante hacia mi casa. Apenas había caminado una cuadra, cuando de repente, suena la bomba. Mi negocio quedó totalmente destruido.

Luego de eso, en ese mismo año, me trasladé a otro sitio, aquí mismo en Cajamarca. Mi esposo y yo, con muchos esfuerzos, decidimos comprar una vivienda para montar nuestro restaurante ahí. La historia se repitió: la señora, la dueña de la casa, estaba siendo objeto de extorsión. Ella nos dijo que estaba muy amenazada, que le tocaba irse de Cajamarca, perderse. Nos dejó las llaves y nosotros en esos días, pues, recibimos las llaves y a los dos días nos pusieron una bomba también en la casa que estábamos comprando en esos momentos. Ellos, tranquilamente, llamaban y decían: “esto fue porque la señora no nos quiso pasar al teléfono, y dígame a la señora que si no nos pasa al teléfono, ahora sí la vamos a acabar...”.

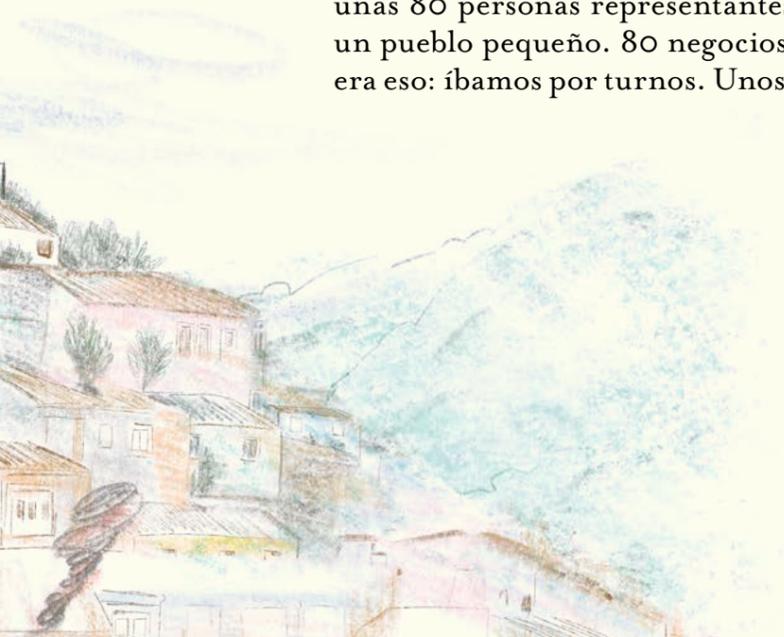
Era increíble el desfile de los carros para arriba y para abajo, en los que unos venían de hablar con el comandante y los que íbamos a hablar con él: tenderos, supermercados pequeños, restaurantes pequeños, hoteles pequeños. Cuando yo fui a hacer entrega del dinero, fui en compañía de un hermano por el nerviosismo y el estado de embarazo en que yo iba. La fila era, más o menos, unas 80 personas representantes del comercio de Cajamarca. Cajamarca es un pueblo pequeño. 80 negocios en el turno en el que a mí me tocó, porque era eso: íbamos por turnos. Unos iban por la mañana, otros iban por la tarde.

Entonces, era como no había ley del Estado porque no la podían ejercer y la ley eran ellos, entonces cualquier persona que pasaba vendiendo frutas o verduras en una carretilla, uno ya sabía que era un informante. Ya sabía que venía...Y la gente de una manera muy tranquila le traía a uno la boleta. Eso se lo entregaban a uno como entregarle hoy en día una carta de una empresa de mensajería, o una encomienda; se la entregaban a uno de una manera muy tranquila: “Mire, aquí le mandó el comandante Carrillo. Comuníquese con él o vaya, la espera a tales horas”. Casi que a uno le parecía que, como estaba viviendo, era normal en ese momento.

Todo mundo era informante. Entonces uno lo que hablaba, lo hablaba en familia. Y de resto, uno se debía cuidar con lo que decía. Por eso, el comandante Carrillo sabía perfectamente quién era Ubaldina Montañez, qué negocio tenía, dónde vivía, cómo estaba compuesta su familia. Ellos tenían un inventario muy exacto de la vida en el pueblo. Lo llamaban a uno al teléfono fijo y le decían: “mire, a usted le toca subir tal día, la cuota suya es tanto”. ¿Qué era lo que todo mundo hacía? Intentaba sacarle tanto descuento como fuera posible, o solicitábamos que nos diferieran la vacuna en varias cuotas. ¡Diferido en varias cuotas! Ahora, por un lado, tocaba pagarle a la guerrilla, por el otro, impuestos al Estado. La última vez que me tocaba llevar como cuatro millones de pesos, me salvé porque ya empezó a hacer presencia el Ejército y les incautó unos computadores. En esos computadores estaba la base de datos de todo el mundo, y las cuotas, y las fechas en que había que entregar la plata.

La guerrilla tenía sus propias reglas sobre qué negocios abrían, qué horarios tenían y además, qué productos podíamos vender. Yo en algún momento me atreví a decirles: “venga, si ustedes nos piden una cuota y ustedes nos dicen que nosotros no podemos vender productos Coca Cola, porque Coca Cola a ustedes no les está aportando la cuota; no podemos vender productos Alpina, no podemos vender... díganos de dónde vamos a pagarles. Además, no pasa nadie por Cajamarca”. Ellos eran la ley en todo sentido. Todo el tipo de comentario que se generaba, llegaba a oídos de ellos y ellos iban tomando medidas.

Uno no podía comprar productos Coca Cola, productos Postobón. Las vitrinas estaban vacías, uno no podía vender los productos que quería. Además, como estaba restringida la circulación, a veces no llegaban los surtidos. Entonces, uno vendía por ahí cositas: bolsas de agua, por ejemplo. Casi no había productos. Y, además, no había a quién venderle porque,



aunque estamos sobre la vía Panamericana, y se supone que uno vive de la gente que pasa, la gente o no salía del temor, o los que podían, viajaban por aire, viajaban en avión.

La minería fue una buena oportunidad para Cajamarca. Tuvimos la posibilidad de trabajar y de recuperar la economía del municipio. Hubo empleo, hubo plata, se movieron los negocios, se movió la economía del municipio. Gracias a la minería y el gobierno de Álvaro Uribe se empezaron a escoltar los carros y se hacían unas caravanas de Policía, de Ejército, para acompañar y proteger a los turistas. A partir de ese momento, los comerciantes, la gente del pueblo se motivó. Empezamos a entender que, realmente, lo que estábamos viviendo no era normal. Y empezamos a embellecer nuestros negocios, a surtir, y empezaron a llegar todos los proveedores de todas las marcas. Ese fue el inicio de otra etapa de la vida, y fue una etapa de una reactivación económica bien importante.

Cómo le digo, uno está vivo y está hablando porque seguramente el destino no nos tenía para que nos fuéramos en ese momento. Podría haber sido yo quien muriera en con esa bomba.





“Nos mandaron a dormir y no nos dejaron grabar”

Colbert García
Cartagena (Bolívar)

Grabar el conflicto, entre planos prohibidos, balaceras y noches de zozobra, ha sido el trabajo de este cineasta colombiano. Como documentalista ha logrado llevar a las pantallas un fragmento de la realidad colombiana, de aquellas zonas donde el riesgo de su trabajo no es mayor que la vulnerabilidad de quienes, día a día, viven a flor de piel las consecuencias de la violencia.

Hice muchos documentales sobre conflicto. En términos de temáticas, la guerra nos ha dado a los colombianos de qué hablar, qué contar. Cuando no es una cosa de narcos, es una cosa de *paras*, o es una cosa guerrilleros, de bandas. En los años en que hice esas cosas nunca me censuraron. Simplemente tuve que vivir la realidad del conflicto. Lo que vive la gente del campo a diario.

Me vi interrumpido por la guerrilla en Calamar, Guaviare. Un comandante de las FARC no me dejó grabar ni un solo plano. Estaba empezando el proceso de paz de Pastrana. Primero íbamos a ir por carretera a San José del Guaviare, pero en el retorno nos pararon y no nos dejaron seguir. Me devolví a Bogotá y luego tomamos avioneta hasta Villavicencio. Fue complicado entrar a Calamar por el aire, ahí comenzó la tragedia. Un comandante de la guerrilla nos recibió, éramos tres: sonidista, cámara y yo. Estábamos haciendo un trabajo sobre las emisoras comunitarias en esa región, era para el Ministerio de Comunicaciones, y querían cubrir el relato de gente de diversas partes de Colombia. A la entrada del municipio, el Comandante de las FARC me paró. Mientras me hablaba, nunca me miró a los ojos. Le expliqué con detalle lo que íbamos a hacer, que no era nada sobre el conflicto, ni sobre la misma guerrilla. Lo único que me dijo fue: “no, no y no”, y yo le entendí.

Me tocó negociar, me dejaron grabar el último día, una hora antes de que me fuera. Pude hacer dos planos muy cerrados de entrevista, pero ningún apoyo. Ellos no querían mostrar a la gente, a nadie, ni siquiera yo estaba buscando grabar gente de ellos, pero se rehusaban a permitir grabar incluso a la misma gente que vivía ahí. No me acuerdo cómo convencimos al comandante para que nos permitiera grabar. Pero le expliqué muy bien que iba a hacer unos planos cerrados, que sólo iba a entrevistar a esa gente, a la gente de la radio comunitaria de Calamar. Yo le dije: “hermano, lo mejor es que usted esté ahí para que vea lo que yo voy a preguntar, y si usted cree que estoy haciendo preguntas raras, pues miramos. Para usted pueden ser raras pero para mí no”; entonces me dejaron ir con el tipo de la radio comunitaria. Estuve un buen rato, pero no pude hacer ningún otro plano. Eso tal vez fue lo más complicado.

Ahora, en Filo El Gringo, en el Catatumbo, me tocó vivir toda la ofensiva paramilitar. No como documentalista, sino como cualquier persona de esa región del país. Aunque no me encontré propiamente con los paras, luego llegó un comandante del ELN y me jodió las cosas un rato. Yo estaba grabando en una casa y luego me di cuenta que la casa tenía explosivos. Allá estaba grabando toda la masacre de los paramilitares porque apenas estaban empezando a entrar al Catatumbo, incluso, hace poco habían barrido con todo el caserío del municipio. Esa gente, la del ELN, me revisó el material porque necesitaban saber si yo llevaba cosas sobre los explosivos que ellos tenían. Yo no tenía ni idea que en esa casa, donde estaba grabando, habían explosivos.

El susto más grande fue en Puerto Asís porque nos tocó tremenda balacera. Fueron muchos años donde nos mandaron a dormir y no nos dejaron grabar. Un día nos mandaron a dormir a las cinco de la tarde a todo el pueblo en Solano, Caquetá, íbamos a hacer un trabajo sobre cultivos ilícitos. Ese era un pueblo lleno de hojas de coca, íbamos a hacer un trabajo para el CINEP y nos mandaron a dormir temprano. Nos tocó guardarnos muy temprano en el hotel, en la noche hubo una balacera, eran los *paras* que estaban avanzando. Hubo dos muertos. También me tocó lo mismo en el Chocó.

Uno sale a trabajar y grabar y verá algo, pero digamos que la vida no le cambia, pero a esa gente sí, a esos pelados de esas emisoras, sí.

El trabajo tiene sus riesgos, claro, si uno está cerca de un campamento a uno lo pueden bombardear; si uno va por un río, cómo nos pasó llegando a Riosucio-Chocó, cuando con el camarógrafo casi nos encienden a plomo, porque creían que llevaba un fusil en el hombro, pues, claro que puede pasar. Pero esos son gajes del oficio. Yo pondría los ojos más en las personas de los territorios, porque a ellos les toca vivir el verdadero conflicto.

Aunque es importante mi testimonio como documentalista, yo pondría más los ojos en la gente de los territorios, en la gente de los canales comunitarios, de las radios comunitarias, de los pelados con emisoras y televisión pequeña, a la gente de región sí le toca *comer mierda* porque es el día a día, porque de una manera u otra, uno entra y sale.





“Trabajar para los demás”

Giovanny Carrascal
El Tarra (Norte de Santander)

Entre masacres, un campesino busca salir adelante en medio de la violencia que atraviesa cada uno de los municipios donde busca emprender una nueva vida. En su trayectoria se reflejan las historias de los pequeños productores, de la supervivencia y de un conflicto armado que aqueja sus ahorros y los esfuerzos puestos en cualquier pequeño negocio que surgió de su disciplina.

Yo nací y fui criado en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, donde yo tenía todo. Por la propiedad donde yo vivía, pasaba mucho la guerrilla, el Ejército y las Autodefensas. Era la época del apogeo de las masacres de las Autodefensas. A mí, gracias a Dios, no me masacraron ningún miembro de mi familia, pero sí nos dieron 24 horas para que desocupáramos nuestra propiedad. Eso fue en el 2002.

Allá en el municipio producíamos queso y lo vendíamos; también huevos y criábamos cerdos. Cultivaba plátano, maíz, yuca, cacao, todo eso lo sacaba al pueblo. Aunque todo se vendía, solo servía para sobrevivir. Cuando entraron las autodefensas, las cosas cambiaron, porque al llegar ellos a la finca, pedían unas cuantas gallinas, los cerdos, las reses, y ya ni para sobrevivir tenía. ¿Qué me tocaba hacer? Regalárselas, no podíamos hacer más nada, si decíamos que no, se las llevaban todas y hasta de pronto nos mataban. En otra ocasión llegaron y me dijeron que necesitaban una res. Yo esa vez tuve que decirles: “mire, señor, lo que pasa es que yo apenas estoy comenzando mi negocio, y para yo regalarle una res completa a usted, pues, me queda duro”. Entonces me dijo: “ah, pues si usted no accede a regalarme una res, entonces nos llevamos todo el ganado”. Me tocó regalarle la res.

Lo que ellos necesitaban tocaba dárselos, no negarles nada, porque si uno negaba las cosas, lo corrían o lo mataban. Entonces uno tenía que vivir esa humillación con ellos porque eran los que mandaban en ese momento allá en el pueblo, porque tenían armas. Me amenazaron y me tocó dejar todo:



la tierra, un poquito de ganado que tenía, unas bestias mulares, gallinas, cerdos; y me fui para el pueblo a pedirle apoyo a la Alcaldía. En ese entonces, la Alcaldía también nos cerró las puertas porque no nos quisieron atender para colocar la denuncia. Ya tenía ocho días de estar en el pueblo y me sentí muy desesperado, aburrido; volví otra vez a la finca. Cuando llegué a la finca, me encontré con la sorpresa de que de las 22 reses que tenía, no había ni una, ni una bestia mular, ni un cerdo, ni una gallina. Todo se lo habían llevado.

En el 2006 también tuve otro desplazamiento, pero ese fue por enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército, yo quedé en medio de la balacera, entonces, como pude, saqué a mi familia y nos fuimos para el pueblo. Estando en el pueblo, nos fuimos para la Alcaldía para que nos dieran un apoyo; ahí sí nos atendieron. También me tocó dejarlo todo. Ya yo estaba echando para adelante, incluso después de haberlo perdido todo. Al volver nuevamente a la finca en El Tarra, me doy cuenta que, una vez más, se lo habían llevado todo. No supe quién fue. Ya tenía yo siete reses, tenía motosierra, guadaña, motor de fumigar, gallinas, cerdos, etc.... tampoco encontré nada.

Luego, en medio de mi intento por recuperar lo que alguna vez tuve, estábamos trabajando con mis vecinos de la vereda en piscicultura. Muchos producían cachamas, otros mojarra y así sucesivamente. Cuando llegaban las autodefensas y daban la orden que necesitaban pescado, ellos tenían que sacar el producto. Donde ellos dijeran que tenía que irlos a llevar, allá tenía que ir a llevarlos uno mismo.

Pedían alrededor de 200 kilos de cualquier producto, pero yo no tenía carro para poder llevarles ese peso. Tocó reunirnos entre toda la comunidad y cada quien llevar un poquito, y colaborar a llevar esa cantidad de pescado allá, al campamento de las autodefensas. En una ocasión, en el 2002, vinieron en las horas del mediodía. Masacraron a varios de mis amigos, con los que habíamos emprendido el proyecto de la piscicultura. Allá trabaja uno para los demás. Y si uno hace resistencia, muere. En esa ocasión murieron tres, pero han sido cientos los que han muerto en nombre de la resistencia, de su trabajo.

Viví también en La Gabarra. Tuve que irme de El Tarra, había demasiada violencia. Pero también tuve que huir de La Gabarra. Me tocó dejar botado todo lo que tenía porque entraron las autodefensas y masacraron muchísima gente. Yo creo que hubo más de 200 muertos en una noche. Uno siempre termina yéndose a otro lugar a buscar vida. Y, aunque emprenda, todo siempre resulta en vano. Luego, en Alto Viento, vía Puerto Santander, viví un tiempo muy sabroso. Nada de bulla, ni de guerrilla, ni de *paracos* ni nada. De un momento a otro, entraron ahí también las autodefensas. Yo trabajaba en arroceras y viajaba hacia el municipio todos los días.

Un día, alrededor de las cinco de la mañana, cuando entré al pueblo, nos reunieron en el parque del municipio y masacraron entre cinco y siete personas, incluida una mujer embarazada. El sacerdote que estaba en ese entonces en Aguas Claras, se enfermó de ver toda esa masacre, casi queda paralítico. Yo, después de la masacre, también terminé huyendo. Mientras trabajaba en Alto Viento en las arroceras, fui dueño de un negocio de *pooles*. Un día llegaron las autodefensas y me dijeron que me daban dos horas para que me fuera y que no me llevara nada. Me tocó dejar botado eso ahí.

Sucesivamente, así fui viviendo el tiempo. En el 2012 hubo otro enfrentamiento en la misma parte de la finca mía, y pasó lo mismo. Tocó salir desplazado y volvimos otra vez a la Alcaldía. Ya no tenía mucho, ya no tenía cómo tener para invertirle a la finca ni meter animalitos como ganado, o cerdos. Había unas gallinitas nada más. Por parte del gobierno no he tenido ninguna ayuda. Estuve reclamando el ganado también, hice un papeleo para ver si de pronto el gobierno me podía reconocer algo de la pérdida que tuve y lo único que me dijeron fue que “si el ganado estaba registrado, sí tenía posibilidad de recuperar algo”. Pero da la casualidad que yo no tenía ninguna cifra registrada. Sí lo tenía asegurado, pero no estaba registrada la cifra de ganado y por esa razón no me pagaron nada. Después de eso, no supe cómo salir adelante.

Me vine, entonces, para Cúcuta. Trabajé en una constructora hasta que llegó la pandemia. Pasé de tener un negocio para sobrevivir, a no tener nada. Siempre he soñado con tener nuevamente unas tierras para poder cultivar, producir y poder salir adelante.



“Se ajusta o se acaba”

Rubén Darío Lizarralde
San Alberto (Cesar)

El ex-gerente de INDUPALMA, a título personal, cuenta la historia de resistencia y afectaciones de esta empresa, una de los más grandes ingenios de extracción de palma en el Magdalena Medio. A pesar de los secuestros, la presión, extorsión y amenaza de los diversos grupos armados ilegales de la zona, luego de más de 20 años haciendo frente a las repercusiones económicas de la violencia, INDUPALMA intentó sobrevivir al conflicto y persistir en su vocación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, hoy la empresa se encuentra en proceso de liquidación.

En esta historia, voy a hablar en nombre mío y no en el de la empresa. Me vinculé a INDUPALMA como asesor de la empresa, alrededor de los años 90. Más o menos, en el año 1993, tuve entre mis primeros retos, el de estar en una reunión con la Coordinadora guerrillera en Caracas. En esa reunión estaban el señor Alfonso Cano, el señor Iván Márquez, Antonio García, Francisco Galán y un senador del Valle del Cauca. Estuvimos reunidos aproximadamente cinco horas, y el objetivo de nuestra parte era advertirles que si ellos, a través del sindicato y de las negociaciones colectivas, continuaban presionando a la empresa, desaparecería, porque la situación económica de la empresa era débil. Nos vimos en la necesidad de valorizar activos para no entrar en proceso de liquidación.

Esa fue la primera vez que la empresa se plantó frente a las presiones de la guerrilla.

Las presiones del entorno

En la región había muchas presiones simultáneas: estaban las guerrillas, estaban los paramilitares. Nosotros no entramos en conversaciones con nadie que no permitiera el gobierno. Cuando fuimos a hablar con la coordinadora guerrillera, pedimos autorización del Estado. Recuerdo que en la presidencia de Ernesto Samper, estaba el Ministro del Interior, Horacio Serpa, y el mismo sindicato me pidió que hablara con ellos para tratar de buscar un acercamiento con los paras y que se diera una negociación. Yo busqué esa reunión y hablé con el doctor Serpa, me dijo que estaban en negociaciones, pero que no se podía comprometer hasta que no se llegara a una situación de acuerdo.

Un día recibí una llamada de él diciendo que no había sido posible que pudiéramos llegar a esa posición para iniciar un proceso de negociación, de modo que no podían permitir un acercamiento con los paramilitares, y no lo hicimos. Todo lo que siempre hicimos fue con el visto bueno del gobierno. Como cuando fuimos a la Serranía del Perijá, también se pidió autorización del gobierno para ir a hablar con los guerrilleros y decirles que no se iba a pagar ni un solo peso, y que teníamos un compromiso desde lo económico y social con la región.

Luego de la reunión en Caracas, nos mandó a llamar la gente de la zona en el Magdalena Medio. Se tuvo una reunión con ellos. Ahí participaron personas como Manuel Cepeda, que era en ese momento Representante a la Cámara; Eduardo Umaña Mendoza, Gustavo Petro y algunos líderes guerrilleros de la zona. Por parte de la empresa, asistimos el entonces asesor laboral de la empresa, Julio Cesar Carrillo y yo a repetir lo sucedido en la reunión en Caracas: la empresa se ajusta o se acaba. Agustin Uribe Leiva, subgerente en ese momento de INDUPALMA, con quien estuvimos en Caracas, no asistió. Y así, firmes, volvimos a la siguiente reunión. Además de las obligaciones prestacionales, salariales, pensionales, pedían llevar orquestas, darles estadía, dar vivienda a los trabajadores. Ellos no pagaban ni luz ni agua, ellos recibían su salario libre de todo, porque la empresa les daba hasta transporte. Tantas exigencias derivaron en el desgaste económico por esas convenciones colectivas. Entonces se les dijo: “no podemos más, o se encuentran negociaciones justas o esta empresa no tiene la posibilidad de seguir adelante”.

De esa reunión que tuvimos en Caracas con la coordinadora guerrillera, la empresa enfatizó en que no podía dar más y no iba a aceptar más presiones a través de negociaciones colectivas. Ellos, la guerrilla, lograron generar presión a través de ese mecanismo (Negociaciones Colectivas), más la extorsión que sufrió la empresa con el secuestro de Hugo Ferreira Neira.

Hugo Ferreira Neira, quien fue gerente general de INDUPALMA, en la época del M-19, fue secuestrado por este grupo y estuvo en el mismo sitio donde tuvieron a José Raquel Mercado, hecho del cual ninguno de los dos se enteró en ese momento. Asesinaron a José Raquel Mercado, luego Hugo Ferreira fue liberado. El M-19 en ese momento planteó que había secuestrado a Hugo Ferreira porque la empresa no estaba cumpliendo con las obligaciones laborales, y que si se cumplía con estas obligaciones, lo liberarían, cosa que no fue cierta. Ellos, inteligentemente, aprovecharon una discusión que se presentó entre unos contratistas civiles y la empresa, en donde estos contratistas que se contrataron para arreglar vías, drenajes, es decir, funciones temporales, recibieron la plata de la empresa y no se la entregaron a los trabajadores, y los trabajadores hicieron el reclamo. La empresa no se había negado, ni se iba a negar, al cumplimiento de sus obligaciones. Sin embargo, Ferreira estaba reclamando que ya había pagado. Eso lo aprovechó el M-19 para secuestrarlo. Desde ese momento, la empresa y sus directivos recibieron un golpe psicológico muy duro.

El sindicato nombró a Francisco Galán como el jefe de las negociaciones con nosotros. Poco tiempo después, Galán es detenido en la ciudad de Bucaramanga y eso altera profundamente el rumbo del sindicato. Perdieron la orientación, porque quien determinaba la estrategia como sindicalistas era Galán. Nosotros lo aprovechamos para buscar un acercamiento y entendimiento que les permitiera darse cuenta que no necesitaban intermediación y que se podían tener unas excelentes relaciones empresa-trabajadores, sin necesidad de un enrarecimiento político motivado por la guerrilla.

El M-19 negocia con el gobierno, y, posteriormente, en esta zona se hace con el poder el ELN, recogiendo los espacios del M-19. El sindicato estaba permeado por el ELN y la empresa fue debilitándose económicamente frente a las peticiones de los trabajadores. Después de la liberación de Hugo Ferreira, obligaron a la empresa a recibir a todos los trabajadores que estaban con los contratistas civiles como trabajadores permanentes de INDUPALMA. También la obligaron a asumir los años anteriores de pensión de los



contratistas. Así, la empresa tuvo que asumir la responsabilidad pensional de alrededor de mil dieciocho trabajadores.

La situación era insostenible para la empresa. Ahí comenzó el declive. De hecho, en la negociación colectiva siguiente, aprovechando que la empresa, económicamente, no era capaz de renovar sus cultivos, había suspendido un área de aproximadamente 3.000 hectáreas. Esa área, al llegar yo a la gerencia de la empresa, la reactivamos, pero a través de otro mecanismo: las cooperativas de trabajo asociado.

INDUPALMA y las cooperativas

En esa empresa había una relación entre la empresa con estas cooperativas. No fue un ejercicio de simulación laboral, sino de empresas constituidas por las mismas personas que trabajaban. Ellos mismos tenían sus gerentes y los cuadros directivos como lo exige el cooperativismo. Cobraban una especie de comisión, por la prestación de servicios, fueron ahorrando, comprando activos y fueron prestando el servicio de mano de obra y el servicio de activos a la empresa. De nuestra parte, sí recibieron una capacitación muy fuerte e importante, durante no menos de 15 años, y se fueron fortaleciendo como verdaderas empresas.

Nosotros volvimos los contratos de las cooperativas un medio de garantía para que los bancos las financiaran y comprasen camiones, boleadoras de fertilización, equipos y tractores que permitieran prestar un servicio de mano de obra más completo y recaudar más recursos. Luego cuando se volvieron propietarios de tierra, con mayor razón. Al día de hoy esos dos negocios que se llaman el Palmar y el Horizonte, son de ellos, y les dio mucho a esas personas que estaban fuera de esas posibilidades de tener una pensión, siendo estas organizaciones ese seguro. Además que son cultivos que se han valorizado y han permitido ampliar su radio de acción. En alguna ocasión, incluso, llevamos a algunos de ellos a ver el caso de una cooperativa en Mondragón en España.

Además conseguimos los créditos y con producción ellos pagaron, con eso les demostramos que podían ser autónomos y que no tenían que depender de la guerrilla o de los paramilitares, y que ahí podía crearse un espíritu diferente como el que se creó. También se crearon empresas de mujeres, la mayoría eran de hombres por lo que la actividad es fuerte, pero también hubo mujeres que tenían sus cooperativas, y se observó un desarrollo importante en la zona y muchos de ellos se alejaron de las conversaciones con estos grupos al margen de la ley, dándose cuenta que por ahí no era el camino.

Al final, varios formaron parte de un grupo de dueños de tierra y de cultivos dentro de ese proceso que la empresa fue llevando a la gente para que se volvieran más autónomos y ganasen más, no necesariamente en función del contrato de trabajo, porque la empresa no los podía continuar. Esa modalidad se había vuelto ineficiente y costosa para la organización. Este fue, entonces, un modelo espectacular, al cual se acogieron y de ahí surgió un sentido empresarial que se mantiene; además que se volvieron dueños de tierra, cultivos, maquinaria de equipo y fueron más empresarios que trabajadores. Por supuesto esto tiene una historia dignificante para estas personas, pero también tiene una historia triste.

La persecución de los sindicalistas

Recuerdo que en una oportunidad, mataron a un sindicalista, luego a tres presidentes del sindicato (un expresidente, y dos presidentes en ejercicio) en dos meses. Ellos nos citaron y me acusaron por medio de una carta por el asesinato de su gente. Yo les recibí y contesté la carta diciendo que lo que ellos estaban haciendo al responsabilizarme de esos asesinatos, de líderes sindicales, era encubrir a quienes eran los verdaderos asesinos y estaban desviando la investigación hacia personas que no tenían nada que ver con ese proceso de violencia que se estaba viviendo ahí. Fue una carta que envié con copia a las casi 30 ONGs que ellos habían citado inicialmente, la mayoría de ellas europeas. Ellos se desconcertaron con la respuesta de la carta y con la responsabilidad que yo les daba por desviar el señalamiento de los responsables de los asesinatos.

Cuando mataron a estos líderes sindicales, en una guerra muy fuerte entre el ELN y los paramilitares, salieron unos líderes y se fueron de la zona rumbo a la Costa, porque sabían que eran *elenos* y los iban a matar, aunque figuraban

como líderes sindicales. Dejaron a una persona encargada de la presidencia, que no era del grupo de confianza de los *elenos*, pero que era del sindicato y lo nombraron presidente. Esta persona vino a mi llorando, diciendo que lo habían obligado a aceptar la presidencia del sindicato, y eso era prácticamente una pena de muerte, él lo sabía. Yo le dije: “No se preocupe. Usted no tiene que salir a decir que es el presidente ni salir a arengar o echar discursos. La empresa lo respeta como presidente del sindicato, la empresa se va a reunir con usted, tendrá una relación con usted para que represente a sus trabajadores y nosotros lo vamos a proteger”. Y así lo hicimos. Creo que eso nos fue dando ese espacio frente a los trabajadores, porque se dieron cuenta que no estábamos contaminados y que nosotros manteníamos fundamentalmente una posición empresarial, y lo que queríamos defender era a la gente y a la empresa, que cabíamos todos.

Al mismo tiempo, tuvimos un intento de secuestro a unos trabajadores que, gracias al apoyo del ejército, lograron liberar a uno de forma inmediata, otro a las cuatro horas y el último a las 24 horas. También dos secuestros: el primero, de tres funcionarios que estuvieron por varios meses en la Serranía del Perijá. Incluso, quien era mi asesor en materia laboral, subió donde ellos porque nos citaron. Nosotros, como sabíamos que lo que se planteaba en la empresa públicamente se transmitía inmediatamente, mandamos el mensaje de que no se iba a pagar nada. Que esas personas secuestradas eran unos profesionales por el esfuerzo de sus padres. En el caso de uno de ellos, su madre no sabía ni leer ni escribir; los de otro, su padre y su madre eran profesores. Creo recordar en una vereda pequeña del Caquetá, personas trabajadores; y el otro, era de padre campesino, que tenía una pequeña tierra. Por ende, a los tres se les educó con un esfuerzo enorme.

Lo que nosotros hicimos fue apoyarlos con ayuda psicológica: un sacerdote, ex secuestrados, familiares de personas que habían sido secuestradas, prepararon psicológicamente a estos padres para el momento en que la guerrilla los llamara a que fueran a hablar con ellos. De igual forma, también los recibimos y les dimos acompañamiento psicológico y moral, para que ellos pudiesen seguir adelante y manejar de mejor manera la situación. Nosotros les pagábamos todas las llamadas telefónicas que tuviesen que hacer a donde fuera, sus desplazamientos y, sin necesidad de recalcar, los profesionales siguieron ganando su salario como si estuviesen trabajando. De modo que les dimos todo el apoyo. Logramos que la guerrilla los liberara.

En algún momento, nos advirtieron que asesinarían a uno de ellos, con la justificación de que él estaba vinculado con los paramilitares e iban a hacer justicia, cosa que no fue cierta. En estas comunidades, mucha gente que está en la guerrilla y en los paramilitares tienen familiares por todas partes. Este agrónomo que estuvo detenido, su mujer era como cuñada, o prima, de la señora de un guerrillero, y gracias a esa conexión, se logró demostrar que este muchacho no tenía ningún vínculo con los paramilitares, que lo que estaban era ejerciendo una presión e iban a cometer una injusticia, para que así lo liberaran.

En el caso del otro secuestro, el ejército persiguió y presionó mucho a la guerrilla, lo que contribuyó a su liberación. Es decir, mientras yo estuve en la gerencia, nunca pagamos algo. Jamás dimos un centavo, nosotros argumentamos y mostrábamos que el proyecto que teníamos era un proyecto de fortalecimiento de región, de la gente y que no se dio dentro de los métodos tradicionales y dentro de una convención colectiva en donde solo estaban matando la empresa y el empleo que esta generaba. De hecho, en estos momentos está en proceso de liquidación, porque no aguantó más la presión del sindicato frente a las obligaciones económicas y laborales que tenía la empresa.

Los trabajadores tenían, además, presión por parte de los paramilitares: las cooperativas de trabajo asociado estaban constantemente amenazadas porque no aceptaban la extorsión. Si lo hacían, yo dejaba de trabajar con ellos. Los bajaban de los buses, los azotaban, los insultaban. En una ocasión, Carlos Castaño se interesó por unos búfalos que nosotros teníamos cerca a La Gloria, Cesar; se me acercó una persona a negociar los búfalos, y yo dije que no. Al otro día, mandé a traer los búfalos de La Gloria a San Alberto, Cesar. Ellos se dieron cuenta, interceptaron los búfalos en los camiones, los bajaron, se los llevaron, y se los robaron.

Ni la policía, ni el ejército, ni las entidades, creyeron que nosotros no habíamos dado plata, a nadie. Muchas veces, lo que sucede es que las empresas no dan plata, pero le dan a las familias para que éstas paguen, cosa que nosotros no hicimos, solo dimos apoyo a las familias y no cedimos a la extorsión.

Implicaciones en la vida personal

En algún momento, siendo este un caso personal, una gente fue a mi edificio por mi hijo, y gracias al equipo de seguridad que yo tenía, se reaccionó rápidamente y se logró que esta gente que iba por mi hijo, que aparentemente eran del ELN, salieran y se frustrara este suceso. Fueron momentos bastante difíciles que tuvimos que sortear nosotros frente a la guerrilla del ELN. Pero también, más o menos hacia el 2008-2010, los paramilitares me mandaron a amenazar, porque yo no permití que las cooperativas de trabajo asociado les pagaran a ellos una cuota que ellos decían que era de seguridad, y no lo permitió diciendo que si yo llegaba a saber que alguna cooperativa pagaba esa cuota, no volvía a contratar con ellos. Entonces ellos sabían que lo que yo decía, lo cumplía, ya que me conocían desde antes de ser gerente y entendían que se podían quedar sin trabajar por pagar esa extorsión llamada “seguridad”. Entonces me mandaron a decir que no me “tiraban abajo” porque los 19 años que trabajé allá, iba con la fuerza pública y por eso no podían enfrentarse contra ellos, pero que cuando yo llegase o saliera en la avioneta, me iban a tirar. Tuvimos que hacer unos anillos de seguridad alrededor de la pista para que no quedara al alcance de ellos y para que un disparo no impactara la avioneta. De modo que esa fue una situación compleja, pero mantuvimos una posición férrea.

En una empresa como la nuestra, con 10.000 hectáreas, económicamente fuerte, con alianzas y apoyo de la fuerza pública y el Estado, pudimos salir adelante. Sin embargo, con todo este apoyo, tuvimos una presión grande por parte de la guerrilla y de los paramilitares, en casi, yo diría, 20 años de la vida de la empresa. Fueron muy fuertes y duros, no solo para la empresa, también para la región y la vida de muchas personas. Hoy tenemos una empresa debilitada por todo eso, está en proceso de liquidación, porque, definitivamente, una empresa no puede resistir toda la vida una presión descontrolada en términos económicos.





“Hay un rumor”

María Constaza Velásquez.
Pasto/Tumaco (Nariño)

Una hija cuenta la historia del homicidio de su padre, Francisco Javier Velásquez. Ingeniero agrónomo de Pasto, laboraba y promovía con su trabajo el crecimiento de cultivos de palma. Fue asesinado luego de años de dedicación a este sector. El actor se desconoce y las motivaciones precisas también. Esta historia es un reclamo por la verdad, una petición taxativa por la no repetición.

Su nombre era Francisco Javier Velásquez Caicedo; él era, antes que padre, un amigo, y no lo digo por mi, sino en general, con mis hermanas, con los sobrinos. Él podría estar en la reunión más importante, pero si necesitabas a mi papá, él te contestaba y decía: “mija, ¿es muy urgente?, regálame 5 minutos y ya te llamo”. Dejaba la reunión para poder hablar con nosotras.

Él vivió en Tumaco mientras trabajó en una empresa palmera. Desde el año 1992, fueron entre 13 años y 17 años los que trabajó en este sector. Luego se fue para la Costa Atlántica y después a Santander. Si no estoy mal, a sus 58 años se pensionó. Posteriormente, siguió trabajando en plantaciones de palma africana hacia el norte de Colombia. Alrededor del año 2014 regresó a Pasto y se presentó la oportunidad, nuevamente, de trabajar en Tumaco. Inicialmente, la primera vez que mi papá trabajó en Tumaco, se trataba de una zona tranquila. Sin embargo, cuando volvió, se escuchaba el *run run* de la violencia, incluso tengo un familiar que estaba en la rama judicial y lo sacaron de la zona porque estaba corriendo riesgo su vida.

La plantación que lo hizo volver, la segunda vez al municipio, tuvo problemas. Al parecer el cultivo no estaba rindiendo tanto como debía. Eso se lo comentaron a mi *papi* y lo buscaron para que solucionara los problemas de esa plantación. Decían que él era el único que podía sacarla adelante. Recibió una llamada directamente de la persona que lo contrató. Mi *papi* era una persona tan activa, con él no se podía, era imparable, con su ejercicio, que la mecánica, que el arte, la lectura, mi papá tenía muchos oficios, y,



yo diría, que también otras profesiones, era empírico en otras profesiones. Por eso, claramente accedió. Entonces cuando llegó, le comentaron la situación económica de la plantación. Para él bastó hacer un análisis, observar y, así, sacar adelante la empresa. Tengo entendido, y basado en datos estadísticos, que en los seis meses que mi *papi* trabajó, o que lo dejaron trabajar, la empresa subió en la producción del fruto y organizó su operatividad: él llegó a acomodar la casa. Sin embargo, en esos desórdenes había gente que fue la piedra en el zapato para mi papá.

A raíz de esa situación, creemos que comenzó a recibir amenazas. Las amenazas fueron conocidas por toda la empresa y la protección quizás no fue la debida. En sí, era una persona que le hacía bien a todo mundo, que estaba sacando la empresa adelante. Con lo ordenado y bueno que era y no haberle podido brindar más seguridad, protección; lo dejaron solo, por eso cuando lo mataron estaba solo, solo llegaron los curiosos a ver si era cierto.

El día del padre, mi *papi* tuvo que viajar de Pasto a Tumaco. Nosotras vivíamos en Pasto, así que cada vez que estaba libre, iba a nuestra casa. Le teníamos sus detalles para celebrar, pero él no pudo pasar el día con nosotras. La última vez que estuvo con nosotras, nos comentó la situación que se venía dando en Tumaco, directamente en la empresa. Todo estaba muy difícil, había un ambiente enrarecido; lo habían buscado unas personas y le habían dicho que tuviera cuidado, pero no sé si trataba propiamente de una amenaza. Era primero de julio. Yo llegaba de mi trabajo a las 08:00 p.m, y casualmente me llamó mi mejor amiga desde Bogotá. Nosotras nos hablamos poco, pero energéticamente estamos muy conectadas. Me dijo: ¿que más?, nos preguntamos por nuestras vidas. Me preguntó: “¿cómo está tu *papi*”, le dije que no había podido venir para el día del padre, pero que sí la semana antes, porque estaba complicada la situación en Tumaco, sin embargo, “todo bien”. Después me dijo: “¿has hablado con él?”, a lo que yo respondí “claro, si nos permite el día, hasta diez veces en 24 horas”. Y me preguntó: “¿y hoy?”. Ese día yo no hablé con él pero mis hermanas sí.

Me llamó mucho la atención el hecho de que me insistiera tanto en llamar a mi papá. Y le dije: “¿por qué?”, y me dice: “es que hay un rumor de que a tu padre lo mataron”, dije, “¿Cómo se te ocurre?, yo ya me habría enterado”.

Le pregunté, le pedí que me explicara el rumor. Me dijo que corría una voz en *Facebook*, comentando que a mi padre lo habían asesinado. Me pareció desconcertante, me pareció muy bajo de la gente decir eso. Y, en realidad, todo el mundo sabía que a mi papá lo habían matado menos nosotras. Eran las 08:40 pm, habían pasado 40 minutos desde que lo habían matado, desde que mi amiga me llamó. Ella quería asegurarse de que la información era poco fidedigna, me sugirió que lo llamara y hablara con él. Me serví un tinto y cogí nuevamente el teléfono para llamar a mi amiga. Yo tenía una llamada perdida, era Eduardo Ruiz. En ese momento sentí la sangre fría, porque esa persona era la única que me podía decir que le había pasado algo a mi papá. Eduardo era el gerente de la plantación. Me preocupé, mi corazón empezó a latir fuerte, organicé las ideas.

Llamé a mis hermanas preguntando si habían hablado con mi papá, yo no les quería decir puntualmente lo que me había dicho mi amiga, ni quería comentarles sobre la llamada perdida. Una de ellas me dijo que había hablado con él hace media hora y mi sobrino dijo que había hablado con él hace cinco minutos, es decir, después de las 08:00 p.m. Volví a comunicarme con mi amiga, me dijo: “¿cómo te fue?”.

Conociendo a mi papá, no se iba a dejar matar, él buscaba siempre soluciones a los problemas, no podía entender cómo lo iban a matar. Empiezas a analizar muchas cosas en ese momento. La única persona que me había confirmado la muerte de él era mi amiga. A las 09:00 p.m nos llaman y confirman que mi papá había muerto. Les pedimos que verifiquen. No sabíamos nada de los hechos, de la escena, solo sabíamos que había sido cerca a las oficinas del cultivo. Fueron 17 disparos, no sé qué tipo de arma, no sabemos nada sobre el autor intelectual ni material de los hechos.

No entendíamos nada, seguimos sin hacerlo. Fue cuestión de brevedad, estaba vivo cinco minutos antes cuando habló con mi sobrino. Inclusive, una de las empleadas del casino lo llamó a decirle que la comida ya estaba servida. Mi papá alcanzó a dar dos cucharadas antes de que lo mataran. Fueron 4 personas por él, lo tomaron de los brazos. Al vigilante le quitaron el arma y le dijeron: “no diga nada”, seguro para que no corriera riesgo su vida. Sin embargo, yo me podría estar inventando la historia que cuento. Nosotros no sabemos nada con certeza. Aquí la investigación tendría que decir si se contradice o no, si el testimonio es verdadero o no. La verdad está en su conciencia, en mi papá difunto, fue quien vio todo, él es el testigo principal. El ejército y la policía conocían la situación a la que se enfrentaba mi papá.

Entonces, si el búnker que estaba a cinco minutos en carro, 30 caminando, ¿cómo es posible que a mi papi lo asesinen a las 08:00 p.m y el ejército llegara a las 05:00 a.m? No entendemos esa negligencia.

Esa fue la historia que nos contaron, no sabemos si es verdad o mentira. Pero esa es la historia que hoy nosotras contamos.

La plantación no estuvo interesada en mi papá, aunque sabían que corría riesgo, no le dieron la protección que el caso ameritaba. Y no me explico quién pudo ser, a mi papá todo el mundo en Tumaco lo quería. La única persona que no quería a mi papá, era la persona que sabía que él era la piedra en su zapato. Hay una investigación hoy en curso, al menos la empresa se responsabilizó de interponer la denuncia, pero, como todo en este país, no pasa nada. Uno quiere que la solución sea inmediata, pero hay que entender que hay un camino que se tiene que hacer para llegar a una conclusión. Es tardía, pero ojalá se consiga el propósito, igual si no se consigue esclarecer con la ley, hay una ley que sí es acertada, la justicia divina.

Todavía arde el pecho, porque no es fácil. Tengo una hermana que sufre de artritis y su enfermedad la deterioró más luego de eso, física y psicológicamente fue la más afectada, o todas igual, pero en ella en específico en su forma de aceptación ha sido diferente, en la mía ha sido de forma pronta; si pudiese devolver el tiempo volvería al 17 de diciembre del 2014, no le hubiese dado el número de mi papa a la persona que quería que trabajara en la plantación. Lo único que pediría es que la verdad sea verdadera, que refleje lo que realmente sucedió, y que las personas que estuvieron involucradas, material e intelectualmente en el asesinato de mi papá, paguen.

Hubiese sido muy especial haber podido compartir más tiempo físico con mi papá, pero bueno, no fue así, y lo poco que lo tuvimos lo aprovechamos. Fue muy afortunado, tuvo seis mujeres, mi mamá, mi sobrina y sus cuatro hijas.





“Trabajar como los caballos, mirando para adelante”

Juan Gabriel Arias
El Tarra (Norte de Santander)

Itinerante, este comerciante empírico va de un lugar a otro en el Catatumbo. El conflicto, los hechos contra su familia derivaron en la pérdida de los negocios en los que invirtió los ahorros de toda una vida. Vacunado y desplazado recurrentemente por la búsqueda de financiación de las FARC, acabaron con sus sueños y con las oportunidades que le tomó años construir.

Desde pequeño fui desplazado. A nosotros, a mi familia, nos desplazaron de Convención, la tierra natal de mi madre y mi abuela. Queríamos buscar otros horizontes, queríamos buscar cómo sobrevivir porque mi madre murió cuando tenía 14 años. Entonces quedamos prácticamente solos con mis cinco hermanos. Siendo un joven de 14 años, tuve que criar tres niñas.

Yo trabajaba vendiendo verdura, vendiendo cigarrillos. Conseguí esposa y luego tuvimos dos niñas. Tuve que buscar trabajo, algo que me permitiera sostenerlas a todas, así que nos fuimos para El Tarra, Norte de Santander. Encontré trabajo como ayudante de bus en El Tarra. Pero allá hay que trabajar como los caballos, mirando para adelante, no puedes mirar para ningún lado, sino para adelante. Si mira para allá es porque usted está ayudando a tal persona. Si mira para el otro lado, es porque ayuda a tal otro, o porque viene infiltrado a hacer quién sabe qué otra cosa. Fue bastante complicado, porque yo era un peladito, un niño lleno de sueños. Sueños que quería para mí, para mis hermanas. Nacieron mis hijas y quería realizarles los sueños que yo nunca pude poner en acción, pero de nuevo me tropiezo con una piedra bastante grande.



Monté mi local. Le invertí todos los ahorros de mi vida, toda mi energía. Estaba contento porque lo tenía bien surtido. Tenían buenas cosas. Tenía ya la máquina de *broaster* para vender pollos. Tenía más de 25 juegos de mesa. Tenía un local bastante amplio. Por primera vez me había sentido realizado. Además, era administrador. Administraba una discoteca y 2 cantinas de pool. En el 2011, este era uno de los pocos pueblos en Norte de Santander donde los grupos armados no entraban armados, entraban de civiles, nunca armados porque en el pueblo hay un comité y no los dejaban entrar si venían cargados. Aun así, los grupos al margen eran los que mandaban, en especial las FARC.

En mi local, a los tres meses de haber empezado a trabajar, llegaron. Fue una mujer, llegó, se identificó. Me dijo: “usted para trabajar necesita un permiso”. Yo le dije que el Comité de Actividad Cooperativa del pueblo ya me lo había otorgado. Ante lo que me responde que era de ellos, de las FARC, de quien necesitaba la autorización. Tenía que hablar con tal persona y esa persona me daría razón de la cuestión de la autorización. Cuando me mandó razón, al principio nos estaban pidiendo entre 300 y 350 mil pesos mensuales. Yo le dije la verdad, para mí es mucha plata, porque yo trabajaba en el pueblo jueves, viernes, sábado y domingo, y me venía el lunes para Cúcuta. Tenía que pagar, además, los transportes, el arriendo en mi casa. Quedamos en un acuerdo de 180 mil pesos mensuales. Ellos mandaban todos los primeros lunes de cada mes por la plata. Cada lunes llega una persona distinta. Nos daban un ticket y nosotros pagábamos. El conflicto afecta mucho porque, por ejemplo, en los negocios de comida rápida y así de comercio, no es mucho lo que se gana. Y esa gente quiere llegar y quitarle a uno un porcentaje, sabiendo que el trabajo es de uno.

Yo me había asentado con una de mis hermanas en El Tarra. Comenzamos a trabajar con ella en un lugar que yo administraba. Los hombres de las FARC habitaban el pueblo. En consecuencia, también los locales comerciales del pueblo. Casualmente, cuando mi hermana trabajaba conmigo, un hombre de las FARC que frecuentaba el club, se enamoró de ella. Y esa gente, si se enamoraron de usted, no importa si usted quiere o no. A mi hermana la terminaron violando el 25 de febrero del 2011. La violaron, la maltrataron, y a nosotros, su familia, nos amarraron por 35 horas para preguntarnos, ante su desaparición, por su localización. Ante el suceso de mi hermana, tuve que

salir del pueblo. Tuve que volver a dejar todo botado. De nuevo perdí parte de mi trabajo, de mi tiempo, de mis ahorros. Me tocó volver a empezar de nuevo en Cúcuta que es mucho más difícil porque en la ciudad no hay oportunidades para nadie, no hay posibilidades de empleo para los jóvenes, no hay oportunidades de empleo para la persona que no tiene estudios.

Ahora estoy en Cúcuta, desempleado. Por eso, en mi labor como líder de una Fundación para víctimas, siempre he querido decir que nos respeten el derecho al trabajo, que nos respeten, nuestro sacrificio, el tiempo que uno le dedica a un local, a un emprendimiento. Me costó años edificarlo, y lo perdí en un abrir y cerrar de ojos.



“Si oyen tiroteos, por favor apaguen la luz”

Jean Claude Bessudo
Bogotá (Colombia)

¿Cuáles son las implicaciones de hacer turismo en un país en conflicto? El presidente de Aviatour cuenta sobre los retos de este sector económico en el marco de un país que se debate entre los grupos armados ilegales, los tiroteos, las amenazas y las falsas acusaciones hechas en su contra. La industria del turismo no solo ha padecido los efectos directos del conflicto armado, también se ha visto disminuida y opacada por un contexto donde el miedo y la inseguridad impiden que los turistas se “aventuren” por los rincones de Colombia.

Es muy corta la industria del turismo en Colombia. Este era un país totalmente desconocido hasta los años de 1960. No existía nuestra industria turística, eran muy pocos los viajeros internacionales que se aventuraron por Colombia. Éramos desconocidos a nivel mundial, y eso fue mejorando un poquito a partir de los años 1958 - 1960, en los que se creó la Empresa Colombiana de Turismo, que luego se transformó en la Corporación Nacional de Turismo. Empezamos a viajar a ferias internacionales, a hacer material, a dar a conocer el país; y digamos que nos iba aceptablemente bien, hasta diciembre de 1978. La toma del Cantón Norte tuvo cierta repercusión internacional. Luego vino la toma de la Embajada de la República Dominicana, que tuvo bastante alcance internacional por haber sido los embajadores quienes fueron ahí retenidos, secuestrados. Aunque fueron significativos estos sucesos en la marca de país, luego Colombia se pudo recuperar.

Aunque se esperaba que las cosas mejoraran para el país turístico, Colombia jamás se repuso de lo que significó la toma que hizo el M19 del Palacio de Justicia. Eso no cabía mucho en la imagen de nación en el exterior. Y esa fue una imagen reiterada: esa era la Colombia que conocía el mundo internacional. Sin embargo, la industria turística se fue reponiendo poco a poco de ese golpe, sobre todo con los Acuerdos de Paz. Los Acuerdos de Paz en el exterior fueron asimilados, igualados a la paz. Y entonces volvió a renacer la industria turística en Colombia, por supuesto, con esos altibajos



que son inherentes a la coyuntura nacional y afectan enormemente la imagen del país: los asesinatos de líderes, los falsos positivos, las matanzas, los problemas de derechos humanos. La industria turística es muy sensible a eso.

Nosotros no hemos sido ajenos a esa coyuntura conflictiva. Hemos tenido que intentar hacer turismo entre los grupos armados, los tiroteos, las amenazas y las falsas acusaciones.

El problema en Gorgona

Comenzamos a promover el turismo en la isla de Gorgona, en el Pacífico colombiano. Le invertimos mucha plata. Recibimos una carta, si no me equivoco, del sargento o teniente Díaz. Tuve una conversación con un Teniente, pidiéndonos que cuando llegaran los turistas, diéramos una charla para cuidar a la gente del conflicto armado: “si oyen tiroteos, por favor apaguen la luz y métanse debajo de las camas”. Eso era ridículo. Si ellos creen que en esa condición es posible hacer turismo, pues estaban muy equivocados. Claramente no era posible pensar en la posibilidad de llevar turistas y tener que advertirles este tipo de cosas. Era un riesgo para todos, y se lo dije al entonces teniente, por lo cual, me contestó que si llegaba a suceder algo, yo era responsable tanto en el aspecto penal, como civil, de lo que llegara a ocurrir.

Tiempo después, las FARC se tomó la isla de Gorgona. Había algunos turistas. Terminaron matando al Teniente con el que tuve esas conversaciones. Le dimos unas casas a su hija, una que tenía y otra que le apareció, le dimos unas casas a las familias. Con mucho pesar, nos tocó cerrar y Parques Nacionales también cerró la operación en Gorgona.

Los efectos colaterales del conflicto en la industria del turismo

En otro punto del país, pusimos un catamarán que parecía un ferrari, toda una maravilla. Lo pusimos para poder llevar gente en forma cómoda a la isla de Malpelo. Ese catamarán costaba miles de dólares. Hubo bombas en Guapi, bombas en Buenaventura. Los grupos que teníamos, todos nos cancelaron, había mucho miedo de viajar por Colombia. ¿La rentabilidad de ese catamarán? Nula. Nos tocó mandar el catamarán a las Galápagos.

Luego compramos un aerodeslizador anfibia, para ir de Cartagena a Mompox, e incluso hasta más abajo, todo a través del Río Magdalena. Le dispararon en Zambrano, por los lados de los Montes de María; fuera el hovercraft, sacado de la circulación. También, en el año 2000, estalló un petardo en Cartagena. Los cruceros dejaron de ir a esa ciudad alrededor de 5 años.

En San Andrés, pusimos un submarino turístico, más o menos en la presidencia de César Gaviria. Lo teníamos financiado, viajaban los pasajeros que pagaban tiquetes en Avianca, en ACES, en SAM. Nos tocó quitar el submarino porque dejaron de volar todas esas aerolíneas que mencioné. La carátula de la revista Semana decía: “Estados Unidos va a invadir San Andrés”. Rumores de invasión nos sorprenden en San Andrés, con eso, ya no hay más vuelos, entonces no hay más pasajeros, no hay más submarinos. Eso se llama conflicto armado.

Las inversiones en Santa Marta y las supuestas alianzas con Jorge 40

En el Tayrona, el presidente Álvaro Uribe nos había pedido poner socios locales que quisieran administrar el parque, promocionar allí el turismo. Tratamos de poner el hotel Zuana, que es del grupo Bolívar. No se interesaron en el tema. Tratamos con el hotel Irotama, tampoco se interesó Héctor Díaz. Tratamos con la Cámara de Comercio de Santa Marta, dijeron que no tenían plata, entonces les propusimos: “bueno, pongan el 1% de la plata y les damos el 10% de la utilidad, pa’ tener algún socio samario”. Nada de nada.

Después, hubo una agencia de viajes local que dijo estar interesada en nosotros; el señor había sido alcalde de Santa Marta, era socio con su hermano y a nosotros nos pareció perfecto. No tenían la plata, pusimos la plata para ellos. Sin que lo supiéramos, pusieron socios ocultos, desde el gobernador del departamento, Trino Luna, hasta testaferros, Jorge 40. Entonces, cuando apareció una carta de Jorge 40 con sus huellas, pidiendo reembolso porque eso no daba lo que él esperaba, nosotros nos dimos cuenta. La plata que él les dio, ellos, los tales socios, la tal agencia, nunca entró.



Gelves Albarracín, alias ‘El Canoso’, tesorero, relacionista público, yo no sé qué sería él de los paramilitares, aparecía constantemente diciendo que yo había ordenado desalojar 500 familias. Que él se reunía conmigo para planear esos desalojos. Según él, éramos íntimos amigos. Y para saber que yo a él nunca lo había visto...

Me cansé de esa situación, de esa falsa acusación. Le mandé al doctor Eduardo Montealegre Lynett un disquete con el noticiero, donde alias “El canoso” decía que nosotros cooperamos, pidiéndole el favor de investigar. En vez de ordenar la investigación, me llegó un *marconi* —hacía 40 años yo no recibía un *marconi*— citándome a tal fiscalía con una doctora Pastrana, allá en Paloquemao, por acusación de calumnia. Lo raro es que yo no había puesto una denuncia por calumnia, yo había pedido una investigación. Todo el mundo me dijo: “no, no, no vaya, no vaya”. Y yo: “claro que sí voy, a ver de qué se trata”. Fui, y para mi sorpresa, me encontré con el señor Gelves Albarracín, alias ‘El Canoso’. Nos citaron a conciliación en la Fiscalía y fue muy interesante porque yo le dije al señor Gelves Albarracín:

—Tengo mucho interés en conocerlo. A ver, cuénteme, usted dice que se reúne mucho conmigo, ¿cómo se llega a mi oficina? Dibújeme mi oficina.

—Cómo era la mesa de mi oficina?

—Redonda

—Y, bueno, ¿cómo estábamos sentados?

—No, pues estábamos sentados, usted detrás de su escritorio...

—No, pues yo no atiendo en mi escritorio, excepto cuando hay temas de teléfono.

—Entonces, le dije: “no, la entrada es así, y la mesa es cuadrada, no redonda”.

El señor terminó reconociendo que ni me conocía y que nunca se había reunido conmigo. A raíz de algunas de las declaraciones, me citó la fiscalía y la fiscalía precluyó y terminó la investigación, archivó el tema. Gracias a eso, gracias a que me pusieron cara a cara con el señor Gelves Albarracín, no estoy en la cárcel hoy en día, y les puedo echar el cuento. Porque él certificó ante un fiscal que no me conocía.

Las implicaciones del trabajo en la vida personal

En el peor momento, tuve secuestrados entre 15 y 16 amigos. Tuve que estar metido, ayudar, ir a pagar... Lo que a usted se le pase por la cabeza, con el visto bueno de la Policía Nacional. La decisión, junto con mi esposa, siempre fue quedarnos en el país. En algún momento, tuve que insistir en la investigación de tiquetes robados. Por lo general, los tiquetes robados en aquel entonces eran muy utilizados por el narcotráfico; y entonces recibí muchas llamadas de amenaza, y en algún momento me tocó despachar a mis hijos al tiempo, todos, donde mi hermana en París. Un tiempito. Y, pues, para que no me siguieran amenazando, dejar las investigaciones.

Para el turismo, puede existir de los gobiernos la mejor voluntad del mundo. Por ejemplo, en el gobierno de Álvaro Uribe, se crearon las caravanas turísticas. Esas caravanas eran turistas con compañía militar. Sin embargo, el turismo en un ambiente militarizado a ultranza, no creo que sea bueno. Lo que necesita Colombia para su desarrollo es un imperativo moral, donde se enseñe a amar y respetar la vida.





“Una guerra que no nos han contado”

Fernando Alonso Calle
Ituango (Antioquia)

¿Qué sería del desarrollo, de la calidad de vida en Colombia si no existiera la guerra? ¿Cuáles serían las oportunidades para emprender? En este testimonio, desde el destierro, Fernando, emprendedor del municipio, relata cómo la economía del miedo reinó en Ituango. Este es un relato sobre las pérdidas, las amenazas y las esperanzas de desarrollo que la guerra no permitió materializar.

Mi vida transcurrió los primeros 27 años en el municipio de Ituango, un pueblo exageradamente próspero. Un pueblo campesino que llenaba los viernes, sábado y domingo, a veces lunes, su plaza de mercado. Llegó a ser el primer productor de frijol y cerdos en Antioquia, el segundo de maíz y el onceavo de café. Ituango tenía un barrio que se llama el “Carmelo”. “El Carmelo” llegó a tener 47 fondas, dos restaurantes y 11 casas de alquiler para que los campesinos que llegaban al pueblo, pudieran dormir. Hoy en día, si tiene una tienda, no tiene dos. Me da angustia y tristeza, hoy no queda nada de esos tiempos. ¿Y eso a quién se lo debemos? Inicialmente a la guerrilla, luego llegaron los paramilitares, y luego todas las derivaciones de esos dos grupos. De los que nacimos acá, muchos no volvieron, porque encontraron un trabajo, se pusieron a estudiar, porque hicieron su casita y terminaron viviendo en las montañas de Medellín. Hoy, de ese Ituango próspero, no queda absolutamente nada.

La llegada de las guerrillas

Nosotros somos una familia de diez. Mi papá murió precisamente el año que entra la guerrilla a Ituango, en el año 1987, que se conocen los primeros guerrilleros armados, porque sí hay conocimiento de que antes vinieron a hacer trabajo de campo trabajo de milicia algunas personas. El grupo armado entra en el año 1987. Nosotros vivíamos tranquilos, teníamos nuestros negocios, vivíamos bien, no éramos una familia con muchos recursos, pero vivíamos bien.



Cuando llegaron las guerrillas, primero el ELN, duró poco porque las FARC entre 1986 y 1987 los desplazó y se quedó con el territorio. Empezó las FARC a vacunar a todos los que tuvieran tierrita, sus cultivos, a extorsionar y a secuestrar a los ricos de Ituango como Don Javier Duque, Don Ernesto, un ganadero que fue desplazado por la guerrilla. Murió hace tres días, pero ahí quedan sus hijos que también han sido secuestrados; también Don Pacho Angulo. Empezaron a secuestrar a todas estas personas pudientes que tenían y daban dinero, y estas personas tuvieron que retirarse de Ituango y empezar a dejar el pueblo sin trabajo y empleo. Pero no fueron solo los ricos, la guerrilla hizo que mucha gente abandonara los territorios y pasamos de tener 37 mil habitantes en los años 1970 a tener 16 mil habitantes en el año 2000. También producto de una guerra FARC-AUC, quienes también fueron victimarios de nuestro pueblo.

El mayor destrozamiento de Ituango se dio cuando la guerrilla se enamoró del Comando de la Policía de Ituango, porque para ellos era un bunker inexpugnable. Arremetieron cinco veces. Cinco veces en ocho años se tomaron el pueblo y destruyeron su economía. Nosotros, los ituanguinos, no consideramos una toma guerrillera un hostigamiento de dos o tres horas de bala, que tiran del monte pero no hacen presencia en el casco urbano, pero sí expone mucho a la población. A eso no lo llamamos toma, pero sí cuando con cilindros bomba y dinamita destruían las plantas físicas, hospital, escuelas, colegios, la iglesia, la casa cural, el comando de policía, la casa consistorial en ese tiempo -hoy el palacio de gobierno-, el supermercado cafetero que también era la agencia de compra de café, el servicio de odontología de los campesinos agremiados a la Federación de Cafeteros. Todo eso fue destruido, derivando en la penuria económica en que se convirtió Ituango.

En la segunda de las incursiones, en la segunda toma guerrillera, las FARC abrieron y permitieron que todo mundo saqueara y terminara con el supermercado cafetero del municipio. Ese supermercado regulaba los precios de la economía local. Y ese no fue el único destrozo. En todas estas tomas se quemaban negocios, almacenes, hicieron que la gente tomara otros rumbos y dejara al pueblo solo. Las cinco tomas fueron cruentas, un deterioro económico para nuestro pueblo.

Mi familia era la única que vivía en el marco del parque principal, vivíamos encima de la Caja Agraria. En las cinco tomas, la Caja Agraria siempre fue un objetivo militar de las FARC: la encendían a bala. Por este tipo de circunstancias, decidimos hacer un túnel para comunicarnos con otra casa que estuviese en la manzana, pero lejos, en caso tal de que un día volaran la Caja Agraria. Siempre que se entraba la guerrilla, nos metíamos por ese túnel y salíamos a un patio y lográbamos solventar ese peligro al que estábamos sometidos. Hasta que el 5 de marzo de 1995 le echaron dinamita. Deterioraron y quemaron la casa, ahí todos nos tuvimos que venir de Ituango por todos los peligros.

El 14 de agosto de 2008, la guerrilla le puso a un amigo de mi hermano una bomba en la nalga. Digamos que en la nalga porque él estaba recostado en un poste de la luz y el poste tenía adherido un basurero. En el basurero pusieron la bomba con la que mataron a 14 o 17 personas, hirieron a más de 91 personas y a mi hermano, Alberto de Jesús Calle Gallo, recibió la onda explosiva y evitó que la onda expansiva matara a mis otros hermanos. Estábamos sentados en la peatonal, entonces la onda explosiva lo destruyó a él en la parte de atrás, totalmente. Al hacer eso, la onda expansiva se abrió de izquierda a derecha y no tomó así a los hermanos que estaban sentados. Él, por el contrario, estaba parado. Mi hermano murió.

Si la guerra en Ituango, y si la guerrilla no hubiese estado en Ituango, nosotros viviríamos en Ituango y tendríamos allá nuestros negocios, la casa y las propiedades que con el tiempo hubiésemos adquirido. Hubiésemos conseguido entradas, empleo para la gente, porque hemos conseguido por todos lados, pero la guerra nos hizo abandonar nuestro pueblo. En el caso personal, inicialmente yo abandoné el municipio con mi mamá por la situación que estaba sucediendo del peligro de las tomas guerrilleras. Pero en el año 98, como yo ya trabajaba en la fiscalía, y era investigador de las variables de paramilitarismo, ya yo empecé a tener amenazas por parte de los grupos armados tanto paramilitares como guerrilla. Empezaron a matar a muchos compañeros de la unidad en la que yo trabajaba. Yo era coordinador de la variable de paramilitarismo, y empezaron a amenazar y a matar a muchos, entonces las directivas de la Fiscalía Regional y en ese tiempo, y de la dirección del CTI y el doctor Iván Velázquez Gómez, director regional de Fiscalías, y el doctor Gregorio Oviedo, nos ofrecieron, para evitar que nos mataran, porque habían dado la orden de matarnos, nos que era mejor que nosotros nos fuéramos a esconder a otro lado, lejos de Antioquia. En el caso mío, yo me fui para Barranquilla, estuve allí trabajando en las variables de paramilitarismo y de subversión.

Después de la guerrilla, llegaron los paramilitares

Tiempo después, me tocó trabajar todos los casos, todos los hechos y todas las denuncias de la comunidad de San José de Apartadó, una comunidad de paz que dirigió el padre Francisco y resistió a la victimización por parte del frente quinto de las FARC. Por saber y conocer todas esas cosas, en el año 2013 estuve retenido y amenazado por unos desmovilizados del paramilitarismo y en esas me la he pasado yo, desde el año 97, que llegaron las amenazas por parte del paramilitarismo.

Cuando la masacre del Aro, yo no estaba en el municipio pero tenía allí dos propiedades. Yo iba a Ituango cada ocho días, porque tenía una finca cafetera. Los paramilitares entraron el 3 de octubre de 1996, estábamos ad portas de la colecta de café. Me tocaba sábados y domingos arrancar para Ituango para pagarle a los trabajadores, ver si le habían echado abono al café, mirar cómo estaban las cosas, también a cobrar el arriendo del Hotel que yo tenía. Fui testigo, no de hechos presenciales, pero sí en la zozobra y la angustia del pueblo de haberse sometido por un grupo paramilitar que delante de la policía y el ejército sacaba, mataba, desaparecía tildando a la gente de guerrilleros. Si mataron a dos o tres que están con la guerrilla, fue mucho, los demás eran gente del común.

Entonces como yo iba, un día me paró el comandante “Junior” y me dijo que yo era un sapo de ellos, que yo por qué tenía que estar yendo. Yo le expliqué que tenía unas fincas y que iba cada 8 días a pagar trabajadores, le expliqué y me soltó, me fui a dormir. A los dos días me fui para Medellín y un día cualquiera me voy para la finca. Cuando estaba en la finca, el trabajador me dijo que abajo en la punta hay un montón de gente y un montón de muertos. Le pregunto, “¿qué ha pasado?”. Cuando yo bajo, iba en unas motos a los paramilitares “Junior” y a “Pedro Emiro”. Yo arranqué en la Vereda el Tinto hacia la Vereda Palo Blanco, tenía que pasar por unas gallinas para llevar a Medellín. Cuando yo llego a Palo Blanco, el compañero mío se baja de la moto. De repente, llegan los paramilitares “Junior” y “Pedro Emiro”, me amarraron, me tiraron en un caño de agua sobre la carretera. Me decían “sapo de la Fiscalía”, con el arma en la mano. Entonces “Pedro Emiro” le decía a “Junior” que ¿qué hacía?. Resultó que el que iba conmigo en la moto, que había sido Teniente del ejército, había sido compañero del ejército de “Junior”, Alias “Junior” o Alias “Mauricio” en el Catatumbo, se llamaba Isaías Montes Hernández. Ahí empezaron a hablar y este muchacho, el de la

moto, convenció a “Pedro Emiro” de que no me matara. Me tuve que devolver caminando. Mientras estaban los paramilitares, no volví a Ituango.

Ituango hoy es una guerra que no nos han contado. Estamos viviendo una falsa desmovilización. Pasamos a una guerra peor, porque hoy en día a un finquero lo están extorsionando tres o cuatro grupos y a todos les tienen que pagar. La paz en Ituango se vio en el papel el día que se firmó y se abrazaron con ropa blanca. En Ituango nosotros pasamos a ser una zona en conflicto permanente. Un conflicto que ya se volvió también urbano y está pasando en la propia calle, y eso no se veía.

En una economía sometida por el miedo nadie quiere invertir, las propiedades para abajo, los arriendos bien caros y las propiedades para abajo. La gente que sale hoy en día a una feria no es el 10% de la que salía antes. Para poder entrar a cualquier territorio, usted no puede aparecer sin permiso, y los campesinos para salir a hacer una vuelta al pueblo o hacer una vuelta en la alcaldía tienen que pedir permiso. La mayoría de los territorios de Ituango no pueden caminar después de las seis de la tarde hasta las seis de la mañana; desde el año 2016, no se puede caminar en la noche, ninguno puede caminar, solo le queda el espacio libre a los armados.





“La verdad es la esclavitud de cualquier representación”

Daniela Abad
Medellín (Antioquia)

Este es el análisis de una cineasta colombiana, sobre las implicaciones del conflicto armado en el mundo cinematográfico nacional; una pregunta por los significados de hacer cine cuando es el conflicto el contexto de todos aquellos a quienes se representa en las producciones. Los límites y responsabilidades frente a la posibilidad de pensar en otros mundos, fantasear con otros escenarios, constituyen parte de las consecuencias directas de la violencia sobre las industrias culturales.

Los cineastas somos emprendedores, eso se ha olvidado en este país. Hacemos parte del sector productivo y no somos un montón de hippies con cámaras. El cine es un sector que mueve mucho dinero. En Colombia, particularmente, es imposible ser cineasta y no relatar el conflicto armado. Ni siquiera porque se trate de un acto de filantropía. Es porque aparece una y otra vez, una y otra vez en nuestras historias y en las historias de quienes conocemos. Yo tengo 2 largometrajes-documentales estrenados en salas de cine. Uno se llama *Carta a una sombra*, que está inspirado en el libro de mi papá *El olvido que seremos*, y cuenta la historia de mi abuelo: Héctor Abad Gómez, quien fue médico salubrista y defensor de los derechos humanos. Lo asesinaron en el año 1987. Tengo una segunda película que se llama *The Smiling Lombana*, también estrenada en salas de cine, es la historia de mi abuelo materno, Tito Lombana, que fue un artista muy desconocido —conocido solo por haber sido el escultor de los *Zapatos Viejos de Cartagena*—; y que se casó con mi abuela que era una italiana. Se vino para Colombia y terminó involucrado, en los años 1970, en narcotráfico. Lo capturaron en Estados Unidos en esos años y luego lo liberaron. Pero digamos que, esta película, aunque es una película, en apariencia, menos vinculada al tema de la violencia, tiene mucho que ver con ser víctima de la violencia desde otro punto de vista. Es la otra cara de esa violencia.

¿Por qué todo nuestro cine está siempre conversando, hablando y discutiendo el conflicto o sacando a la luz el conflicto de forma directa? Siempre que uno se sienta a escribir una película, pues las películas tienen un contexto en el que suceden, resulta muy difícil ser ajenos a ese contexto. Por lo tanto, es casi inevitable que nuestro cine no hable de la violencia y, por lo tanto, de las consecuencias de esa violencia. Entonces, diría que lo primero, la primera dificultad, paradójicamente, que encuentra el cine en Colombia es que está obligado a hablar del conflicto porque ese tema es tan relevante y tiene tanto peso en nuestras vidas, y nos ha afectado tanto a todos, desde hace muchos años.

En mis películas, yo hablo de dos generaciones anteriores a mí; hablo de los años 1940 y después hablo de los años 1970 y 1980. La película que estoy escribiendo ahora es en los años 1990, que son más mis años, y me encuentro con que es inevitable escapar a los temas de conflicto. Entonces, la primera afectación es que no hay alternativa, no hay alternativas en las historias. Es decir, es una obligación hablar del conflicto porque atraviesa todo lo que contamos y todo de lo que hablamos está afectado por eso. Y eso, de alguna manera, me llevó a pensar que el hecho de que el conflicto sea lo más relevante, hace que todo lo que no sea conflicto o todo lo que no sea guerra, pase a un segundo plano. Y la cultura no se considera un tema tan relevante como la guerra, y entonces en la cultura, como está la guerra, nunca se invierte mucho, escasamente hay presupuesto.

Nosotros tenemos, sin embargo, un fondo que espero que logremos salvar —que es el FDC [Fondo de Desarrollo Cinematográfico]—, que es uno de los fondos más importantes, inclusive en Latinoamérica, y ha permitido financiarnos de forma independiente, porque los fondos provienen directamente de la taquilla. En este momento está muy deteriorado porque no hay taquilla por el cierre de las salas de cine en el contexto de la pandemia. Pero digamos que, de alguna manera, el hecho de que el primer problema sea la guerra, hace que la cultura siempre pase a un segundo nivel, aunque no debería hacerlo.

Por la guerra, además, todo el tiempo debo pensar en los lugares. ¿En qué lugares podemos filmar y qué lugares no podemos filmar?, y ¿cuál es el mundo que estamos filmando? Físicamente, me refiero. Entonces, los lugares que filmamos son lugares, casi siempre, destruidos,

abandonados. Filmamos ruinas, filmamos ciudades contaminadas, ciudades llenas de gente, ciudades con grandes diferencias sociales. Nos piden que filmemos como si estuviéramos en París, pero nosotros no vivimos en París. Nosotros vivimos en un lugar muy distinto a París que, quizás en algún momento, se pareció, inclusive; pero ya queda muy poco de esa cultura que nos hemos encargado de destruir. Esto establece una estética muy latinoamericana que, de alguna manera, está impuesta por eso; y que, por mucho tiempo, impidió el acceso a ciertas zonas del país. Hay zonas del país a las que no podemos ir a filmar o hay zonas en las que es muy peligroso filmar. Y creo que, por ejemplo, una película como *El abrazo de la serpiente*, antes no habría sido posible. Que la guerra se haya atenuado un poco, también permite que las películas salgan y filmen en otras partes.

Los espacios son una gran limitante: ¿dónde podemos rodar y cuáles son las condiciones que se encuentra un productor en el momento de rodar en Colombia? Muchas veces lo que pasa con las películas es: queremos rodar acá, pero acá no se puede rodar; es demasiado violento, entonces vamos a buscar algo similar en otra parte. Hace un tiempo hubo, al respecto, una polémica: cuando las productoras tienen que rodar en determinados espacios, pues se han visto en el conflicto de tener que lidiar con las bandas de los lugares, ¿qué pasa ahí?, ¿debes negociar con esas bandas o no? Eso quiere decir promover, apoyar la violencia de alguna manera.

Casi todas las zonas de una ciudad como Medellín o una ciudad como Bogotá poseen bandas de crimen organizado, las esquinas le pertenecen a unos. Entonces hay que hablar con ellos directamente. ¿Qué hacer, entonces, siendo un productor, en ese caso, con esas condiciones? O, ¿cuál es el contrato que debes hacerle a un menor de edad que vive en la calle, o a un chico que es un sicario? ¿Te tienes que proteger contra él?, ¿cómo sabes que no te va a lastimar?, por ejemplo. ¿Cuál es el casting que debes hacer?, ¿cómo tratar con ellos?, ¿cómo pagarles? Cosas muy simples, ¿no? ¿Cómo contratarlos si no tienen una cédula o si no tienen un papá?, ¿quién está a cargo?, ¿con qué instituciones hay que hablar? Todos esos son problemas de la realización.

El cine colombiano casi siempre ha narrado las historias de marginados; o de los más desfavorecidos; o de los más pobres; o las historias que suceden en los barrios más populares. Creo que por eso se ha recurrido muchísimo a actores naturales: porque es imposible hacer que un actor adquiera esas características de una chica, un chico que vive en la calle; o de un asesino de verdad; o de un sicario. Por eso, al final, se recurre a actores naturales porque, de alguna manera, yo creo que Colombia todavía necesita esa verdad.

Esa verdad es, un poco, la esclavitud de cualquier representación. ¿Cuál es esa realidad? Quizás por eso los documentales colombianos a veces tienen mejor taquilla que las ficciones. Tal vez todavía no estamos listos para fantasear.





“Un hombre que tiene sus árboles sembrados no puede irse”

Ivan Tadeo González
Puerto Rico (Meta)

Tras renunciar a su empresa de acero, el protagonista de esta historia decide dedicarse al cultivo de palma africana en Puerto Rico, Meta. Con esperanza, vio una nueva oportunidad de negocio y desarrollo en la zona oriental del país. Sin embargo, con el tiempo, los paramilitares comenzaron a sumarle gastos en su estado de cuentas. La violencia no solo le costaría su empresa, también la vida de sus trabajadores.

Llegué alrededor del 2007 a Puerto Rico, Meta. Era bastante inhóspito, aunque no son sino 14 años atrás. Allá llevé a los señores de INDUPALMA. Ellos compraron allá unas tierras muy grandes, también llevé a los señores de Alma Agrícola. Llevé a muchos palmicultores: a Constantino Camargo, a Héctor Miguel González, Ronal Roa, a Hernán González Pardo, a mi hermano. Estábamos saliendo del gobierno del presidente Uribe y la cosa se veía muy tranquila. Recuperé la confianza, la seguridad que yo tenía en el departamento. Viajamos con el presidente de INDUPALMA que luego fue Ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, y con la gente que él mandaba; con los de ANGLIPALMA, con Don Fermín Garzón; inversionistas importantes. Basado en eso, decidí entrar a invertir en la zona con cultivos de palma africana. De hecho, hoy en día el Meta, o la zona oriental, se volvió la primera zona de Palma africana en Colombia.

Vendí mi casa, vendí todo, vendí la fábrica de tubería de acero. Mi empresa se llamaba SIDEANDES, fue fundada en 1970. Hoy en día esa fábrica tendría 50 años de fundada. Sin embargo, decidí poner mis esperanzas, mis inversiones y esfuerzos en otro lugar. Junto con otros inversionistas, consideramos actividades que tuvieran futuro, que tuvieran altas barreras de entrada, es decir, que no fuera fácil entrar y competir, que tuvieran mercado en Colombia y en el exterior, que estuvieran en sitios cercanos a Bogotá: Puerto Rico se encuentra a 350 km de Bogotá.



Cuando vi los atractivos del producto de la palma africana, el aceite, su aplicación, la mano de obra que genera, las posibilidades de exportar, de mercado nacional, era un producto muy atractivo. Entonces así llego yo a la palma. Para ese momento, el valor de la tierra en el Magdalena Medio era monstruoso, en ese entonces, la hectárea en el año 2006 valía \$10'000.000 en el Magdalena medio. Allá donde nosotros estamos valía 2'000.000 o 2'500.000 la hectárea. Por razones del monto de la inversión, siendo tierras de igual calidad que las del Magdalena Medio, aunque allá tenían un mejor régimen de lluvias, decidimos irnos para Puerto Rico. Estudiamos la tierra, llevamos a técnicos franceses, estudiaron todo el ecosistema, las vías, la cercanía al principal centro de consumo de Colombia (Bogotá), y eso nos hizo de lejos elegir a este municipio como nuestro centro de inversión.

Esos terrenos que yo compré eran tierras silvopastoriles. Eran sabanas de pastizal donde había una vaca por cada 2 o 3 hectáreas, o sea que eran fincas de 5000 hectáreas, con 2000 cabezas de ganado y dos trabajadores. Hoy en día nosotros por cada 100 hectáreas necesitamos 10 trabajadores. Es decir, ya mismo donde había dos o tres trabajadores, hoy en día se necesitan 150 a 200 trabajadores. Generación de empleo, transportadores, conductores, vendedores de fertilizantes, vendedores de maquinaria.

El desarrollo se disparó con los cultivos de palma. No podemos decir que eran zonas abandonadas, pero eran muy rudimentaria las inversiones, eran pastos donde se soltaba ganado y ya está. Importamos semillas de palma africana de Francia. Sembramos la palma africana que se siembra en Kenia y que se siembra en Malasia y en Indonesia. Llegó y floreció la inversión.

El problema inició en el año 2014, cuando estaban apenas floreciendo las inversiones: aparecen los paramilitares en las fincas nuestras, en todo el sector. Dicen que su jefe era el “Loco” Barrera. Pero en la historia comienza a aparecer un tipo, un paramilitar, al que lo conocían por el sobrenombre de “Cuchillo”.

Desde el año 2013, y de ahí en adelante, todos mis vecinos empezaron a decir que les estaba pidiendo plata, a mí no me pidieron nada. Luego, llegaron a mí, a *boletarme*, y me dijeron que tenía que pagar cierta plata por hectárea. Como yo confiaba en el gobierno, e incluso consulté con mis hermanos, decidí no pagar. Empecé a preguntarle a mis vecinos y todos me dijeron: a mí también me llegaron a cobrar, pero yo tampoco voy a pagar, todos dijeron que no iban a pagar. Pues, no pagué. Duré tomándoles el pelo alrededor de un año: que sí, luego que no se qué... y nunca, en un principio, les pagué.

Un día, luego de tanto tiempo evitando esa vacuna, ellos me dijeron: “Vea, señor, o usted paga o le va a tocar...”. Cuando me dijeron eso, yo le comenté la situación a uno de mis dos hermanos que también tiene finca allá. Él me dijo: “Iván, no te dejes chantajear, si quieres, por ahora retira tus empleados de esa finca, deja las cosas allí, saca lo de valor y miramos a ver cómo hacemos con el Ejército”. Yo retiré los trabajadores y así esperé un par de meses, dos o tres meses. Yo seguía hablando con mi hermano y él sugería: “Mire, vamos a hablar con la gente de allá, con los del Ejército allá y con algunos amigos del Ejército aquí en Bogotá. Tranquilo que eso se va a recuperar”.

De pronto, me di cuenta de que la casa la habían cogido los señores que me estaban extorsionando, la gente de “Cuchillo” estaba viviendo allá, en la finca. La habían cogido como base de operaciones. Ahí me asusté. Le conté a mi hermano y me dijo que esperaríamos. Se hizo una especie de operativo secreto y mandaron un soldado vestido de campesino a pedir trabajo. Empezó a trabajar ahí al lado. Luego, los tipos que habían tomado mi casa, desaparecieron. Mi hermano me dijo: ya puedes volver a la finca y yo volví a la finca. Esta parte de los hechos, no está probada, no me consta.

Transcurridos 6 meses, me volvió a llamar el tipo que me extorsionaba y me dijo: “usted nos mandó al Ejército, ¿cierto?”. Acto seguido, mataron a dos hombres míos y nunca aparecieron. Me decían: “sí señor, usted me mandó al Ejército”. A lo que yo siempre les respondía: “yo no he mandado a nadie”. Pues, estos tipos me dijeron, “vea: saca a sus trabajadores mañana mismo si no quiere tener una cabeza de ellos entre una lona”. Me tocó sacarlos. Las fincas se dañaron, esta gente invadió las fincas, eso no volvió a producir, entré en vencimientos con los bancos, ya no tuve cómo pagarles. Al final de la historia, yo supe que a mis vecinos no les había pasado eso porque ellos por debajo de la mesa habían pagado, y yo no pagué.

Lo mío fueron amenazas: “gran tal por cual es que te vas a morir, es que vamos a matar a tus trabajadores, te mandamos la cabeza de ellos entre una lona”.

Ese sufrimiento que uno tiene ahí, no se recupera con nada. Mi señora sufría mucho, aunque yo a ella no le conté todo. Una vez, estando allá, me tocó salir por la noche, descalzo, y atravesé un caño para que no me cogieran. En la habitación tenemos una puerta secreta chiquita, para que cuando pase algo, poder salir fácil, desapercibido. Ese día salí por ahí.

Inicialmente, cuando a mí me extorsionaron, yo no pagué, pero a mis vecinos no les pasó nada. Yo para mis adentros dije: ellos pagaron, por eso no les pasó nada. Por supuesto, ellos pagaron, pero obligados. Nos estaban convirtiendo a las víctimas en victimarios. Pero nosotros fuimos víctimas. Yo no pagué y por eso se quebró mi empresa. Y luego, para volver a recuperar algo, me tocó dar dinero. Se lo llevaron todo.

Además de perseguirme, me quitaron una de mis tierras. Me pedían que se la entregara a “fulano de tal” y ese “fulano de tal” era palmicultor. Ese “fulano de tal”, pienso yo, había sido un paramilitar, un soldado paramilitar que se volvió como testafarro de ellos. Era vecino mío y yo tuve que darle un pedazo de tierra y escriturársela. Después me lo encontré, y no le toqué el tema. Él, por el contrario, me abordó y me dijo: “Doctor Iván, yo quiero tocarle a usted un tema. Me enteré como había sido lo de la finca suya, créame que esa finca la pagué -me dijo él-, yo se la pague a unos tipos y ellos me dijeron que me la vendían. Yo les pagué a ellos y me dijeron que el señor Iván Tadeo González me la iba a escriturar”.

Al cabo del tiempo, habían pasado dos años, dos años y medio, mi hijo menor, ingeniero de petróleo e ingeniero industrial me dijo: “Papá, no podemos quebrarnos. Y si nos vamos a quebrar pues por lo menos recuperemos eso y vendámoslo por cualquier centavo. Déjeme volver, yo voy, déjeme hablar con los que eran los trabajadores tuyos para ver dónde están”. Yo había seguido hablando con ellos, casi todos desempleados. Mi hijo se puso cita y se entrevistó con ellos. Les dijo: “oiga, estos tipos tienen enlaces aquí en el pueblo de Puerto Rico, mándeles a decir que nosotros queremos volver a trabajar, ¿qué hay que hacer?”. Los trabajadores míos allá se conocen con todos en el pueblo: allá sí saben quién es quién. Su trabajo es ser auxiliar de los paramilitares, pero con el vecino y la gente del pueblo no se meten.

Pues, en esas conversaciones para poder volver, me quitaron toda la plata que tenía, la poca liquidez que me quedaba. Pero esa fue la única forma en que mi hijo pudo volver. Volvieron los trabajadores y volvimos nosotros a trabajar. Hoy ya llevamos 4 años recuperándonos. Sin embargo, económicamente, el costo para mí fue grandísimo, yo perdí todo. Solo pude quedarme con unas tierras, de hecho, me quedé solo con dos y la última se la entregué a los bancos. La otra finca me tocó vender la mitad. Hoy tengo la mitad y me la maneja un socio, ahí voy.

La empresa entró en la Ley 1116 (Régimen de Insolvencia Empresarial). Los acreedores no creyeron en la palma porque la palma no es un negocio fácil. Muchas de las empresas palmicultoras han entrado en concurso de acreedores con la Superintendencia de Sociedades, la mía, por ejemplo. Y los acreedores votaron liquidarla. Entre ellos el Banco Agrario, ¡el Banco Agrario dijo que la liquiden! Votó liquidar, no votó que nos dieran un plan de reestructuración a largo plazo. ¡El Banco Agrario, el Banco Agrícola de Colombia!, a un cultivo de palma africana. Esa es de las cosas que un político le promete al empresario: vaya invierta allá en ese sitio, lleve desarrollo; genere empleo; mire yo tengo apoyo aquí o allá, el Banco Agrario los va a apoyar y el Banco Agrario a nosotros nos apoyó al principio, pero luego no.

Hoy en día, la actividad de palma africana en el Banco Agrario está prácticamente vetada, no prestan y si usted está vencido, lo persiguen. Por más de que a veces los presidentes quieren hacer cosas, los mandos medios del Banco Agrario, la gente de cartera y los abogados dicen: “pues no”. Entonces esos mandos medios, la jefa de cartera y los dos abogados me dijeron: no señor, la liquidación no. Y mi empresa se acabó. Entonces hoy en día, las fincas, la finca más grande mía se la entregue en dación en pago a los bancos. Y yo que llegué a tener 500 hectáreas sembradas, hoy me quedan 100 a nombre mío. Fue lo que pude salvar. Y aun así, sigo siendo palmicultor.

Ese es el costo que tuvimos que pagar, era el precio de la libertad, el precio de volver a trabajar, el precio de volver al campo y no perder lo que se había hecho. Luego, me acusaron de auxiliador además, y vinieron por mis bienes. Ese fue el costo de la guerra. Mi señora y mamá me dijeron: no se meta a la palma africana, no se meta allá. Tal vez fui terco, obstinado, pero no era una actividad ilícita, yo lo hacía con bondad y me costó todo mi patrimonio. Sin embargo, yo sigo aquí peleando, sigo con la palma, la quiero mucho, la defiendo y seguiré en y con ella.

No fue que me lo contaron en un libro escrito por un doctor en política, no es una tesis de grado, una tesis doctoral, no, fue lo que vivimos en la sangre y la piel. Aun así, el palmicultor es un hombre de paz, es un hombre del campo, es un hombre que tiene sus árboles allá sembrados y nunca puede irse. Hombre, una persona así, con ese sacrificio de todos los palmicultores, esa gente no se vuelve mala, esa gente es buena.

No hablo por mí, no, yo soy un pecador, Dios me perdone. El cura cuando me confieso me da la absolución.



“Transporte a esta gente”

Wilson Ferley Romero
Chitagá (Norte de Santander)

Esta es la historia de quien es obligado a cambiar una y otra vez de actividad productiva, quien siempre intenta escapar de las exigencias de los grupos ilegales, que aparecen en su trayectoria como un destino ineludible. Hoy Wilson no solo trabaja para proveerse, sino también para pagar la deuda que tuvo que adquirir con los bancos para poder pagar las extorsiones guerrilleras.

Antes de ser desplazado, yo era conductor en Chitagá, Norte de Santander. Manejaba en “Empresas Extra Rápido Los Motilones”, también era productor del agro, tenía un poquito de ganado, pero me he dedicaba más que todo a ser chofer. En este momento, estoy viviendo en Cúcuta, porque ya llevo tiempo desde que salí de Chitagá y no he vuelto por allá por el desplazamiento.

Yo viajaba de Chitagá a Pamplona y a veces hasta Cúcuta. Después del inicio de la pandemia, dejé de manejar y me dediqué a la finca, estaba sembrando papa y arreando ganado. Entre los grupos armados que están en esa zona, destaca el frente Efraín Pavón, del ELN. Ellos siempre pasaban por la finca, veían el ganado y decían: “de pronto nosotros vamos a agarrar un animal de esos para nosotros”. Ellos agarraban las cosas a las malas. Después de que empezó la pandemia, empezaron a pasar más frecuentemente por la finca. Así que decidí desistir de la finca y conseguí una camioneta para hacer trasteos, acarreo, bajar papa de las fincas a la zona principal. Resulta y sucede que ellos empezaron a pedirme que los transportara en la camioneta. Si yo me negaba, pues claro que me amenazaban.

Me comenzaron a dar órdenes: “transporte a esta gente”, “lléveme este mercado”, “hágame este encargo”. Como allá son vías terciarias, son trochas muy feas, entonces le toca a uno de noche, obligado, trasnochar para llegar hasta las zonas donde ellos estaban para dejar la gente, dejar el mercado y después de eso, volver a la casa. Luego de eso, me agarraron ya de tiempo completo, y yo ya no paraba en la casa, porque estaba con ellos todo el tiempo, para allá y para acá, obligado. Si yo no hacía eso, le podían hacer daño a mis hermanas o a mi mamá, ya me lo habían advertido.

Después de todo ese tiempo, de tantos atropellos, durante toda la pandemia, me dijeron que “anocheciera y no amaneciera”, me tocó irme de allá para Cúcuta. Allá dejé a mis hermanas y a mi mamá, ya tengo mucho tiempo sin verlas, uno acostumbrado a estar con sus seres queridos y ahora por acá...

Ahora estoy en Cúcuta luchando, sólo, porque acá no tengo familia. Aunque me fui, las FARC aún me llaman y me piden plata. Como no tenía plata, tuve que solicitar a dos bancos, dos créditos para poder cumplir con el dinero que me pedían. También tuve que vender todo lo que tenía en Chitagá. Ellos me pidieron casi 10 millones de pesos y solo alcancé a reunir 8, haciendo los préstamos a los bancos y vendiendo lo que ya tenía. Ahorita yo no cuento con nada de eso, y los cultivos que apenas estaban en proceso de producción, me tocó dejarlos quietos y perderlos. Estoy pagando esas dos deudas. Debido a eso me empecé a enfermar, hasta que me dio un infarto hace poco. Me dio un infarto, salí de eso hace poco. Acá en Cúcuta estoy en control con cardiólogo, ahora necesito seguir pagando esa plata de la que no hice uso: se la di a otra persona y estoy pagando algo que yo no gasté.

Ahora sólo trabajo para pagar esa deuda y para mí, nada. A veces me toca aguantar hambre acá, porque no alcanza para pagar el alimento, debido a esas cuotas del banco. Y, adicionando los costos que se derivaron del infarto, también he gastado mucho en medicinas. De vez en cuando me llaman todavía, pero como yo cambié de celular, llevo tiempo en que no me han vuelto a llamar ni nada.

En estos momentos estoy luchando, primero, por salir de las deudas y, segundo, seguir estudiando, preparándome como ser humano para un futuro sostenible. La meta es seguir estudiando, para más adelante ser un profesional, tener una vivienda digna, un trabajo digno y crear una familia para salir adelante. Es el sueño de toda persona, imagino.





“Nos la estamos jugando”

Patricia Ayala
Tumaco (Nariño)

Una realizadora audiovisual narra los retos de su actual producción cinematográfica, donde todo el equipo, la viabilidad presupuestal e incluso la vida está en juego en un territorio como Tumaco. La extorsión y la muerte son siempre riesgos inminentes. Aun así, como en la vida en las comunidades, la producción cinematográfica sigue su rumbo a pesar del conflicto.

Evidentemente el conflicto ha marcado en Colombia una línea editorial. A muchos de los realizadores en Colombia nos ocupa el conflicto. Las comunidades y las sociedades no solamente viven el conflicto, sino que viven encima del conflicto. Es decir, logran estar por encima de los conflictos y seguir viviendo. La gente sigue celebrando cumpleaños, sigue enamorándose, sigue viviendo. No sobreviviendo, sigue viviendo. Incluso, a pesar de tener el conflicto siempre ahí. Entonces, el cine y los productos de televisión dan cuenta de esa riqueza que tenemos: por encima, y por debajo del conflicto.

El conflicto nos atraviesa, sería absurdo pretender negarlo. Y, por más que hayamos hecho muchas piezas y obras, nunca es suficiente, tenemos muchas preguntas que hacernos. Entonces, por un lado, creo que el conflicto nos determina y nos interpela como creadores de contenidos; y por otro, también nos pone límites. Eso es un poco lo que nos encontramos cuando hacemos las obras. Nos encontramos con límites y vemos cómo sorteamos esos límites.

Los trabajos que yo he hecho tienen que ver con territorios que están en conflicto, con territorios donde la realidad es compleja y con personajes complejos también. Lo que me está pasando con la película que estoy haciendo actualmente, que paradójicamente es una película de ficción donde uno se imaginaría que eso no iba a pasar, es que aquí es donde más me he enfrentado con la presencia del conflicto, lo cual pone en riesgo toda la producción.

Nunca he hablado con un miembro de ningún grupo al margen de la ley. Nunca me ha tocado hacer eso, afortunadamente, porque para mí es un problema ético. Acudir a una autoridad ilegal, o sea a una autoridad que

no es autoridad, es reconocerle un poder a ese otro y después te vas a tener que someter a ese poder. Aunque muchas veces hay que hacerlo, afortunadamente, de la mano de la comunidad, he podido grabar mis documentales. Si la comunidad te dice: “de aquí no puede pasar, a tales horas mejor no salga, esto no lo grabe, hacia allá no ponga la cámara”, pues hay que hacer caso.

Sin embargo, es inevitable encontrar trabas en la producción. El conflicto armado no solo hace parte de nuestras temáticas, circunda cualquier producción. La película que estoy haciendo en Tumaco nació con una idea que se me ocurrió hace más o menos 10 años cuando entré a Tumaco, cuando fui por primera vez y logré entrar a uno de los barrios más complicados que se llama Nuevo Milenio. Para grabar la película, llegamos e hicimos una avanzada con mucho tiempo de anticipación: el rodaje es en julio y yo me fui desde febrero a vivir a Tumaco. Lo primero que pasa es que hacemos un proceso de casting y nos comienzan a decir que no podemos entrar a los barrios cuando, en general, siempre hemos podido entrar a los barrios donde queríamos hacerlo. Y luego, lo que empiezo a identificar y entender rápidamente, es que es muy riesgoso que la gente de Tumaco, que la gente en el territorio entienda que hay recursos. Porque si hay recursos —así no seamos Hollywood—, te van a extorsionar.

Tengo algunos hechos muy precisos: hicimos el proceso de casting y encontramos a nuestros tres protagonistas jóvenes, dos de ellos son del barrio duro, del Nuevo Milenio, precisamente. Para cerrar la negociación con ellos, íbamos a visitarlos a sus casas para saber con qué contexto estábamos jugando y si se iba a poder o no hacer con ellos la película. Yo me fui al Nuevo Milenio —que no es un barrio ajeno para mí—, pero casi tuve que disfrazarme de local para poder entrar. Cuando llegaba el momento de hablar de la remuneración económica, con mis protagonistas en sus respectivas casas, tenía que bajar la voz y decirles: “obviamente hay una remuneración económica, pero vamos a decir que no la hay”. Porque si decimos que la hay, daríamos un indicio de que aquí hay dinero, y si hay un indicio de que aquí hay dinero nos van a extorsionar. Entonces empiezan a surgir todas las historias que no puedes creer, por ejemplo, que la construcción de la sede de un colegio tuvo que detenerse porque las bandas empezaron a extorsionar al arquitecto que estaba a cargo de la construcción del colegio.

Los miembros de las bandas piensan que donde hay dinero, toca extorsionar. Entonces hubo un momento en el que yo empecé a entrar como en crisis profunda: “¿será que me llevo esta película para otro lugar o será que capoteo esto?, ¿cómo lo capoteo?”. O sea, “¿hasta dónde puedo llegar?, ¿hasta dónde puedo hacer que mis actores sean visibles, porque al fin y al cabo son los protagonistas de mi película?”. Entonces toca decir mentiras. Yo pensaba: “no, pues digamos que la remuneración va a ser un computador, que les vamos a dar un computador”. Y uno de nuestros colaboradores locales dijo: “no, un computador no porque un computador puede costar 3 millones de pesos; entonces van a asumir que si tienes 6 millones de pesos, tienes más, entonces hay que decir algo muy *chirri*. Hay que decir que les vas a dar los útiles escolares”.

En este caso, la sombra de la extorsión, increíblemente más que de la censura, habla de los territorios tomados y habla de los poderes nefastos. En términos económicos, en términos empresariales, ¿cómo explicas tú que tienes dinero para hacer una película y súplicas que no te extorsionen porque no hay para más?

Los realizadores audiovisuales nos la estamos jugando, tanto en términos de la seguridad personal como en términos de la seguridad económica y presupuestal, porque siempre, en general, uno no está haciendo proyectos que van a ser un *hit* en el mercado. Nuestras películas no son las que ve la gente el 25 de diciembre. Entonces, hay un grupo de realizadores audiovisuales que se la está jugando para contar las historias de los territorios —que hay que contarlas, historias que son necesarias y que todavía nos tenemos que contar; que tienen que generar preguntas importantes y fundamentales—. Hay que hacerlo y sabemos muy bien que el mundo audiovisual es uno de los más poderosos.

No hay que minimizar el poder de la imagen, de la imagen audiovisual. Por tanto, es importante que sigan existiendo y que se fortalezcan los espacios de subvención, la protección de las comunidades y los realizadores audiovisuales, y la voluntad política que financie y patrocine la generación de este tipo de obras que cuentan el conflicto armado colombiano.



“Esta es la finca y este es un crucifijo”

Jaime Restrepo
Mapiripán (Meta)

Bogotano de nacimiento, pero llanero de crianza. La historia de su familia es la historia de Mapiripán: la titulación de los terrenos baldíos, la transición de los cultivos de caucho a los cultivos de palma, el narcotráfico, y la llegada de la guerrilla y los paramilitares al municipio. Aunque la violencia azotó por años esta región del país, este es un retrato, a viva voz, de las posibilidades construidas por la empresa Palmera Poligrow.

Nací en 1966. En el año de 1970, mi papá, un paisa con unas fincas en otras zonas del país, salió huyendo por problemas de violencia. Tenía un amigo, muy amigo de él, un abogado. Mi papá era médico pediatra, y mi papá era el médico de los hijos de ese señor abogado. Un día el amigo le dijo: “oiga, yo acabo de entrar a hacer un año a Mapiripán, compré unas tierras en Mapiripán”. La primera pregunta de mi papá fue: “¿eso dónde queda?”.

Cómo será de bonita la historia, que en esta foto esta es la finca y este es un crucifijo, ahí está enterrado actualmente mi papá. Cómo querría la zona que me fui hasta allá pa’ enterrarlo.

La historia de titulación de la tierra en Mapiripán

Los mapas de 1970 no mostraban a Mapiripán porque era un caserío, era casi que la parte de una finca que se llamaba la Mapiripana. Con la invitación de ese abogado, fue que yo llegué en 1970, por primera vez, a Mapiripán. Nos fuimos en carro, creo que duramos unos 6 o 7 días para llegar. Como el municipio de Mapiripán no existía y eso dependía de San Martín, las escrituras se hacían en San Martín. Las tierras que nosotros compramos eran adjudicaciones del Incora. En su momento, la finca de nosotros estaba adjudicada hacía 15 años a don Arsecio Durán, entonces nosotros compramos ahí. A los dos años, teníamos ya una resolución del Incora diciendo: “sí, señores, efectivamente la finca es suya, aquí están los planos”.



Llegamos allá, nos quedamos en la casa del que ya llevaba allá un buen tiempo, que es el gringo Tom Kirby, y Ricky Kirby su esposa. Ellos básicamente fueron los fundadores de Mapiripán. Si bien no fueron los primeros dueños de la finca, porque ahí viene una historia anterior de unos alemanes, fueron los que le dieron el nuevo auge al pueblo. Mi papá llegó y quedó encantado con la zona. Le dijo a mi mamá que quería volver a comprar tierra. Ella le dijo que estaba loco, cosa que sí, hace 50 años meterse a Mapiripán no era fácil. Aun así, fuimos al año siguiente a buscar tierras, y consiguió una finca que hoy se llama Hato la Conquista. La finca era de un señor llamado Arsecio Durán, la tenía de toda la vida.

Así empezó toda la trayectoria de mi papá en el municipio: crear y desarrollar Mapiripán. Empezó a contactarse con todos sus amigos paisas que tenían fincas en otras zonas y les dijo: “venga, conocí una zona que nadie en Colombia conoce, que me parece espectacular, que puede ser un muy buen negocio, que puede ser un desarrollo interesante para nosotros como agricultura y ganadería”. Esas eran dos de las cosas en que se movían ellos y todo el grupo de amigos. Así empezó a llevar poco a poco gente a Mapiripán para conseguir tierra y armar un grupo bastante grande.

Del año 70 en adelante nosotros arrancamos con un administrador, quien hoy vive en Mapiripán. Se llama Abel Arias García, trabajó con nosotros toda la vida. Él es tolimense, trabajó en San Martín y llegó a Mapiripán. Nos empezó a mostrar las fincas y dar a conocer la zona. Ahí empezó el periplo. Mi papá hizo compras de tierras, unas a nombre propio y otras simplemente como comisionista, porque lo que le interesaba era tener un *cluster* grande para después empezar a desarrollar proyectos agrícolas como los que habían desarrollado en otras zonas del país. Creo que la primera finca que se adquirió fue una que se llama Miriti, que queda antes de Barandales, en la vía antigua. Luego llevaron al señor Álvaro Gallego para comprar lo que hoy es la hacienda Macondo. Llevaron, o compraron, porque cuando uno revisa de pronto toda la historia de las escrituras, casi que en todas figura mi papá porque compraba las fincas con 2 y 3 socios, para que después se las vendiera a otros socios. Si uno revisa la historia de Bogante y Toninas ahí está, en la historia de Barandales sí no.

Después entraron por Santa Marta, compraron Santa Marta, que hoy está sembrada con palma. Después compraron la hacienda El Bogante, que hoy tiene una parte en palma y una ganadería bastante grande. Más tarde llevaron a la comunidad benedictina, quienes todavía tienen unas fincas en el fondo de Mapiripán. En esa época todo eso se llamaba los Esteros, zona que hoy está dividida en Esteros bajos, Esteros medios y Esteros altos. Son más de 20 fincas, pero era un solo pedazo y ahí entraron los curas. Ellos todavía están con tierras allá. A esa zona llevaron a un señor que se llama Jaime Castaño, quien fue el dueño de lo que hoy se conoce como Esteros. Después llevaron a Jorge Suescún, que fue el dueño de Las Toninas, que es la finca que hoy está sembrada también en palma y que pertenece al grupo Poligrow. Después llevaron a don Rodrigo Echeverry.

La idea era generar un cambio en la zona, como decía mi papá en un titular de prensa: “cambiaremos la coca por caucho”. Desafortunadamente, no se dio. En ese transcurso del tiempo, había una finca vecina a La Conquista, que era originalmente de nosotros, de un señor Felipe Nieva. Felipe Nieva era un señor de la zona y era el dueño de la pista de aterrizaje de Mapiripán. Él tenía su tienda y decía qué avión aterrizaba y cuál no, y cobraba por la aterrizada en la finquita que tenía ahí. Esa finca nosotros se la compramos, se llama La Revelde. Obviamente, ahí viene un poquito el tema del nombre del porqué La Ilusión. Inicialmente, se llamó La Revelde: nosotros somos Restrepo Vélez Londoño de Bedout. Mi papá llevaba haciéndole la cacería a esa finca 10 años y el señor nunca se la quería vender, hasta que cuando la compró dijo: “esta finca si es rebelde, se llama La Revelde”. Para ese momento, yo no sé cuánta tierra podía haber, pero creo que eran unos 20 o 30 dueños de fincas que debían ser unas 30 mil hectáreas que era lo que se pensaba se podría llegar a tener bien fuera en caucho, en su momento en arroz, ganaderías, etc. Y ya como para el 2006-2007, como pa’ hacer el recuento histórico de las fincas, nosotros decidimos sembrar caucho. Todos nos asociamos, incluso con la Alcaldía. Eran entre 80 y 90 personas, desde campesinos, hasta la Alcaldía, hasta los inversionistas que compramos acciones y montamos un vivero de caucho.

Nosotros partimos en dos la finca La Revelde una quedó llamándose La Revelde; la otra se llama La Ilusión, y en esa finca de La Ilusión la dimos en un contrato de usufructo a esa sociedad a 30 años para que ahí se desarrollara todo el proceso de vivero. El negocio de eso era, básicamente, solo vivero, la empresa de Caucho Mapiri, así se llama. No debía sembrarse en ella propiamente caucho, sino que debía proveer todo el material y la asistencia

técnica para que la gente pudiera tener 5, 10, 15 hectáreas de caucho. En ese momento, ese era el tamaño ideal para tener un sueldo mínimo. Debido al desempleo, la violencia de esa época, la droga de esa época, este era un trabajo social interesante. Desafortunadamente, ese negocio no funcionó, trabajó unos 7 años, 6 años, en los que se sembró. Había de por medio una situación social compleja.

Yo nunca vi disputas de tierra, sin embargo, en la primera de nuestras fincas “La Conquista”, había un pedazo al que nosotros le llamábamos “La Isla” (porque tiene una desembocadura de un río sobre el Guaviare), mi papá tuvo ahí algunas disputas con los indígenas. Ahí hay como unas 300 hectáreas de selva. Mi papá era bien medioambientalista, bien conservador de tierras y por eso decía: “eso no me lo puede tocar nadie”. Por eso, pocas disputas hubo en nuestras tierras. Los únicos problemas de tierra que teníamos, los seguimos viviendo hoy: es que cada año, año y medio, llegaban los indígenas, tumbaban media hectárea, sembraban maíz y después tocaba ir al pueblo, pagarles el maíz, pagarles las mejoras y, además, se perdía esa hectárea de selva que tumbaban.

Nosotros, por iniciativa propia, fuimos a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a decirles: “vea lo que están haciendo los indígenas”. Y ahí fue que nos empezamos a enterar de que había una resolución de la Constitución que decía que había que darles tierras, y pues bueno, nos cae de perlas. O sea, en este momento, pensamos “nos cae divino”, mejor dicho, si hay una norma constitucional, me pego de esa y vea esta es mi finca: ¡cójala! Así nos podíamos deshacer del problema de los indígenas.

Así fue como La Conquista la vendimos en el 2019 o 2020 a la Agencia Nacional de Tierras. Trabajamos unos 3 o 4 años muy duro con ellos para poder ampliar lo que es el resguardo indígena; logramos conseguir 3 fincas vecinas, una, la nuestra, otra, la de Abel Arias. Y un pedazo de lo que era La Revelde, partimos, y le vendimos esas 2000 hectáreas en conjunto hace 2 años a la Agencia Nacional de Tierras para ampliación de los resguardos indígenas. Entonces, hoy nosotros quedamos con una finquita pequeña de 200 hectáreas en un contrato de usufructo, pero está invadida por los indígenas hace unos 8 o 10 años. Aunque pagamos los impuestos, corremos el riesgo de que algo pase en esas fincas y no podamos ni entrar. Hemos hecho todo lo posible, estamos en otro proceso a ver si somos capaces de vendérsela a la Agencia Nacional de Tierras, que quiere seguir ampliando los resguardos porque hay unas sentencias de la Corte Constitucional que dictaminan que a los indígenas aún les hacen falta unas tierras. Y como las nuestras son

colindantes a los resguardos (que, además, ayudados a constituir), estamos esperando a ver qué pasa. Les faltan unos pedacitos de tierra a ellos, y pues esta es colindante a sus resguardos.

Ahora, en La Revelde solo tuvimos un problema recién comprada. Esta historia la vi con mis propios ojos, la puede corroborar Abel que estaba conmigo. La finca que nosotros le compramos al señor que era el dueño de la pista, queda sobre el Río Ovejas, es una cosa espectacular, pero era espectacular pa’ todo. Entonces esa era la pista de despegue de toda la coca de Mapiripán. Cuando nosotros compramos esta finca, casi no me acuerdo, nosotros finalmente la tuvimos en el año 84 ó 85. Pasaron 15 años en que el señor no se la quería vender. Tuvimos problemas, pero más que por tenencia de tierras, por un tema de tráfico. Nosotros lo primero que hicimos fue ir a la Alcaldía, y mi papá dijo: “mire, yo voy a comprar esta finca, tiene este problema, allá desde nuestra finca, cada año diferente, vemos aterrizar aviones a cada ratito ahí, y no avionéticas”. Llevaban barcos por el río, metían la avioneta en la selva, cargaban y salían. Mi papá sí dijo: “yo compro esa finca pero necesito que ustedes me respalden porque la voy a arar, voy a arar y voy a cercar esa pista, pero necesito que me cuiden porque pues eso no es tan fácil”. Efectivamente fue el único problema que tuvimos. Apenas aramos la finca y pasamos las cercas pa’ que no pudieran aterrizar, entonces mi papá pasó unos buenos meses o años recibiendo mucha amenaza de todo tipo, pues porque obviamente era la boca perfecta para la salida al río.

Secuestro y extorsión: la llegada de la violencia a Mapiripán

Nosotros llegamos a Mapiripán en los setentas, yo tenía 4 años. Nosotros somos una familia de 6 hijos, paisa. Nos gusta además, viajar con los primos, los amigos y los hermanos. Entonces nosotros todos los años de la vida, nos íbamos encaravanados 6-7 carros: los hijos, los hermanos, las novias de las mayores, las tías, los hermanos; y allá nos quedábamos, generalmente, desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero. Todos. Era una casa que tenía un segundo piso y allá había 20 catres. En un cuarto estaban las mujeres; y abajo, un cuarto grande para el papá, mi mamá y los tíos, cuando iban. Y otro cuarto gigante con otros 15 catres, pa’ los hijos, los sobrinos, los nietos... y los que no cabían, en hamacas. Pasábamos por todo lado. Pasábamos por el río pa’ arriba, pa’ abajo, íbamos a pescar en el río, visitábamos a los indígenas, les llevábamos comida.



Mi papá era médico, el primero de Mapiripán, y siempre promovió la cultura de la salud en el municipio, por allá hay todavía gente que lo recuerda. Muchos me dicen: “ay, usted es el hijo del doctor, él me salvó la hija...”. Porque mis dos hermanas también son médicas. Cuando ellas empezaron a estudiar medicina, hombre, hace 30 años, mi papá se las llevaba dos y tres veces al año y hacían jornadas médicas en Mapiripán. Entonces llegaban a Mapiripán, todos los indígenas y la gente de las veredas y ellos se quedaban 4-5 días atendiendo a la gente porque no había puesto de salud. Entonces, tú preguntas en Mapiripán a muchos de los antiguos, sobre el doctor Juan Luis Restrepo, y dicen: “ay sí, él curó a mi hijo o él curó a mi esposa, o él curó a yo no sé quién”. Porque eso lo hizo durante 15-20 años, sin ningún problema. Pasamos toda la vida sin problema, como hasta el 80.

En el año 80, yo todavía estaba en colegio, se presentó el primer incidente feo en la finca. Estábamos con una hermana, ella tenía 15 años, yo, 13. Estábamos por la noche comiendo con Abel, —él es artífice de todas estas culturas, las conoce, las vivió de primera mano—. Llegó una gente a la finca. Uno por aquí, otro por aquí, tres por acá. Resulta que las FARC secuestraron a mi papá. El secuestro fue muy interesante, querían plata pero querían a mi papá también, como persona. Sabían que mi papá no estaba haciendo mal en el pueblo, sino que mi papá era el médico del pueblo, y que llevaba mercado, y que ayudaba con la carretera. El puente que tumbaron hace 3 años se llamaba Juan Luis Restrepo Londoño, él fue el que dijo hace 50 años, “por ahí tiene que ser la ruta”. Entonces llegaron allá y le dijeron: “vea, doctor Restrepo, yo no me lo quiero llevar a usted, entonces más bien hagamos una cosa. Lo queremos a usted pero necesitamos la plata, así de fácil”.

Para hacer efectiva la plata que le pedían, le propusieron traspasar a nombre de ellos, nuestro ganado. Le dijeron: “bueno, entonces hagamos una cosa, usted tiene dos caminos: o va a Mapiripán, y a Villavicencio —porque tocaba hacer todas las papeletas en Villavicencio de los traspasos de ganado— y vuelve con las papeletas a nuestro nombre, las vende y nos trae la plata; nos deja a sus hijos acá y cuando nos traiga la plata, pues

se van todos tranquilos”. Mi papá les dijo: “no lo voy a hacer por nada del mundo”. Entonces se quedaron, nos dejaron como 3 días hasta que mi papá los convenció y les dijo: “mire, yo les doy los poderes acá, tranquilos, yo les doy los poderes de las papeletas y ustedes vayan a Mapiripán, a Villavicencio, cambian sus 100 vacas, 80 vacas y pues cuando ya las tengan en su poder nos dejan ir, ¡tranquilos!”. Pues así lo lograron hacer, ni nos llevaron a nosotros, ni se llevaron a mi papá. Yo creo que fue por el cuento anterior de que lo querían mucho por el tema médico... Y mi papá era terco, mi papá siguió yendo, no le importaba, no le importó, siguió yendo.

Como 10 años después de eso, se infartó mi papá, ya estaba viejito, pensio-nado. La guerrilla volvió a llegar a la finca, esa vez sí se lo llevaron para el pueblo con Abel. Los tuvieron en una casa todo un fin de semana, querían ganado, otras 100 vacas, y ya dijo mi papá: “pues vea, me quedan 100 vacas, y las 100 que tenía ya las entregué, no me queda nada, entonces me voy”. Efectivamente, la finca se quedó sin ganado durante un buen tiempo y lo que hicimos fue que metimos ganado con el fondo ganadero del Meta, que teníamos en esa época. Dijimos, “pues no la dejemos sola y pongamos vacas del fondo ganadero del Meta”. Metimos esas vacas, mi papá siguió yendo y ahí fue una transición donde ya no se iba mucho a la finca: uno, por la edad de mi papá, y dos, porque se empezó a poner la zona muy complicada.

Ya luego fueron los paramilitares. Empezaron a protagonizar, también, la vida del municipio. Lo cogían a uno en un retén y le quitaban el celular. No se podía entrar con celular al pueblo. Se le hacía su requisa, le quitaban las cosas y entraba al pueblo, iba a la finca y volvía, y a la salida volvía y le daban su celular, le daban sus cosas. Pero, entonces, en la salida lo trababa a uno la guerrilla y le decían: “que usted dónde dejó el celular”. Si les digo que lo dejé en los de los paracos, pues me matan, “no, yo no tengo celu...”. Se empezó a volver un conflicto muy feo porque hubo una época, donde como ninguno de los dos mandaba, entonces fue bien complicado. En la época donde los paramilitares estaban en su auge, nosotros nos retiramos bastante de la finca, muchísimo. Digámoslo que ya fue un tema de pánico. Nos retiramos como unos 8 años, desde 1998 o del 2000, hasta el 2008 que empezó el tema del caucho. En esos 8 años, iba mi papá, de vez en cuando, por la mañana y miraba 3 vacas y se iba; o le decía al mayordomo que se las filmara, porque igual tocaba reportarle al fondo ganadero del Meta. Pedían ganado, nunca una extorsión grande pero sí decían: “ay, doctor Restrepo... una vaca”. Pero una vaca cada 8 días, porque eran muchos, entonces tocaba una vaca. Cuando no era de nosotros, era del Fondo, y cuando no era de nosotros, era de Abel, el administrador.

En la época de la Masacre, nosotros estuvimos de buenas porque no estábamos. De buenas por un lado, pero por otro lado, la persona más querida de nosotros que era Abel Arias, estaba en San Martín (municipio). Coincidentalmente, esa semana se había ido a San Martín, a visitar a su señora y sus hijos. A él no le tocó vivirla en primera persona. En Mapiripán tenía su finca y su casa, por eso tuvo que volver. El terror era tenaz porque no sabía a quién habían matado. Mapiripán estuvo cerrada un tiempo. Cuando lo dejaron volver a su casa y a su finca, empezó a reconocer la magnitud de la tragedia. Aunque apareció en las noticias "una masacre", no habían nombres. Cuando llegó allá, "uy, el de la tienda, o el de aquí, o el de allá, o el de allá". Por ahí hay mil informes de que sí, de que no, de que era de aquí o que era de allá, o que era del otro lado. Entonces eso no lo han podido esclarecer todavía, no se sabe si fueron 50, 20 o 40. Pero digo que gracias a Dios porque es una persona que queremos con el alma, no estaba, porque en ese momento, mal que bien es la persona que más tiempo ha vivido en Mapiripán y lo han podido tildar o del uno o del otro. Pues llevaba 40 años, y sobrevivió 40 años, "y es porque no era amigo de los uno o de otros", así de fácil.

En cierto punto, la situación en el municipio se volvió inmanejable y salimos de todo, tanto el mayordomo como nosotros salimos de todo el ganado, y dijimos: "dejemos la tierra sola, que pues a esa no se la van a llevar a baldados, no nos arriesguemos". Y ya como en el 2004 o 2005 empezó a cambiar la cosa de seguridad social, claro, ya empezó el gobierno como a meterle un poquito más al tema de seguridad y se logró.

Nadie había vendido, ninguno de esos paisas había vendido, todos dijeron lo mismo, todos vendieron su ganadito, sus cosas, pero todos conservaron las tierras, esperando una nueva luz, y la luz se había dado con el caucho. Con el caucho en el 2006-2007, dijimos otra vez: "metámonos de lleno". Otra vez se podía ir. Desafortunadamente no funcionó. Con la llegada de Poligrow, me consta, no solo porque trabajo acá, el cambio social de Mapiripán es increíble. Vacío cultural todavía hay, pues para cambiar una cultura se necesitan una o dos generaciones. Antes no había nada, habían 3 billares, 4 prostíbulos y el cambio era con coca.

La transformación con Poligrow

Poligrow entró en el 2009, nosotros ya habíamos montado en una de nuestras fincas, hace dos o tres años, la empresa de caucho. El pueblo ahora es otra cosa. Ya hay calles pavimentadas, ya hay luz, ya hay agua, ya hay teléfono, ya hay internet, ya hay trabajo y muchas casas. Indiscutiblemente, el tema social pasó por eso: una calma muy linda durante 30 años, unos 15 años muy duros de guerrilla, unos 5 ó 6 donde ninguno mandaba, unos 5 años donde mandaban solo los paramilitares y después mucha tranquilidad, como está hoy. Ese tema social sí ha cambiado drásticamente, antes uno no conseguía una persona ni pa' vacunar el ganado, era difícilísimo, no conseguías gente. O te cobraban el día carísimo porque hoy las personas iban a hacer raspachines de coca, o iban a trabajar a la finca. Entonces conseguir un trabajador que hoy vale 40 mil pesos, le cobraba a uno en ese entonces de 90 a 100 mil pesos. "Si quiere, yo le ayudo pero pues me lo paga al doble de lo que me gano en el otro lado". Entonces, eso hoy en día consigue uno gente para todo. El cambio ha sido impresionante, una cosa hermosa.

Esta es una zona que estuvo aislada durante muchísimos años, independientemente de quien la gobernaba: antes nadie, después unos, después los dos, después ninguno, después el otro. Eso genera un cambio, una cultura de poder: aquí no hay Estado, aquí es la ley del más fuerte. Para nadie es un secreto que de los ochentas para adelante, Mapiripán vivió de la coca. Y eso genera una cultura de la vida fácil, del que manda, del que dice quién entra, quién no entra, que era el mismo dueño de las tiendas que venden las cervezas, del mismo dueño del billar. Entonces yo creo que, cuando llega una empresa como Poligrow, y empieza a traer desarrollo, que empiezan a ver camiones llegando, y que ya la cerveza no costaba 10 mil, sino que vale 5 mil; y que el galón de combustible no vale 50 mil sino que vale 8.900, pues genera una competencia a la que no estaban acostumbrados, y su manera de defenderse a esas nuevas formas de la economía es violenta. Y, a veces, hace más daño una mala prensa que un tiro, digo yo, porque es que el tiro se acabó y listo, pues seguirá otro, y seguirá otro, y seguirá otro. Pero una mala prensa... pues llevamos 10 años con mala prensa diciendo que destruimos el medio ambiente.

Hay alrededor de la empresa todo un tema de difamación que hace mucho daño. Llevamos luchando, yo llevo solo 3 años en Poligrow, pero llevamos, en general, 8 años luchando desde que empezó todo este tema. Llegó una época donde hubo unas excepciones tributarias interesantes para poder sembrar lo que hoy todavía sigue sin sembrar, que es toda la altillanura colombiana, donde entraron empresas muy grandes, colombianas y extranjeras, a hacer lo que hacen en otros países, lo que hacen en Argentina, lo que hacen en Brasil, lo que hacen en el sur de Estados Unidos. Cogen tierras improductivas, donde pasa usted cinco horas en un carro y no ve una vaca, a tener inversiones inmensas y sembrar, generar empleo, sembrar maíz, soya y sorgo. Los únicos que nos metimos con palma fuimos nosotros, pero todo ese grupo de empresas que entraron en esa época a Colombia, la gran mayoría, se fueron por el lado del maíz, arroz y soya, que ese era el combo, todo por el lado de Puerto Gaitán. La única multinacional de palma, fuimos nosotros. Cuando entró la época complicada, todas las demás empresas, ¿qué hicieron? Como esto es un cultivo semestral, pues, recogieron el arroz y se fueron. Los tractores los vendieron. Y allá están abandonadas todas esas grandísimas inversiones. Nosotros ya teníamos 7000 hectáreas de palma. No se puede, no hay nada que hacer, o sea, ahí hay que seguir contra viento y marea.

Entonces, las presiones políticas generan muchísimo daño. Sacaron un resto de inversión extranjera. Esos italianos son demasiado valientes porque, ante esas presiones, así se tratara de un cultivo permanente, quedarse es muy difícil. Pasaron tiempos muy duros desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista económico; porque, pues, ante una noticia de periódico que dice que usted es expropiador de tierras y que ahí sembró la palma, nadie le vuelve a comprar palma, punto. “Hasta que no salga si es verdad o mentira, no le compro”. ¿Con qué pago la nómina? Pero así sea mentira, hasta que no lo demuestre en un estrado judicial. Entonces, difamar es cuestión de un minuto, salir de esa difamación en un estrado judicial puede tomar diez años; y eso es lo que yo creo que ha vivido Poligrow y muchas otras compañías.





“Nos dedicamos a seguir adelante”

Ana Lucía Bolívar
Tumaco (Nariño)

Al lado de cultivos de palma, cacao, y coca en Tumaco, creció la mujer protagonista de esta historia. Al margen de los actores ilegales, pero en el marco del conflicto armado, ha sido testigo de hostigamientos, extorsiones y atentados en contra de vecinos, familiares y compañeros de trabajo en el ingenio de palmicultora en la que trabaja. Estas son las imágenes del miedo y la violencia que circunda la cotidianidad del conflicto.

Mi familia fue tradicionalmente una familia palmera. Por el tema fitosanitario, pues la palma en la zona no se da muy fácilmente y se enferma con muchísima facilidad, decidimos no seguir en ese negocio. La verdad siempre hemos tenido la inquietud y las ganas de volver al cultivo de la palma. Sin embargo, para un pequeño palmicultor sembrar el híbrido, que es lo que tenemos actualmente, implica muchísimos costos. Por eso hoy nuestra finca está dedicada al tema del cacao.

Las plantaciones de palma en Tumaco han sido el eje de empleo y desarrollo. Pero también han sido el epicentro del conflicto en el municipio.

Entre palmas y minas antipersona

La niñez de nosotros fue muy tranquila hasta que entre 1999 y el 2000 inició el tema del ingreso del cultivo de la coca. Con ellos, empezaron a llegar ciertos grupos para tener el dominio del cultivo como tal, de las rutas del narcotráfico, y todo lo demás. Pese que aquí en la vereda no hemos tenido mucha incidencia, las guerrillas siempre existieron. Para ese entonces, había un tema de rutas y de controles, y de esa presencia de los actores armados se derivaron muchísimas muertes. De hecho, yo recuerdo que cuando murió mi hermana, estaba en furor el tema del paramilitarismo; y en el río Mira,

uno veía, veía y escuchaba que mataban cadáveres, que los metían en bolsas, que los descuartizaban. En el río, había mucha gente que simplemente la tiraban al río y desaparecía. No volvían...

Después de eso, nosotros empezamos el tema del estudio en Pasto. Yo hice la tecnología en el SENA y luego empecé a trabajar, como practicante, en la empresa palmera, en Tumaco. De ahí me ingresaron por el tema de nómina. Y la verdad, he sentido más cercano el conflicto armado en la plantación que acá en la casa. ¿Por qué digo que lo he vivido desde la plantación? Los dueños de la compañía siempre han sido muy radicales en que ellos no hacen negociaciones con ningún tipo de grupos. Entonces la empresa siempre ha tenido un roce por ese tipo de situaciones, ¿por qué? Porque acá en la zona siempre se han alternado el poder los distintos grupos armados, y nosotros como comunidad estamos a merced del grupo de cada momento: necesitan un arreglo de sus vías internas y toca mandar la maquinaria; necesitan que les muevan algo y toca mandar el tractor. Entonces yo recuerdo que hubo un tiempo, eso fue en el 2012, nosotros estábamos laborando y empezó una presión, no estoy segura de cuál de todos los grupos armados, sobre un tema de unas vías, donde están los predios de la plantación. Necesitaban un arreglo de vías y necesitaban la maquinaria. Los dueños dijeron que no lo iban a hacer. Así fue como empezó a llegar un grupo de ejército a la zona, cerca de la plantación.

Yo recuerdo que en La Espriella, en 2012, había un grupo de ejército que estaba entrando allí y se estaba instalando el puesto de policías, para seguridad de la comunidad. Entonces los grupos ilegales empezaron a hacer hostigamientos tanto a la policía como al ejército. Los hostigamientos eran con cilindros bombas, con ráfagas de fusil. Los grupos armados al margen empezaron a decir qué le iban a hacer parar la plantación si no les colaboraban, si no sacaban al ejército; y empezaron a instalar bombas o minas antipersonas dentro de la plantación. De repente, cuando las detonaban, se escuchaba el estruendo.

Era tanta la presión que la empresa nos suspendió temporalmente los contratos, paramos por 20 días. Cuando vivimos el boom del cierre de la empresa, porque nos ponían bombas en toda la plantación, salió a relucir el nombre de “Guacho”. Eso fue alrededor del año 2011. Y todo el mundo sabía que era “Guacho” porque en la zona era él quien mandaba. Su nombre comenzaba a resonar, reiteradamente, en el pueblo.

Nos cancelaron el contrato a todos porque nos dijeron: “nosotros no vamos a ceder, la empresa no va a ceder a dialogar con nadie, esperen a que pronto haya una respuesta”. En ese trance hubo una noche que estábamos aquí, en la casa, cuando de repente pasó un muchacho en una moto diciéndonos que teníamos que desalojar porque iban a empezar a mandar “tatucos” explosivos, los llaman así. Mi esposo prestó servicio militar y él me decía: “no podemos salir corriendo porque, si corremos, de pronto nos coge una cosa de

esas —una mina antipersona— en el camino”. Pero todo el mundo salió. Estábamos en la casa cuando las explosiones de las minas empezaron a sonar. Eso suena espantoso. Uno veía cómo la llama encendía. La verdad es un tema que a uno lo marca para toda la vida. Yo, por ejemplo, escucho un estruendo y ya pienso que es algo así de ese tipo.

De repente, la empresa un día nos mandó llamar y nos dijo: “se deben presentar en el horario habitual: 6:30 de la mañana, en el paso del ferry, que vamos a retomar labores”. Cuando nosotros llegamos a la orilla del río, ese día estaba lleno de militares. Había militares en el río, había pirañas, había helicópteros sobrevolando. Estaban buscando proteger la plantación. Eso fue peor porque era a diario: ráfagas de fusil, hostigamiento todos los días.

Un día estábamos ubicados trabajando normal, a eso de las 9 de la mañana empezó un hostigamiento. Recuerdo que la enfermería quedaba fuera de la plantación y el ejército estaba ubicado allí en la zona de la enfermería. Había una niña haciendo las labores en la enfermería, una pasante del SENA, cuando de repente empezaron a tirar los tatucos, y empezaron las ráfagas y todo mundo a meterse debajo del escritorio, a meterse en la esquina de la oficina donde no hubiera ningún alcance de las balas.

En la plantación hay una fundación que tiene una escuelita. Los hijos de todos, incluso de los de los grupos ilegales, estaban allí en la escuelita. A la salida de la escuela, como era paso obligatorio de los militares, habían sembradas minas antipersonas. Uno escuchaba la gente de allí de la vereda que siempre nos manifestaban que ellos les decían: “pero, ¿cómo van a poner minas en esa parte si ahí están sus hijos?”, y que la respuesta era: “estamos en guerra, y guerra es guerra”.

El conflicto en el cuerpo de mi hermana

A mi hermana la mataron en el 2001. En ese entonces había un comisariato de una de las plantaciones. Ella trabajaba en ese comisariato, despachaba comida y mercado a los trabajadores de la empresa; y ella trabajaba hasta las 6 de la tarde. Solía venir desde el pueblo, que queda, más o menos, a unos 20 minutos de acá, y se venía siempre caminando. Mi papá iba y la recogía. La muerte de ella fue el 7 de diciembre del 2001: el día de las velitas. Para ese momento, ella estaba trabajando y estudiando. Fue un día viernes, el día sábado era festivo; entonces nosotros pensábamos que de pronto ella tenía clases. Ella se vino sola, mi papá estaba pintando la casa acá con nosotros. Y después de las 6 de la tarde, mi mamá empezó como con una angustia de que no llegaba, y no llegaba, “¿qué pasó con Maribel?”. Maribel se llamaba ella. No llega, no llega, no llega, y mi papá se fue a buscarla.

El pueblo queda sobre una recta y, para acá, hacia donde nosotros vivimos, toca hacer un desvío. En todo el desvío había una casa; los señores de allí nos manifestaron que la habían visto pasar, y en las primeras casas de acá, de la vereda nuestra, ya no la vieron pasar. Entonces empezó ese desespero, empezamos a buscarla, toda la comunidad, se fue a buscarla porque no aparecía. No aparecía y no aparecía. Como a eso de las 7:30 - 8:00 de la noche la encontramos en una de las empresas palmeras, porque nosotros vivimos cerca de otra palmera, no donde yo trabajo, sino otras que hay sobre la vía. Cerca de la vía, pero ya metida en la palmera, estaba ella con todas las cosas. Y la enfermera y el inspector que había en ese entonces, porque en ese entonces todavía teníamos inspector acá en la zona, hicieron la revisión, hicieron toda la determinación y la encontraron ya muerta, con una seña en el cuello. La habían violado y ahorcado. Nunca se supo, se puso el denuncia.

Mi mamá y mi papá entraron en *shock*. Yo estaba enferma en ese entonces, me habían detectado un tumor en la cabeza. Por eso, mi hermana, la del medio, fue hasta Tumaco al día siguiente para hacer la denuncia, para que hicieran todas las averiguaciones, pero en ese entonces también estaba el tema del conflicto con los paramilitares. Esta era una zona de conflicto, por lo que la respuesta de la Fiscalía y todas las entidades fue que era una zona roja y que no podían hacer ningún tipo de investigación. Entonces, ahí se quedó. Por comentarios que uno escuchaba, decían, que fue el uno, que fue el otro, pero nunca a ciencia cierta supimos quién fue, y pues se quedó allí la situación. La verdad no ahondamos más en el tema, nos dedicamos a seguir adelante como familia y pues, gracias a Dios lo logramos, con la ayuda de Dios y con la ayuda de ella que, sé que de donde está, nos apoya.

La pandemia, las empresas palmeras y la vigencia del conflicto armado

Ahora con la pandemia, otra vez se vive de una manera fuerte, no tanto como en ese entonces, el tema del conflicto, ¿por qué? Porque los grupos que están a cargo ahorita en la zona, de una u otra manera, ejercieron un control sobre las personas que están en la zona rural, ¿para qué? Para frenar un poco la pandemia.

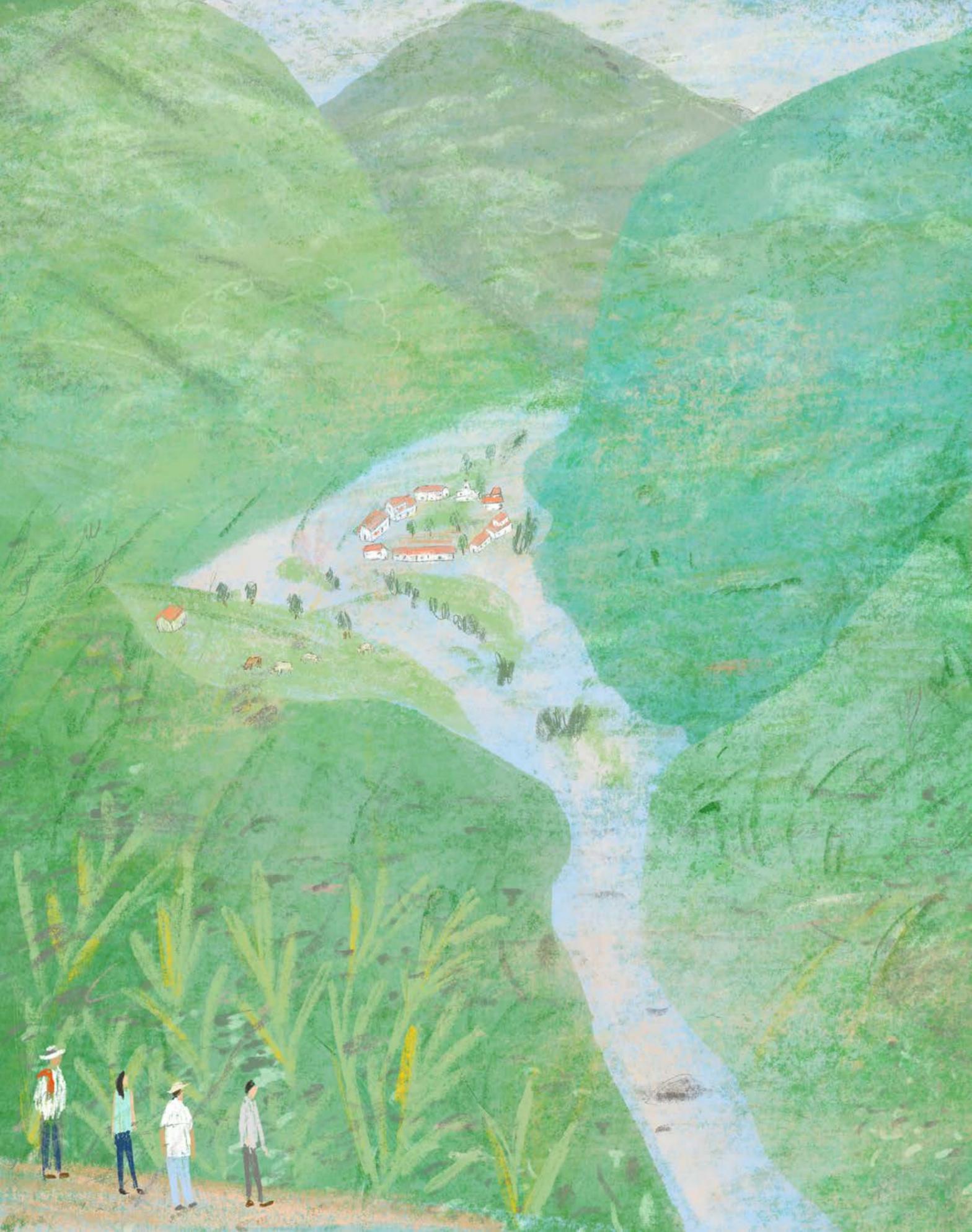
Lo que manifestaban algunos trabajadores, que son las personas que tienen mucho más contacto directo con todos los grupos que operan en la zona, era que ellos decían que no había cura para el tema de la Covid. Entonces empezaron a hacer presión sobre la gente, a no dejarla salir, de hecho, todavía está muy restringido el paso.

En la empresa, volvieron y nos suspendieron contrato por el tema de la pandemia y los actores armados. Hay un bus que viene desde Tumaco con los trabajadores, pasa la orilla del río y los deja dentro de la plantación. Como estaban los grupos armados con el tema de la pandemia, le dijeron al señor conductor del bus que el acceso estaba restringido y que no lo querían ver más en los lotes. Aunque el foco de contagio era el casco urbano, y nosotros estamos en la zona rural, ellos insistían: “no queremos contacto de la gente de Tumaco con la gente nuestra”. Un día el señor del bus, hacía el recorrido de salida del personal y se le acercaron dos tipos; yo recuerdo que el señor llegó a la orilla frío. Primero llegó a mi oficina buscando al ingeniero, al director administrativo, y a la orilla llegó frío y nos dijo que se le acercaron y dijeron: “yo le dije a usted y le mandé a decir a usted que usted no podía estar más en la zona, que usted no podía traer más gente de Tumaco, sin embargo, usted sigue aquí. Si nosotros mañana lo vemos a usted que entra con el bus, le bajamos unos dos trabajadores y se los matamos para que vea que estamos hablando en serio; y ese bus se lo quemamos así sea con las personas adentro”. Ese señor salió despavorido.

El tema de la pandemia también es bastante complicado. Los dueños de la compañía nos decían que nosotros somos parte de la cadena de suministro, que no íbamos a parar, que nosotros teníamos el aval para seguir trabajando. Entonces nos suspendieron nuevamente el contrato, eso fue en abril, para la semana santa, la semana de semana santa completa no la trabajamos. La gente, los mismos trabajadores estaban amenazados, decían que nadie tenía que salir de la casa.



Aunque nosotros vivimos en zona de conflicto, en la vereda nuestra nunca ha habido incidencia directa de los actores armados. Sin embargo, luego de semana santa, mi mamá nos llamó a contarnos que habían hecho reunión en la caseta comunal para informarnos que nadie podía salir a Tumaco. Que si no era con autorización, que si había alguien enfermo, no sabían cómo iban a hacer pero nadie podía salir. Que el tema de la recolección de las basuras tenía que ser mucho más estricto por temas de contagio. Y lo mismo estaban viviendo todas las veredas de la zona.



“Historias cruzadas del comercio antioqueño”

Grupos Focales Antioquia

Extorsiones, desarraigo, asesinatos, son tan solo algunos de los dolores que viven a diario los comerciantes, agricultores y ganaderos en Antioquia. Hacer empresa, en los municipios donde el Estado está más ausente, es un desafío que pone en riesgo, a diario, la vida. Este capítulo contiene la voz de múltiples actores que en este departamento se han visto entre la espada y la pared: entre los actores armados ilegales y el anhelo por una vida en paz.

Gracias a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, diversas víctimas del sector productivo contaron sus relatos sobre la violencia de forma colectiva. En distintos grupos focales, comerciantes, ganaderos, agricultores, y miembros del sector de los servicios, memoraron algunos de los hitos emblemáticos, y de los efectos más considerables de la violencia perpetrada por diversos grupos armados en el sector productivo. A continuación, aunque fueron múltiples las voces que hablaron sobre un mismo hecho, de forma unificada se presentan las historias que los participantes compartieron sobre cada uno de los municipios relatados en sus historias.

Guadalupe: “En todos los lugares del pueblo se sintió”

Vivir en Guadalupe es sinónimo de saber que de distintas maneras estás en riesgo. Uno de los hitos más atroces contra los habitantes y comerciantes del pueblo ocurrió el 20 de julio de 2002. Un estruendo sonó a las 4:30 de la mañana. Puertas se abrían, puertas se quedaban atascadas. Reinaba el desespero de la gente por salir, otros por saber y ver qué había pasado.

Era un sábado, día de mercado. Ese día, el caballo que solía venir con la materia prima para las carnicerías, venía con un cerdo. Al cerdo lo bajaron en el camino, desnudaron a “Pacho Cajones”, el señor que traía la carne. Él tiene un apodo muy casual: en esa época todavía se llevaba la carne en cajones, por eso, a él lo apodaron “Pacho Cajones”. Luego de desnudarlo, le bajaron el primer cerdo de una de las carnicerías y le montaron la carga explosiva al caballo. El objetivo del caballo era el comando de la Policía. Aunque efectivamente paró en el Comando, porque la policía sospechó algo en este, lo dejaron libre, y el caballo comenzó a caminar hacia el lado de las carnicerías. La bomba explotó justo cuando el caballo pasaba cerca de ellas.

La explosión fue de una potencia incalculable. En todos los lugares del pueblo se sintió como si hubiera sido justo ahí, en frente de uno. Las carnicerías y otras tiendas de abastecimiento quedaron totalmente destruidas. Las extremidades del caballo volaron y fueron a parar en distintos locales comerciales del pueblo. Fueron más de tres meses los que tuvieron algunos comerciantes que laborar a cielo abierto o en los expendios de otros compañeros del gremio. No solamente afectó la calle principal de comercio, sino también las viviendas y a casi todo el pueblo.

Supuestamente, la intención del Frente 36 de las FARC era que la bomba explotara frente al comando. Sin embargo, al estar el comando ubicado en una esquina del parque, y al ser Guadalupe un municipio tan pequeño, la bomba parecía estar ingeniada para destruir al municipio entero. Hacer un atentado contra la policía era hacer un atentado contra la población en general.

Este no fue un suceso aislado. Nueve o diez años antes, durante la toma guerrillera, se destruyó el comando anterior —un comando pequeño de *tapias*— y destruyó lo que era la sede del banco Agrario, en ese entonces la Caja Agraria. Aunque en este caso, los comerciantes no eran propiamente el objetivo del caballo bomba, sí han existido otras formas de persecución a los comerciantes del municipio. Los secuestros y asesinatos de comerciantes han sido reiterativos, sobre todo para aquellos que no pagaron las vacunas de la guerrilla. Eso ha sido una cosa muy dura para el pueblo porque ha sido gente, como en el caso del señor Nahum Vázquez, que fue secuestrado, se pagó rescate y fue igualmente asesinado.

El pueblo no ha podido crecer económica y culturalmente, porque son pueblos que quedan con un estigma a nivel nacional e incluso mundial, donde no vienen ni siquiera los turistas porque son zonas muy complicadas. Aunque es un pueblo que por su paisaje, enclavado en sus altas montañas, podría ser bastante turístico, por motivos de orden público no ha permitido el desarrollo de ningún tipo de actividad turística. Cuando un sitio tiene una historia de violencia, la gente se cuida de ir. Eso es una afectación muy grave porque más de una persona se niega a trabajar en Guadalupe, venir a trabajar en cualquier otra cosa, porque se supone que es un sitio peligroso. Y, aunque se intenta que las cosas sean distintas, al persistir otras formas del conflicto, es imposible desarrollar la economía local.

Hoy en Guadalupe persisten las trabas para los comerciantes. Quien sea comerciante o tenga cualquier otro tipo de actividad económica, está sometido a las vacunas. Sigue la inestabilidad, porque esa gente que manda son los que dan las órdenes, y esas órdenes se terminan cumpliendo. Hoy, otras personas con armas siguen decidiendo por nosotros, nuestra dignidad humana está puesta en cuestión. Sin embargo, todo el mundo debería saber que en las zonas afectadas por el conflicto, todos los habitantes no participan en él. Nos vemos forzados a vivir a pesar de las circunstancias. Y, cuando una persona tiene armas, domina con el poder que estas le confieren.



Sabanalarga: “Doña Edilma”

Los comerciantes en estos pueblos hemos sido comerciantes empíricos porque nunca hemos tenido a quien acudir y aún así, logramos salir adelante. Aunque callemos los efectos del conflicto, no quiere decir que no hayamos sido víctimas. Hemos guardado silencio por miedo. Pero queremos contar nuestras historias.

Toda mi juventud, desde mis 12 años, trabajé con Edilma del Socorro Arango. Era el año 2002, en ese entonces yo ya tenía alrededor de 20 años. A ella le secuestraron el hijo, incluso estando la Policía acá en Sabanalarga. Vinieron y se lo llevaron directamente desde la casa, esa señora lógicamente fue a buscarlo. Como había sido la guerrilla de las FARC la artífice del secuestro, se fue a las montañas a hablar con ellos: “Venga, quiero hablar con ustedes y quiero negociar, ¿qué quieren?”. Al final, se lo entregaron después de más o menos diez días de tenerlo secuestrado. Después de eso, decidió mandar a su hijo a Medellín y no volverlo a tener acá en el pueblo. Aún así, continuaba la zozobra, porque le llegaban constantemente cartas: “mándenos tanto, necesitamos esto, necesitamos aquello” y uno sabe perfectamente que ella como comerciante, tenía que sacar de todas maneras de su bolsillo algo.

La guerrilla se esfumó pero no tardaron en llegar los paramilitares. La táctica fue la misma: empezaron a vacunar a los comerciantes del pueblo. Ellos venían, “proponían” y hacían reuniones de obligatoria asistencia. Ella asistió a una de esas reuniones y se presentó como fiel defensora del comercio: “no es justo que ustedes le pidan lo mismo a toda la gente porque es diferente lo que ganamos los pequeños comerciantes”. Eso, quizás, la llevó a que el mismo gremio hablara y la expusieron como una colaboradora del bando contrario. En el 2002 los paramilitares entran, saquean su local de comercio -donde yo era asistente- y la matan.

La mano derecha en ese momento fui yo, ahí aprendí a trabajar y aprendí también a saber que con esta gente se trabaja o se trabaja. Uno trabaja con miedo, nosotros tenemos que salir a la ciudad para poder buscar nuestro sustento y poder seguir surtiendo nuestro negocio. Y, si no es así, no hay negocios, no hay empleo, no comemos. Con miedo tenemos que seguir trabajando. Muchos podrán decir: ustedes son colaboradores. Pero deben todos saber que nosotros no somos colaboradores de ninguno, nosotros somos obligados. Es nuestra vida la que está en juego, la vida de nosotros, la de nuestros hijos.

A Doña Edilma, por supuesta colaboradora, la terminaron matando.

Caicedo y Peque: “Entre la espada y la pared”

La situación del conflicto armado nos ha afectado a todos. Nosotros tuvimos diría dificultad con la violencia de las FARC, desde los años 1994 y 1995, hasta más o menos el 2010. Al igual que grupos al margen de la ley, como lo fueron los paramilitares, es muy complicado, porque hubo desplazamiento de comerciantes obligados. Por pagar vacuna, tuvieron que dar sus negocios o tuvieron que desplazarse. También tuvimos muchos problemas con el abastecimiento. Si un camión venía con abarrotes, ellos (generalmente las FARC) lo saqueaban. A mí me pasó algún día, creo que fue en el año 2000. Traía para mí panadería, no un valor sencillo: harina, levadura, cosas de panadería. Me las bajaron subiendo de Santa Fe. La razón que me mandaron con el conductor fue: “baje para que negociemos y la entregamos”. Si usted no accede, pues van por usted.

Por grupos al margen de la ley, muchas veces no se podían abrir los negocios: saqueaban las tiendas que necesitaban, buscando comida. Muchas veces tuvimos la dificultad que un grupo entró a las seis de la mañana, se retiró a las siete y media, y ya estaba entrando el otro, pero nunca se encontraban, el primero entraba por una esquina y salía por la otra, nunca se encontraban. La dificultad era para nosotros como comerciantes porque los habíamos recibido, porque acaban de salir, o porque les vendimos. Uno siempre estaba entre la espada y la pared: la guerrilla reprochaba por qué colaboramos con los paras, los paras reclamaban porque supuestamente colaboramos con la guerrilla. En realidad, usted ya ni sabe con qué grupo estaba tratando, entonces llegó un tiempo en que predominaba el silencio, era más fácil callar, ver y no decir nada porque le iba mejor a uno.

Hoy, aunque en el pasado tuvimos negocios avalados alrededor de 100 millones de pesos, los grupos armados se lo llevaron todo. En este momento debo plata a entidades bancarias, mi negocio ya no está, ya no existe. Sigo pagando por aquello que la violencia me robó.

Ituango: “No podemos denunciar”

Aunque en el país existieron negociaciones para la paz, en Ituango el conflicto persiste. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no sabemos cuál grupo es el que manda, no sabemos quiénes son los supuestos líderes guerrilleros.

La situación se ha tornado inmanejable y se ha intensificado lo que por muchos años hemos vivido las víctimas: tanto transportadores, comerciantes, como nuestros compañeros agricultores. En Ituango todo el mundo tiene que estar dispuesto a pagar una vacuna si quiere vivir, tiene que estar dispuesto a hacer lo que los grupos armados quieren si quiere vivir, o si no, tiene que irse.

En mi caso particular, he estado denunciado por colaborar con grupos armados y la respuesta del Estado es que nosotros somos colaboradores, financiadores de las guerrillas. El tema de las vacunas, el reclutamiento, de la complicidad del Estado al permitir y no llenar los espacios para que estos grupos ilegales entren, ha hecho que nos llamen auxiliares de la guerrilla. La verdad es que nos toca colaborar si queremos seguir vivos y en el territorio.

La situación frente a las vacunas, lo que uno llama extorsión, es una de las estrategias más características, tanto de las guerrillas como de los paramilitares: simplemente, todo comerciante, toda persona que tenga una actividad económica, ya sea ganadería, agricultura, que se trabaja con el sudor de la frente bajo el sol y el agua, tiene que dar este tipo de aporte. Hace poco, hay una anécdota, y es de que iban a colocar una parabólica en Ituango, pero apenas les pidieron la vacuna esa gente no volvió, entonces es un municipio que no tiene como tener un desarrollo económico potencial.

Antes del proceso de paz, mandaban una boleta o una razón y luego uno debía ir donde ellos, quisiera o no quisiera, o si no, la orden era salir del municipio. Si la situación se escalaba, se daba el asesinato de algún comerciante: los comerciantes que desobedecieron, en estos momentos se encuentran descansando en la paz del señor. El asesinato de comerciantes como el de Jaime Arturo, que era un comerciante el municipio, del señor que compraba el frijol, Gilberto Restrepo, personas como Don Humberto que le compraba la producción al campesino y le garantizaba la compra de esa producción. Eso hizo un hueco inmenso al municipio por la falta de este señor, en especial a los campesinos en la parte económica.

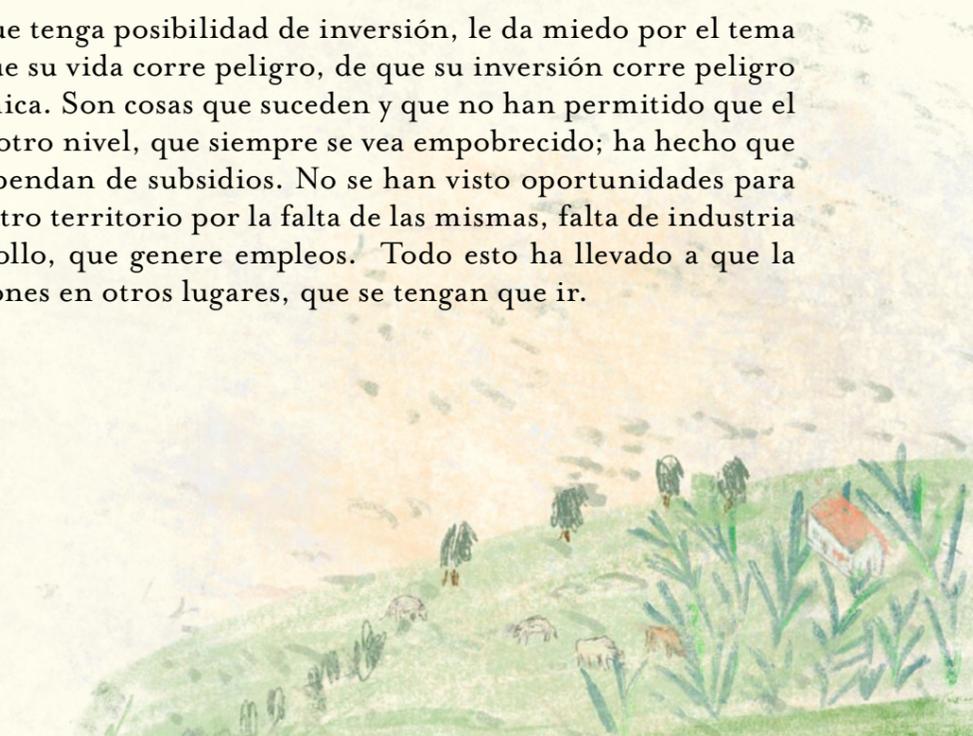
Paralelamente, ellos pedían mercados, por tanto, acudían a los comerciantes. Yo diría que el 99.9% del comerciante ituanguino le ha tocado aportar a los grupos ilegales, a todos nos han exprimido, tanto del lado izquierdo, como paramilitares, por todos lados. El Estado no cubre los espacios y no genera las suficientes garantías como para uno hacer las cosas de la mejor manera. Al denunciar esto lamentablemente, cuando se ha hecho, lo que hacen es que a estas personas les toque perderse del municipio, tienen que perder

todos sus bienes, perder todas sus producciones, sus negocios y tienen que irse, porque no pueden defender sus derechos y tener una libre expresión con respecto a lo que viven. No podemos denunciar, porque estaríamos arriesgando nuestras vidas y nuestros patrimonios.

Ahora, ¿quién va a querer invertir en ese momento en Ituango con la situación en la que estaba y está? ¿Quién, de otro lugar, va a querer hacer una inversión acá? ¿Quién se anima dentro del mismo municipio a hacer una inversión si quedamos a la deriva sin saber si podemos seguir en el territorio? Económicamente, las respuestas a estas preguntas han hecho que Ituango pierda oportunidades de seguir desarrollándose. Así mismo, hemos perdido el derecho a la libre locomoción, porque al saber que los grupos armados están disputándose territorios, significa que no podemos transitar libremente por nuestros caminos, nuestras carreteras, nuestras veredas, porque la zozobra pone en riesgo, la vida y la integridad física de quien lo haga.

El tema del conflicto afectó la capacidad del municipio en la producción del aparato productivo de Ituango. La gente la recuerda con mucha nostalgia, porque el municipio producía de todo, ahora el tema productivo del municipio está limitado, tierras abandonadas, campesinos empobrecidos y eso se refleja en el tema empresarial, en el tema comercial, porque hubo muchos episodios, como el control del ingreso de la comida. En segundo lugar, la fuga de talentos: se ha desplazado, se ha ido gente con capacidad de inversión, capacidad intelectual para generar oportunidades, gente que genera empleo ha sido desterrada o asesinada, así la inversión es inviable.

Aquí cualquiera que tenga posibilidad de inversión, le da miedo por el tema de la vacuna, de que su vida corre peligro, de que su inversión corre peligro en la parte económica. Son cosas que suceden y que no han permitido que el municipio esté en otro nivel, que siempre se vea empobrecido; ha hecho que los campesinos dependan de subsidios. No se han visto oportunidades para quedarnos en nuestro territorio por la falta de las mismas, falta de industria que genere desarrollo, que genere empleos. Todo esto ha llevado a que la gente busque opciones en otros lugares, que se tengan que ir.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La flor de la “Paz naciente”, es una pequeña flor de seis pétalos encontrada en El Peñón, Santander, por un grupo de investigadores que decidió explorar las zonas que en el pasado estaban vedadas a causa del conflicto armado. Oculta en la cordillera de los Andes, gracias a la expedición Colombia Bio hoy podemos reconocerla como otra de nuestras riquezas naturales, antes perdida en medio de tanta violencia.

A partir del ejercicio de escucha adelantado por el ICP con víctimas y testigos de la violencia en Colombia en razón de su vinculación con el sector productivo, son varias las verdades del sector productivo guardadas e invisibilizadas tras años de conflicto que podemos derivar. Para tal fin, hemos optado por dar un cierre a la generosidad de los testimonios escuchados, con el objetivo de articular algunas de estas historias de vida, con las lecciones aprendidas y posibles recomendaciones que se desprenden de las mismas.

Somos conscientes que nuestras conclusiones y recomendaciones están atadas a los testimonios presentados, los cuales si bien son casos particulares, comparten características comunes con situaciones por todos conocidas. Justamente es en estas transversalidades y encuentros en los testimonios, no sólo por parte de los sectores productivos, sino de las víctimas en su conjunto, en donde consideramos que se pueden reconocer las tan anheladas pistas para construir el sueño de un país en paz, convivencia democrática, productividad, crecimiento económico y superación de la pobreza.

Para facilitar la comprensión y socialización de estas lecciones aprendidas, optamos por sintetizarlas en los diez grandes puntos que describimos a continuación:

1. Se suele asociar a las empresas, en contextos de pos-acuerdo, como perpetradores, financiadores e incendiarios de la guerra. Sin embargo, **persisten silenciados sus dolores y afectaciones en el marco del conflicto armado colombiano. Subsanan estas ausencias permite comprender el conflicto de una manera más amplia reconociendo la diversidad y heterogeneidad de sus víctimas.** En el país, todos los ciudadanos tienen algún tipo de relación con la productividad, y por tanto, todos nos hemos visto, de alguna forma, socioeconómicamente afectados por el conflicto. Testimonios como el de Iván Tadeo González, ante nuestras reiterativas preguntas sobre las incriminaciones de los productores palmeros y sus supuestas alianzas con el paramilitarismo, no sólo concluyen sobre la arbitrariedad de nombrar a todo un sector agrario como criminal, sino que a su vez impide evidenciar los efectos positivos de los emprendimientos y los afrontamientos que éstos asumen en el contexto de la guerra.

“Esta no es una tesis de grado, una tesis doctoral, no, fue lo que vivimos en la sangre y la piel. Aun así, el palmicultor es un hombre de paz, es un hombre del campo, es un hombre que tiene sus árboles allá sembrados y nunca puede irse. Hombre, una persona así, con ese sacrificio de todos los palmicultores, esa gente no se vuelve mala, esa gente es buena” Iván Tadeo González.



Recomendaciones:

• **Los procesos de construcción y visibilización de memorias son cruciales en sociedades atravesadas por conflictos violentos. Ya sea en el marco del conflicto mismo, o en el curso de un sistema de justicia transicional, este trabajo no puede concluir con el mandato de la CEV, más aún en un conflicto que no termina.** La memoria permite mantener vigente un recuerdo, generalmente traumático (Jelin, 2002), que busca proyectar, de forma distinta, disruptiva de ese pasado, el futuro de una persona o sociedad. Para esto es necesario, en primera instancia, abrir espacios donde, en ambientes basados en la confianza y la seguridad, las víctimas puedan relatar, sin miedo a ningún tipo de repercusión, sus historias de vida. Si bien, no para todas las víctimas resulta útil ni liberador recordar ni contar la forma en que la violencia se inscribió en sus vidas (Sánchez, 2008), las memorias suelen resultar útiles en el campo de lo público. Por un lado, porque permiten diversificar los rostros y los relatos, tanto de las víctimas como de los victimarios. Como bien lo afirma Ngozi (2018), permite visibilizar la multiplicidad de las historias, la heterogeneidad de los testimonios, y dignificar a cualquiera de ellos. Por el otro, porque se convierte en un principio de acción para el futuro (Todorov, 2000). El recuerdo trasciende su sentido literal y se transfigura en un horizonte de transformación y posibilidad. “Lejos de seguir siendo prisioneros del pasado, lo habremos puesto al servicio del presente, como la memoria —y el olvido— se han de poner al servicio de la justicia” (p.59).

Reconociendo la multiplicidad de las historias, las divergencias inherentes a las víctimas y sus memorias, como país nos veremos en la necesidad de seguir ampliando las garantías e instancias para que todo tipo de víctimas puedan contar su pedazo de la historia. Para que cualquier actor pueda reconocerse como víctima y creer en su relato como un fragmento socialmente relevante. Así, además de tener una perspectiva mucho más amplia y completa del conflicto, tendremos principios, basados en las múltiples memorias, que nos permitirán buscar formas y garantías de no repetición. Se trata de permitir que los testimonios de las víctimas del sector productivo puedan nutrir el imaginario narrativo para dar cuenta de la forma como las dinámicas del conflicto y los objetivos de los grupos criminales han buscado impactar, afectar y desincentivar a quienes deciden vincularse a una actividad económica o comercial.

• Aunque en Colombia se han abierto espacios que, en el marco de la justicia transicional, permiten a las víctimas contar su historia, es importante insistir en la necesidad de abrir espacios e instancias de escucha que trascienden el

límite temporal del mandato de la Comisión de la Verdad. Si bien en Colombia, tras la firma del Acuerdo del Teatro Colón, algunos hacen referencia a este momento histórico nombrandolo como “posconflicto”, la guerra sigue vigente. Por eso, más que nunca, como señala Wills (p.12, 2018), debemos “cultivar una memoria dispuesta al encuentro y a la conversación que permita a personas provenientes de diversos y hasta opuestos sectores sociales reconocerse mutuamente en su victimización y humanidad para, desde ese lugar de reconocimientos mutuos, propiciar un sentido de comunidad”. La memoria debe ser, entonces, un trabajo (Jelin, 2002) permanente. Como lo muestran estas historias, aún faltan historias por contar y visibilizar de la violencia pasada, porque la violencia es un sustantivo que se sigue manifestando en el tiempo presente. Esto es particularmente relevante si se considera que el sector productivo sigue siendo un objetivo de los distintos grupos de violencia organizada, ya sea para extraer rentas o para sacrificar las oportunidades de economía formal por economías ilegales y actividades criminales. El miedo es algo recurrente en comunidades que siguen siendo un teatro de operaciones para los grupos armados al margen de la ley, que presionan, hostigan y atacan a quienes ejercen la función empresarial y a quienes hacen parte de entornos productivos.

2. Son muchos los sectores productivos en Colombia que sufren el flagelo de la extorsión de quienes hacen la guerra, sobre todo en pequeñas escalas.

En muchos contextos los pequeños productores se enfrentan a que aquello que ganan y producen, sea entregado por coacción a actores armados ilegales que encontraron en la extorsión una fuente de financiación. Desde las capitales resulta fácil condenar el pago por la extorsión como una forma de colaboración, pero lo cierto es que las opciones no son muchas en los contextos en los que la productividad se desarrolla. En casos extremos, las extorsiones y vacunas han terminado por usurpar no sólo lo propio, sino que incluso han obligado a que se adquirieran deudas para poder responder ante las amenazas de guerrillas y paramilitares. Estos esfuerzos de trabajo honesto, en vez de traducirse en oportunidades para las comunidades regionales, terminaron por alimentar la guerra. Amedrentados, entre la espada y la pared, se vieron sometidos a pagar cuantiosas sumas de dinero que, en muchas ocasiones, no estaban en capacidad de pagar, quedando incluso con obligaciones bancarias que perduran en el tiempo y que fueron adquiridas para ser entregadas a los criminales o para tratar de salvar negocios que se hicieron inviables física y financieramente a causa de la violencia.



En nuestras historias, Giovanni, un campesino del Catatumbo en Norte de Santander, se ha esforzado, una tras otra vez, por sacar adelante sus cultivos, sus vacas, sus cerdos. Sin embargo, cada vez que intentaba algo nuevo, la guerrilla y los grupos paramilitares contrainsurgentes le usurpaban la oportunidad de prosperar. No ceder habría significado la muerte. Así le sucedió a sus amigos, quienes en medio de un proyecto de piscicultura, se negaron a entregar su esfuerzo a las autodefensas. Hoy Giovanni llora su muerte. Juan Gabriel Arias, comerciante en Norte de Santander, reclamaba: *“siempre he querido decir que nos respeten el derecho al trabajo, que nos respeten nuestro sacrificio, el tiempo que uno le dedica a un local, a un emprendimiento. Me costó años edificarlo, y lo perdí en un abrir y cerrar de ojos”*.

El conflicto ha aniquilado, además de vidas humanas, las posibilidades que los ciudadanos se han planteado para mejorar sus condiciones de vida, para sacar adelante a sus familias. El esfuerzo de Gabriel en un pequeño local de pollo *broaster* para el que ahorró toda su vida, terminó por financiar a las FARC, y no el sueño de ver a sus hijas salir adelante. También Ferley Romero, transportador en Norte de Santander, además de vender todas sus propiedades, tuvo que sacar dos créditos para pagar las vacunas del ELN. No solo el esfuerzo de Ferley se tuvo que entregar a la voluntad de los grupos al margen de la ley, además, indirectamente, terminó reportado bancariamente para poder cumplir con lo que los grupos armados le exigían. En las épocas arduas del conflicto, dice Ubaldina Montañez, cuando casi nadie pasaba por Cajamarca, lo poco que vendían los comerciantes, debían entregárselo a la guerrilla. Además de trabajar para ellos, debían subir “a la montaña” a entregar la vacuna impuesta a cada uno. Aunque la economía estaba en crisis, las presiones continuaban con la misma intensidad, llevando a que la capacidad productiva de una región se tuviera que someter al servicio de causas criminales.

Recomendación:

• **La extorsión y las llamadas “vacunas” plantean una compleja ambivalencia: ¿son los extorsionados victimarios por financiar la guerra?, o ¿son víctimas de la violencia de quienes extorsionan?** Esta ambivalencia exige especial cuidado en los procesos de justicia transicional y en la concepción del delito de “financiación del terrorismo” (artículo 345 del código penal colombiano). Por un lado, porque podría ser imputado este delito a actores que, si bien terminaron por ceder ante coacción ajena e insuperable, no son culpables de la acción anti-jurídica. Por el otro, porque algunos actores económicos podrían justificar, falsamente, la financiación de la guerra en la coacción y

no en la deliberada acción. El reto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición reside, para estos casos de supuesta colaboración, en el desmantelamiento de la culpabilidad de la acción, porque de no haber culpabilidad, no existe el delito. En este sentido, es menester abandonar cualquier tipo de generalización o estigmatización que los reduce al espectro de los victimarios y donde otras versiones de la historia sean posibles.

• Las vacunas parecen inherentes a la actividad productiva en Colombia. Resultan transversales en todos los relatos: desde los más grandes empresarios, hasta los pequeños productores, comerciantes, y proveedores de bienes y servicios, se han visto afectados por las cuantiosas cifras de dinero solicitadas por grupos armados al margen de la ley. Sin embargo, especialmente pequeños empresarios cuyas labores se centran en áreas rurales, se ven amenazados económica, psicológica y socialmente por las extorsiones. Por eso, **es necesario reconocer las particulares afecciones que genera el conflicto en estos actores económicos rurales**. Su vulnerabilidad al conflicto es alta, incluso antes de la extorsión, y una vez se ven además atravesados de forma económica por la violencia, poco o nada parece quedarles en términos de oportunidades. Las medidas de reparación y no repetición deben poseer un enfoque interseccional **que permita, en el caso de los actores económicos y productivos, resarcir de forma acertada, integral y proporcional los daños sufridos**. Además de reparar, esto implica crear estrategias de oportunidades que focalicen y prioricen a aquellos que se ven especialmente expuestos y afectados, desde la acepción económica, por el conflicto que no cesa.

3. **En Colombia el conflicto se volvió “una cosa más”, una condición frente a la cual los sectores productivos han decidido superponerse, con y a pesar del miedo y de la guerra.** Los emprendedores que con su trabajo han logrado mantener a flote las economías locales en los distintos municipios de Colombia, no han renunciado frente al miedo y la amenaza de muerte que acompañan muchos de estos espacios. Este desarrollo, aunque temeroso, es una ilustración de la valentía y de la resistencia a la sumisión de la violencia. Desobedecer el miedo, también costó a cientos de actores económicos su vida, por esta necesidad de normalizar la violencia como un factor más a considerar entre tantos otros relacionados con la dificultad de emprender.

Giovanny, un campesino de Norte de Santander, cuando relataba la muerte de sus amigos en medio de su negativa a entregar los peces que cultivaban, a los grupos de paramilitares contrainsurgentes, insistía: “han sido cientos los que han muerto en nombre de la resistencia, de su trabajo”.

En el caso de la empresa palmera INDUPALMA, aún en medio de las presiones de la guerrilla, esta siguió laborando y ajustándose a las circunstancias violentas del Magdalena Medio, a pesar de los costos que el conflicto tiene sobre la productividad. Por eso, hoy INDUPALMA se encuentra en liquidación. Así lo cuenta Rubén Darío Lizarralde, ex gerente de la empresa: “En una empresa como la nuestra, con 10.000 hectáreas, económicamente fuerte, con alianzas y apoyo de la fuerza pública y el Estado, pudimos salir adelante. Sin embargo, con todo este apoyo, tuvimos una presión grande por parte de la guerrilla y de los paramilitares, en casi, yo diría, 20 años de la vida de la empresa. Fueron muy fuertes y duros, no solo para la empresa, también para la región y la vida de muchas personas. Hoy tenemos una empresa debilitada por todo eso, está en proceso de liquidación, porque, definitivamente, una empresa no puede resistir toda la vida una presión descontrolada en términos económicos”.

Entre balaceras, secuestros, tomas guerrilleras, AVIATUR apostó por posicionar a Colombia como un destino de los turistas internacionales. Cuantiosas inversiones se hicieron para promover zonas aisladas pero atractivas del país. Sin embargo, mientras Jean Claude Bessudo, presidente de la empresa, se la jugaba por el turismo, la violencia se robaba cualquier oportunidad de emprender proyectos turísticos en regiones profundas del país. Bessudo con asombro cuenta de su esfuerzo de invertir y promover el turismo en la isla de Gorgona, y de las recomendaciones del Teniente Díaz, sobre alertar a los turistas que llegaban “en caso de tiroteos, apagar la luz y esconderse debajo de la cama”. Tiempo después, las FARC tomaron Gorgona, asesinaron al Teniente Díaz y la apuesta turística tuvo que cesar.

Recomendaciones:

- Las víctimas del sector económico (sobre todo pequeños comerciantes y campesinos localizados en zonas rurales) han terminado por vivir en entornos que normalizan la violencia que les circunda y afecta. No porque desconozcan o ignoren los dolores causados por la guerra, sino porque han tenido que aprender a tramitar, por sí mismos, los costos de la victimización. La institucionalidad, además de ser lejana a los contextos de la victimización económica, ha terminado por obviar los dolores, problemas y circunstancias de cada una de las historias que se aproximan a cualquier instancia en el marco o al margen del Sistema de Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. *Es preciso hacer hincapié*

en esta normalización institucional de la violencia, con el fin de transformar y profundizar las estrategias con las que se repara y se busca superar las causas estructurales por las cuales los derechos terminaron viéndose vulnerados, garantizando así, procesos de reparación sentidos, integrales y profundos.

4. En el marco de un conflicto que no culmina con la desmovilización de las FARC, emprender implica atender y regirse bajo distintas normas que no surgen exclusivamente de las autoridades legítimas del Estado. La ausencia de la presencia estatal y de control territorial ha generado vacíos de poder que han sido cooptados por grupos armados al margen de la ley. Las vacunas, las sumas de dinero para liberar a los secuestrados, las extorsiones han sido solo algunas de las imposiciones a las que se han tenido que atener distintos sectores productivos en Colombia para poder seguir operando. Sumado a esto, los grupos ilegales en muchos espacios siguen siendo quienes determinan qué, cuándo y cómo pueden tener lugar los emprendimientos. Aunque muchos empresarios, productores y comerciantes, han sido catalogados, ante la obligada entrega de las sumas de dinero solicitadas, como auxiliares de cualquiera de los grupos, la pregunta que surge es: ¿existía libertad alguna para elegir otra opción? Frente a un Estado poco efectivo y en algunos territorios sin legitimidad muchas veces la denuncia no es una opción.

Vivir en zonas de conflicto es entender que es imposible desligarse de él, de los poderes que con armas se afirman en zonas donde el Estado es tradicionalmente ausente. Así lo relata una mujer de Guadalupe (Antioquia), quien cuenta que incluso hoy, pasados años de la firma del Acuerdo del Teatro Colón, aunque los comerciantes intentan sacar adelante sus negocios, “sigue la inestabilidad, porque esa gente que manda son los que dan las órdenes, y esas órdenes se terminan cumpliendo. Hoy, otras personas con armas siguen decidiendo por nosotros, nuestra dignidad humana está puesta en cuestión. Sin embargo, todo el mundo debería saber que en las zonas afectadas por el conflicto, todos los habitantes no participan en él. Nos vemos forzados a vivir a pesar de las circunstancias”.

En Tumaco, Ana Lucía Bolívar relató cómo incluso frente a la pandemia, los grupos al margen de la ley restringieron la movilidad y frenaron el comercio en la zona. En los inicios del confinamiento de la Covid-19, los grupos controlaban la entrada y salida a la zona industrial, bajo el argumento de frenar el contagio de las zonas rurales de aquellos que vienen del casco urbano. Incumplir cualquiera de estas decisiones, implicaba amenaza de muerte.

La violencia y los actores armados no solo controlaron la posibilidad de vida y de muerte. También, por ejemplo, los alcances y límites de la actividad comercial. En Cajamarca, cuenta Ubaldina Montañez, que la guerrilla le daba órdenes sobre los productos que podía vender: Coca Cola, Postobón y Alpina eran marcas prohibidas en las vitrinas de su cafetería.

Muchos municipios no solo debían responder a los deseos de un grupo, sino que estaban, además, entre la espalda y la pared: debían responder a los deseos y órdenes de grupos con directrices contrarias: guerrilla y paramilitares. Con el fin de evitar el enfrentamiento con cualquiera de estos dos grupos, por ser supuestos colaboradores del bando enemigo, los comerciantes de Caicedo muchas veces no podían abrir sus negocios.

En Cajamarca, los comerciantes debían hacer filas para entregar el dinero de las vacunas. Ubaldina Montañez, comerciante del municipio, recordó cómo el Comandante Carrillo, del Frente 21 de las FARC, los obligaba a subir a la “montaña” donde estaba el Frente ubicado, para entregar las sumas de dinero exigidas para la causa guerrillera.

Recomendaciones:

- **Para garantizar la no repetición, es indispensable continuar el largo proceso de consolidación territorial del Estado colombiano. No es un tema de gobiernos al que hacemos referencia, sino más bien a la necesidad de que sean las instituciones democráticas del Estado, la principal fuente de regulación y gestión social en los territorios. Esta necesidad de presencia se hace más relevante justamente en las zonas rurales colombianas.** Mucho se ha instado en la urgencia de extender el alcance de las instituciones estatales, más poco se ha hablado sobre formas alternas de crear espacios públicos, sentidos de comunidad, sistemas de regulación y mediación social en los cuales los privados cumplen hoy un rol fundamental. Por eso, por un lado, hay que reconocer el esfuerzo de otros actores, diferentes a los estatales, en la articulación legal de la vida en comunidad. Es necesario apoyar y fortalecer esas iniciativas locales de gobierno. Por el otro, como habría propuesto Pitkin (2004), es fundamental crear y promover espacios locales de democracia y gobierno. Si bien pareciera que la democracia representativa y sus manifestaciones centralizadas parecen sustituir la esencia misma de esta forma de gobierno, **la participación local de diversos actores sociales facilita la reacción y respuesta a las necesidades y exigencias locales; se promueven las capacidades en los individuos; y finalmente, se vinculan las dinámicas locales con la representación democrática nacional.** Estas formas de interacción social propuestas y articuladas por las mismas comunidades, fortalecidas por el nivel nacional, pueden facilitar la identificación, prevención y resistencia a cualquier manifestación de la violencia.

5. Los hechos victimizantes de los sujetos pertenecientes a los sectores productivos no se limitan a sus afectaciones individuales y sectoriales, como se ha justificado desde la narrativa de los actores armados. **Atacar a los sectores productivos es por añadidura vulnerar tanto el derecho al trabajo de todos los colombianos, como afectar a sus zonas de influencia. Justamente este es un efecto colateral de una guerra que a todos nos atraviesa.**

Distintos sectores se han visto implicados en la guerra, unas veces por su labor productiva, otras por su ubicación espacial y temporal en el momento en que los actores violentos arremetieron, afectandolos no sólo a ellos, sino a sus entornos productivos. Las pérdidas de los sectores productivos no son solo materiales. En Guadalupe, Antioquia, un caballo bomba dirigido hacia el comando de policía, que tradicionalmente surtía a las carnicerías, por costumbre se redirigió hacia el sector donde estas se encuentran ubicadas. Una vez el caballo bomba estalló, destruyó, por completo, todos estos negocios. Aunque el objetivo de la guerrilla no eran las carnicerías, éstas y sus vecinos fueron quienes sufrieron las principales repercusiones del estallido. La hermana de Ana Lucía Bolívar, empleada de una plantación de palma en Tumaco, que se esfuerza por generar espacios seguros para sus empleados en medio de las tensiones entre grupos armados y la llegada de mercenarios que persiguen el lucro de la guerra, saliendo de la plantación, camino a su casa, sería violada y luego asesinada. La guerra, especialmente en las mujeres, se inscribe en los cuerpos.

Recomendación:

- **Reconocer la necesidad de una categoría más la de “víctimas” que reconozca la necesidad de procesos de transición más diversos e incluyentes,** permitirá pensar de forma precisa y acertada en el tipo de reparación que precisan las víctimas, según sus condiciones, circunstancias y necesidades. Por eso, incluso para las víctimas del sector productivo, entendiendo que su victimización causada por su pertenencia al sector económico genera consecuencias sociales y psicológicas similares a las de cualquier otro tipo de víctima, deben pensarse procesos de acompañamiento que reparen y restituyan los derechos afectados. Por ejemplo, la implementación de un plan de atención psicosocial que evalúe la situación psíquica de las personas, que tenga en cuenta las particularidades de las víctimas y de los derechos vulnerados, pero a su vez formas de reparación colectiva como aquellas implementadas con otros colectivos de víctimas. Acciones que permitan superar los imaginarios sobre los empresarios y el sector productivo en el conflicto, que visibilicen los patrones de victimización



que estos han sufrido, tanto los generados por razones ideológicas como por el ánimo de lucro de los grupos armados al margen de la ley, así como de la multiplicidad de afectaciones en distintas dimensiones, personales, económicas, familiares, comunitarias, sociales y culturales. Actos que permitan la representación y el reconocimiento de un sector ampliamente estigmatizado en el proceso de construcción de verdad, memoria y paz.

6. Las consecuencias de la guerra no recaen sobre personas jurídicas abstractas, los sectores productivos están compuestos de ciudadanos como todos los demás colombianos, quienes encarnan las dolorosas repercusiones del conflicto. Es imposible poner a las actividades productivas al margen, pretender que el entretejido económico es ajeno a las demás experiencias relacionadas con el conflicto.

Rubén Darío Lizarralde, ex-gerente de INDUPALMA, como varios directivos y trabajadores de las empresas, fue blanco del ELN y los paramilitares. ¿Era una empresa que encaraba las amenazas de los grupos al margen de la ley? No, era una persona quien las afrontaba. Amenazas de atentados, de secuestros, circundaron por esos días. El miedo y la zozobra recayó justamente sobre él, no sobre una figura abstracta llamada “empresa”. Fueron emblemáticos los secuestros estratégicos de las guerrillas para garantizar el pago de liberaciones que terminarían por financiar su guerra. Fueron los mecanismos de la combinación de todas las formas de lucha, los que violentaron la libertad de asociación y de organización sindical para ponerlos al servicio de los intereses de los grupos armados, creando contextos de conflicto y victimización que afectaron a directivos y trabajadores, minando la confianza para impedir las posibilidades de cooperación pacífica entre unos y otros, como diversos sindicatos en el país y en el mundo han demostrado se pueden gestionar las relaciones al interior de las empresas.

Ese fue el caso de Javier Ballesteros quien, en el 2004, fue secuestrado por el ELN. Aunque la intención era hacer pagar a la empresa palmera “Palmeiras” una cuantiosa suma de dinero, fue Javier quien vivió la zozobra en las selvas colombianas. El dolor de la guerra lo encarnan las personas que la viven: *“En la mente, el recuerdo mismo, evoca situaciones bastantes difíciles que se vivieron y seguramente, el daño psicológico y el daño moral, que hacen con este tipo de acciones, nunca jamás van a ser reparados bajo ninguna circunstancia”*, recuerda con dolor.

Es conmovedora la historia de María Constanza Velásquez, hija de Francisco Javier Velásquez, Ingeniero agrónomo de Pasto, quien laboraba y promovía

con su trabajo el crecimiento de cultivos de palma en Tumaco. El día que partió hacia Tumaco era el día del padre. María Constanza y sus hermanas prepararon detalles para su papá. Pero los regalos nunca pudieron ser entregados porque la violencia se lo llevó. Aunque fueran o no estratégicas las motivaciones económicas, esta es la historia de una guerra que, antes que económica, es humana.

Recomendación:

• **El relato y visibilización de las historias de empresarios, comerciantes, campesinos y pequeños productores, trabajadores y contratistas, en el marco del pos-acuerdo, es una oportunidad para humanizar al sector productivo.** Es un momento crucial para desmontar la historia única, pero a su vez para generar empatía entre las víctimas.

Los procesos de construcción de memoria permiten presentar estas múltiples caras de lo que antes se presentó como un relato homogéneo. Gracias a su visibilización, permiten reconocer que en efecto, este sector al que se le ha tildado de perpetrador, sufrió vulneraciones y acciones deliberadas de violencia y sometimiento. La sociedad civil productiva abarca a millones de colombianos que directa o indirectamente deben ser reconocidos como víctimas del conflicto armado en razón de su vinculación al sector productivo. Esto permitirá escuchar las exigencias de las víctimas, especialmente, aquellas que han sido ignoradas en los procesos de justicia transicional. ¿Cuáles son sus demandas como víctimas del sector productivo? Es fundamental que se abran espacios en el marco y en el margen del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para aquellos que no han sido ampliamente reconocidos como víctimas de esta guerra que no acaba.

7. El silencio y la no denuncia es lo que predomina en muchos de los testigos y víctimas del sector productivo. No sólo en muchos de los testimonios sino en las distintas reuniones de socialización del proyecto que se adelantaron, se justificó cómo, debido a la disputa entre diversos actores por el control de las regiones, era mejor callar y no ser asociado con ninguno de ellos. Así mismo, informar a las autoridades gubernamentales locales podía ser, o una pérdida de tiempo ante la impunidad de la justicia ordinaria, o un riesgo, en caso de que se enteraran los perpetradores de cualquier presunta denuncia puesta en su contra.

La ausencia estatal ha derivado en diversas expresiones del silencio. Por ejemplo, en la que relatan algunos participantes del grupo focal elaborado con el apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín, con comerciantes del municipio de Ituango. Se insistió en cómo: *“El Estado no cubre los espacios y no genera las suficientes garantías como para uno hacer las cosas de la mejor manera. Al denunciar esto lamentablemente, cuando se ha hecho, lo que hacen es que a estas personas les toque perderse del municipio, tienen que perder todos sus bienes, perder todas sus producciones, sus negocios y tienen que irse, porque no pueden defender sus derechos y tener una libre expresión con respecto a lo que viven. No podemos denunciar, porque estaríamos arriesgando nuestras vidas y nuestros patrimonios”*.

Por miedo a ser asociados con cualquiera de los bandos de la guerra, los habitantes preferían callar. Debido a la multiplicidad de actores ilegales, resultaba difícil identificar, para quienes conviven a diario con el conflicto, de quién se trataba un atentado, una amenaza, una extorsión. Decir algo sobre cualquiera de los actores, implicaba una arremetida del bando contrario. Por eso, cuentan los habitantes de Caicedo que *“usted ya ni sabe con qué grupo estaba tratando, entonces llegó un tiempo en que predominaba el silencio, era más fácil callar, ver y no decir nada porque le iba mejor a uno”*.

Recomendación:

• Aunque las cifras buscan describir la realidad, los datos de los que disponemos hoy apenas logran representar tenuemente la situación de los colombianos que sobreviven al conflicto. En cuanto al sector productivo, es poco lo que se ha investigado, pocos los casos que se han reportado, y pocos los casos en los que se han denunciado los delitos cometidos en contra de comerciantes, empresarios y pequeños productores y campesinos. Ver a los empresarios únicamente como perpetradores, no solo tiene que ver con la estigmatización, también con la dificultad (sobre todo de pequeños y rurales productores, campesinos, comerciantes) de denunciar.

La no repetición implica crear estrategias y garantías para que, ante la vulneración del derecho al trabajo y al ejercicio de las libertades económicas como la libre empresa y de asociación, los sujetos puedan denunciar y ser protegidos por las entidades competentes. De lo contrario, la posibilidad de un modelo económico que permita el emprendimiento, la productividad y la superación de la pobreza seguirá viéndose impedida por los actores ilegales, y por el inminente riesgo de muerte. Siendo importante que en el proceso de toma de decisiones para los ajustes institucionales que busquen garantizar la no repetición se diseñen respuestas a problemas, reconociendo que no sólo se trata de superar las limitaciones

al funcionamiento del modelo económico, sino que al restringirse este se impide al mismo tiempo el normal desempeño de las dinámicas democráticas que lo soportan, pues las personas tampoco son libres de ejercer sus derechos y libertades civiles y políticas, como votar y elegir a sus gobernantes sin las presiones armadas.

8. La guerra sigue vigente: Hay más disposición a narrar el pasado que el presente. Durante las entrevistas, aunque eran fluidas las historias sobre aquellos asuntos del pasado, persisten los silencios sobre aquello que transcurre hoy. Las vacunas, las extorsiones, las amenazas para los comerciantes, para los empresarios continúan. Este es un ejercicio que busca indagar por las verdades del conflicto, de un conflicto que se supone debería estar en una fase de cierre o de transición. Sin embargo, la violencia y la guerra persisten vigentes. Decenas de empresarios y gremios consultados se negaron a hablar porque el miedo sigue circundando su cotidianidad, porque los actores armados aún comandan la vida de las regiones y de quienes en ellas viven.

En los grupos focales realizados con las regionales de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los relatos del pasado parecían contados con el detalle de un libro de historia. Sin embargo, a la hora de preguntar sobre la vigencia del conflicto y sus nuevas formas de manifestación en los municipios rurales de Antioquia, los participantes permanecían en silencio, porque sigue la inestabilidad y la presencia de los grupos armados y delincuenciales ilegales.

En Tumaco, uno de los relatos reafirmó cómo ha repercutido la confluencia de la pandemia con la presencia de los grupos al margen de la ley. Siguen comandando la movilidad y la posibilidad de vida y de muerte en las zonas rurales del municipio; continúan ejerciendo control territorial, ahora bajo el pretexto de la pandemia de la Covid-19.

Recomendación:

• **Reconocer que aunque algunos hablan de posconflicto, la guerra sigue vigente. Los empresarios, comerciantes, pequeños productores y campesinos no pueden denunciar ni decir a viva voz las victimizaciones que hoy viven.** Este es un llamado a la protección, al acompañamiento, a la justicia, y a la estructuración de oportunidades que desplacen la guerra. Este, más que nunca, es el momento para llenar los vacíos de poder, para co-crear expresiones diversas de la institucionalidad, de las oportunidades y de lo



público. Sería importante, entonces, buscar formas de acercar las instancias judiciales a quienes se ven amenazados socioeconómicamente por la guerra, y a todas aquellas instituciones que previenen y protegen a la ciudadanía de la efectiva ejecución de las amenazas en contra de miembros del sector productivo, efectuadas por actores al margen de la ley.

9. La imposibilidad de elegir, o al menos de imaginar otra vida, es una de las principales consecuencias del conflicto sobre aquellos que, aunque aquí son enunciados como empresas, son, a su vez, humanos. ¿Quiénes seríamos, cómo sería nuestra economía, de no ser por la guerra? ¿Qué sería de nuestras empresas?, ¿de nuestros relatos como sociedad? La libertad de elegir otros caminos, otras vidas posibles, nunca fue una opción.

Esta es la historia de los cineastas y los productores audiovisuales en Colombia, quienes han visto sus producciones trabadas por los grupos al margen de la ley y por la presencia de una violencia que impide el involucramiento de cualquier externo en territorios donde son ellos quienes dirigen la vida en sociedad. Esta es la historia de quienes se enfrentan a la imposición del poder de los grupos criminales que operan mediante mecanismos como la extorsión, limitando no sólo un emprendimiento audiovisual, sino la libertad misma de expresión de las propias comunidades que cuentan con el potencial de participar y representar sus contextos e historias. Como lo cuenta Daniela Abad: “(..) *la sombra de la extorsión, increíblemente más que de la censura, habla de los territorios tomados y habla de los poderes nefastos. En términos económicos, en términos empresariales, ¿Cómo explicas tú que tienes dinero para hacer una película y suplicas que no te extorsionen porque no hay para más?*”

“*El turismo en un ambiente militarizado a ultranza, no creo que sea bueno*”, explica por su parte, Jean Claude Bessudo. ¿Qué sería de la industria del turismo en Colombia sin la violencia? ¿Cuál sería el desarrollo derivado del turismo en las zonas más llamativas de Colombia? ¿Cuánto hubieran aprovechado las comunidades sus territorios tanto en temas económicos como en los intercambios culturales y en las posibilidades de mostrarse y sentirse parte del mundo? El presidente de AVIATUR ha resistido y persistido, en medio del conflicto, en su apuesta por el turismo. Sin embargo, en su historia se entrevé la añoranza por la posibilidad, y por el potencial de este país, de no ser por el conflicto armado que todo lo dificulta, que todo lo limita, que todo lo anula.

Algunos habitantes de Ituango han hecho énfasis en las consecuencias, y de las imposibilidades de Ituango ante la presencia del conflicto. Fuga de talentos ante el desplazamiento; posibilidades de inversión frustradas por el miedo a

las vacunas y la extorsión; empleadores y empleos perdidos. “¿Quién va a querer invertir en ese momento en Ituango con la situación en la que estaba y está? ¿Quién, de otro lugar, va a querer hacer una inversión acá? ¿Quién se anima dentro del mismo municipio a hacer una inversión si quedamos a la deriva sin saber si podemos seguir en el territorio? Económicamente, las respuestas a estas preguntas han hecho que Ituango pierda oportunidades de seguir desarrollándose”.

Recomendación:

• ***Esta es una invitación a evaluar los costos de la guerra, a imaginar el panorama nacional si se pudiera prescindir de la violencia y a rechazarla desde todos los sectores como un medio de acción política. Es necesario representar y mostrar la forma en que las acciones violentas contra el sector productivo como parte de una guerra contra el modelo económico, perpetúan el espiral de violencia, generan entornos para la acción de grupos armados ilegales y economías ilícitas, al tiempo que niegan oportunidades de desarrollo y el ejercicio de derechos fundamentales.*** A la par, un llamado a enfocar los esfuerzos estatales en procesos participativos que fortalezcan los lazos comunitarios, las estrategias de resistencia, e incentiven estrategias locales de paz. Estas estrategias, además de resistir y hacerle frente a la violencia, pueden ser la posibilidad para que las comunidades se piensen, imaginen un presente y futuro distinto al de la guerra.

Qué importante será para la verdad y la memoria sobre la violencia en Colombia que se dé cuenta de los patrones de victimización de cientos de miles de colombianos que son parte del sector productivo y hacen parte de los grupos vulnerables que fueron y en muchos casos siguen siendo despojados de su propiedad y desplazados de sus territorios, y también de quienes decidieron resistir pero viven “entre la espada y la pared”, entre el miedo y el silencio.

Los procesos de construcción de memorias suelen ser útiles para estos fines. Las personas, a través de las bases sentadas por el pasado traumático, otorgan sentidos a los recuerdos y crean principios de acción basados en los significados otorgados. El futuro se define en función de esos principios que buscan trascender el doloroso pasado y encontrar ejemplaridad y utilidad en los recuerdos.

10. Las memorias sobre las guerras suelen calificar a las empresas como villanos y asignarles responsabilidades a partir de narrativas que crean generalidades sin sustento ni evidencia. Sin embargo, poco se ha hablado de las oportunidades creadas por las empresas, los comerciantes, los pequeños emprendedores, en medio del conflicto.



• Jaime Restrepo, quien vivió gran parte de su infancia en Mapiripán y hoy trabaja en la empresa palmera Poligrow, defiende a ultranza el desarrollo socioeconómico del municipio gracias a la llegada de esta apuesta económica. A pesar de la violencia y las dificultades, Poligrow decidió quedarse. Compró tierras, generó empleo, se comenzaron a pavimentar las vías, bajaron los precios del mercado en el municipio. Poligrow es hoy una oportunidad de transformación y de transición de la violencia a la productividad económica. Adicionalmente generó un efecto no planificado. Ayudó a que se creara un entorno de emprendimientos y un proceso de mercado espontáneo que contribuyó a aumentar la oferta y disminuir precios, beneficiando a muchos, impulsando una transformación socioeconómica y una vocación productiva que pasó de la coca a los cultivos lícitos. ***“Para nadie es un secreto que de los ochentas para adelante, Mapiripán vivió de la coca. Y eso genera una cultura de la vida fácil, del que manda, del que dice quién entra, quién no entra, que era el mismo dueño de las tiendas que venden las cervezas, del mismo dueño del billar. Entonces yo creo que, cuando llega una empresa como Poligrow, y empieza a traer desarrollo, que empiezan a ver camiones llegando, y que ya la cerveza no costaba 10 mil, sino que vale 5 mil; y que el galón de combustible no vale 50 mil sino que vale 8.900, pues genera una competencia a la que no estaban acostumbrados, y su manera de defenderse es violenta”***

Recomendaciones:

• El informe de la Comisión de la Verdad es una oportunidad histórica para ayudar a superar el conflicto armado colombiano. Escuchar, de forma amplia, las verdades de la guerra, permite ampliar el espectro sobre las versiones de la violencia. Si bien su mandato temporal está por terminar, los documentos, los informes son un abrebocas de la misión que como sociedad tenemos. Insistir y buscar testimonios que representen todas las aristas del conflicto es lo mínimo que podemos hacer para luchar por la verdad. ***Entre esas verdades, debe reconocerse la labor de muchas empresas, de pequeños productores, comerciantes, campesinos, en el desarrollo y la generación de oportunidades donde el Estado nunca llegó.*** A razón de sus apuestas en el territorio, varias han sufrido de la victimización en las regiones donde hacían presencia por representar una alternativa a la ilegalidad. Este compromiso con la verdad, con el reconocimiento de los hechos y los actores, es apenas el inicio del Sistema Integral de paz que, a fin de cuentas, busca garantizar la no repetición del todo este dolor.

• Será de la mayor importancia que se reconozca la incidencia positiva de la función empresarial en la transformación de los territorios y la construcción

de paz. Historias y testimonios como los contenidos en este informe sobre Tumaco y Mapiripán son un importante reflejo de esta realidad, donde la empresa privada se vuelve en una oportunidad para que muchos puedan salir de los cultivos de coca y del sometimiento de los grupos criminales que los controlan, a un ambiente empresarial donde encuentra oportunidades de desarrollar un trabajo digno y con garantías, lo que permite al mismo tiempo promover una cultura de la legalidad e incentivar una cultura de emprendimiento.

A manera de reflexión final

El desarrollo humano, económico y social es casi imposible en un ambiente tan adverso al emprendimiento y en un entorno en el que los jóvenes no ven posibilidades para adelantar un proyecto de vida por sus propios medios. Nuestro proceso de construcción de nación necesita reconocer que la paz no es solo una ausencia de conflicto, sino la generación de las condiciones para que se pueda consolidar un entorno para la innovación, la creatividad, la productividad, el progreso y la prosperidad, en una cultura que reconozca y valore la función empresarial y el papel de todas las personas que hacen parte del sector productivo y contribuyen al mejoramiento y el avance de sus comunidades, no solo en términos económicos sino institucionales, políticos, cívicos y culturales.

Sin embargo, la ingeniería de la violencia puesta en marcha por diversos grupos armados y delincuenciales ilegales, afecta de manera directa a millones de colombianos por distintas razones. Tan diversos han sido los patrones de victimización como la pluralidad de testimonios que surgen de estos. Víctimas directas e indirectas, oportunidades perdidas, estigmatizaciones y desconfianza, son el resultado de décadas de conflicto que no pueden ser convenientemente seleccionadas para contar la verdad y la historia sobre nuestro trasegar como nación durante más de medio siglo.

La construcción de una verdadera paz no puede ser objeto de la instrumentalización por razones ideológicas ni estar caracterizada por sesgos y prejuicios. La convivencia y la democracia para que sean reales, deben ser plurales. Es por esto que el esclarecimiento de la verdad tiene un mandato moral de reconocer y dar cuenta de la victimización que sufrieron millones de colombianos por estar vinculados al sector productivo.

Las tesis y teorías sobre la violencia civilizatoria o sobre la instrumentalización de grupos criminales para la supuesta expansión del mal llamado modelo “neoliberal” deben contrastarse con los testimonios, datos y evidencia disponible, para que las dinámicas de la violencia no se utilicen por quienes pretenden construir narrativas ideológicas al amparo de postulados académicos con el fin de estigmatizar al sector productivo, en su interés por atacar el modelo de libre mercado. Esta es una referencia importante, ante las posiciones escuchadas por el ICP, en el marco de las actividades de relacionamiento de la CEV con el sector privado.

Es necesario reconocer que en el centro de la guerra insurgente, la propia naturaleza de la combinación de todas las formas de lucha no solo implicaba la extracción de rentas ilegales a las personas vinculadas al sector productivo, sino que tenía como objetivo político, usar mecanismos y tecnologías organizativas de la violencia para desincentivar la función empresarial y acabar con el espíritu emprendedor, evitando así la consolidación de la economía legal y la generación de oportunidades de desarrollo socioeconómico. Esto permitía instaurar monopolios de la violencia para el control territorial, de la población y de los medios de producción para la consolidación de economías ilícitas.

La violencia física y la construcción de imaginarios contra el sector productivo han sido sistemáticos, observando una táctica de guerra como parte de una estrategia que obedece a un plan de toma del poder o de ejercicio temporal de este y fundamentado en ideas políticas que se basan en el uso de la fuerza y en la coerción para restringir las libertades económicas, la libre iniciativa, el emprendimiento y la productividad de las comunidades. Los comerciantes, empresarios, proveedores de bienes y servicios, los trabajadores y sus entornos familiares, han terminados sometidos a una servidumbre en beneficio de los grupos armados y organizaciones criminales, y esta situación debe visibilizarse para evitar su repetición y acabar con los ciclos de violencia.

La victimización y sus afectaciones no son solo sobre la vida, integridad y propiedad de las víctimas del sector productivo, sino sobre todo el tejido social, minando la confianza y negando la generación de oportunidades para todos. La violencia armada ha provocado estigmatizaciones, miedo y desincentivos para el desarrollo económico y social.

La estigmatización como ya se ha señalado, se da en dos espacios que terminan por revictimizar a quienes han sufrido de la violencia por ser parte del sector productivo. Por un lado, en sus propios territorios y en el marco de

las dinámicas del conflicto, sufren estigmatización quienes se oponen a los actores criminales, y son señalados de ser colaboradores de un bando o de otro. Por el otro, en distintos estamentos de la política y la academia, donde son estigmatizados los actores del modelo económico, a quienes se les desconoce su carácter de víctimas, se minimiza el impacto de los hechos victimizantes sobre su vida personal y familiar y las afectaciones por razones socioeconómicas, y se les busca asignar responsabilidades en carácter de victimarios por parte de activistas ideológicos.

Se espera que este informe aporte al trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, así como a reconocer la complejidad sobre la violencia en Colombia, sus causas y dinámicas,. De igual forma, tenemos la esperanza de que al mismo tiempo, sirva para imaginar respuestas más integrales para la estabilización y la consolidación territorial, permitiendo una construcción de paz efectiva y garantizando el respeto a los derechos humanos de todos los colombianos, el ejercicio pleno de las libertades económicas, el cese definitivo de la acción política violenta y el sometimiento de los grupos criminales a la justicia.

En este propósito esperamos que este informe contribuya a avanzar en clave de lo que Boris Salazar y María del Pilar Castillo (2001) proponen para:

“explorar qué tipos posibles de orden y de arreglos institucionales, que no pasan por la autoridad de un Estado centralizado y absoluto, y que de hecho ya están presentes en nuestra realidad podrían servir como el punto de partida de una nueva institucionalidad, constituida por un Estado mínimo pero legítimo”.

Lo anterior puede verse reforzado si se reconoce que “el sistema de empresa privada y de mercado es un sistema que puede darle a la población libertad con prosperidad” tal y como lo profesaba Hernán Echavarría Olózaga.

Este documento es un aporte del Instituto de Ciencia Política ICP, en el marco de sus actividades meritorias como organización de la sociedad civil, a la construcción de paz, verdad y memoria. Se espera que los testimonios, las conclusiones y recomendaciones se tomen en consideración en el Informe Final que elaborará la CEV en el marco de su mandato, evidenciando las vivencias de un sector que ha sido invisibilizado y estigmatizado como lo es el que integran las personas que en el país han sufrido los horrores de la violencia por ejercer

actividades productivas, y que han quedado sometidos a las distintas formas de presión y represión criminal por parte de los grupos armados y delincuenciales al margen de la ley.

El contenido de este informe aporta significativamente al esclarecimiento de la verdad y la construcción de nuestra historia como nación, para que las generaciones presentes y futuras, y para que en los colegios, las universidades y las comunidades se conozca y reconozca que existe una relación entre las libertades económicas, la paz y el progreso, y la forma en que se han causado impactos negativos en las comunidades donde la violencia limita el ejercicio de estas libertades, y por lo tanto se consolidan dinámicas de conflictividad, criminalidad, ilegalidad e inseguridad, privando a los ciudadanos de su dignidad, derechos humanos fundamentales y de las oportunidades de desarrollo personal, familiar y comunitario.

Además, es necesario que la verdad sobre el conflicto dé cuenta de la forma como la función empresarial ha servido para impulsar transformaciones positivas en los territorios, ayudando a minimizar el impacto de las economías ilegales y generando oportunidades. La narrativa sobre el conflicto y las recomendaciones para la no repetición debe considerar que al tiempo que los ciudadanos gozan de las condiciones para emprender en diversas actividades productivas y generar bienestar económico para ellos y sus comunidades, están ayudando a cambiar entornos de violencia por entornos de paz y convivencia. Es decir, existe un vínculo virtuoso entre el pleno ejercicio de las libertades económicas y la construcción de paz.



Referencias:

- Echavarría, Hernán. *Macroeconomía y partido liberal*. p. 313. Citado por Bernal, M. (2007). Hernán Echavarría Olózaga, el empresario en su dimensión pública, política y social. p. 211. Recuperado de <https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/9579/u295302.pdf?sequence=1>
- Elizabeth Jelin. *Los trabajos de la memoria*, pp. 1-62, Madrid: Siglo XXI, 2002. https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/ddhh-memorias-patrimonio/Los_Trabajos_de_la_Memoria.pdf
- Pitkin, H. F. (2004). Representation and democracy: uneasy alliance. *Scandinavian Political Studies*, 27(3), 335-342.
- Salazar B. & Castillo M. (2001). La hora de los dinosaurios. Conflicto y depredación en Colombia. Colección Sociedad y Economía No1. pp. 14. Bogotá: Centro de Estudios de la Realidad Colombiana CERED, CIDSE-Universidad del Valle.
- Sánchez, G. (2008). Tiempos de memoria, tiempos de víctimas. *Análisis político*, 21(63), 3-21.
- Tzvetan Todorov. *Los abusos de la memoria*, pp. 11-69, Barcelona: Editorial Paidós, 2000.

SOBRE EL ICP

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga – (ICP) es un centro de pensamiento de origen empresarial fundado en 1987 como una organización sin ánimo de lucro, apartidista, de carácter privado e independiente. Por cuarto año consecutivo el ICP ha sido considerado como uno de los mejores centros de pensamiento de Colombia y de la región, de acuerdo con el Go Global To Think Tanks Index, elaborado por la Universidad de Pensilvania.

El ICP defiende y promueve las libertades civiles y económicas, el Estado de derecho, el gobierno limitado, la economía de libre mercado, los derechos de propiedad y los principios de la democracia liberal. El ICP trabaja en la generación de conocimiento para contribuir desde la sociedad civil al fortalecimiento institucional, al desarrollo económico y al progreso social de Colombia, a través de tres líneas de acción: **la investigación, la difusión y la formación.**

Sus proyectos y actividades buscan incidir ante los tomadores de decisión para que en la formulación de políticas públicas se garanticen el Estado de derecho, el imperio de la ley, la seguridad y las condiciones que faciliten la función empresarial en un entorno de libre mercado. Ante la opinión pública, el ICP difunde las ideas de la libertad económica y fomenta en las nuevas generaciones un sentido crítico frente a proyectos populistas, colectivistas y estatistas que buscan restringir las libertades y la propiedad privada, así como intervenir en la economía y en la vida de los ciudadanos, y de aquellos que justifican y validan el uso de la violencia como forma de acción política.

Desde el año 2019 el ICP puso en marcha el proyecto “Víctimas del Conflicto Armado en Razón de su Vinculación al Sector Productivo” con el fin de presentar un informe ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que permita promover el diálogo y la reconciliación nacional a partir de la generación de conocimiento y la sensibilización para superar los prejuicios que conllevan a la revictimización, así como a reconocer que la comunidad empresarial ha sufrido el dolor de la violencia, sigue siendo vulnerable ante los actores armados ilegales, y no puede serlo frente al Estado colombiano. Sus tragedias humanas y familiares no deben quedar en el olvido.



INICP

DESDE 1987

2021

